

Notas del mes

Renace la austeridad

Por *Albert Recio Andreu*

Ucrania y el movimiento por la paz

Por *José Luis Gordillo*

La memoria democrática: una tarea para el *demos*

Por *Antonio Madrid Pérez*

Una ola de calor, la desigualdad y el derecho del cambio climático en un fin de mundo

Por *Márcia Rodrigues Bertoldi*

La izquierda alternativa ante una perspectiva peligrosa

Por *Albert Recio Andreu*

Ensayo

El capitalismo verde ante la desintegración de la globalización neoliberal

Asier Arias

Roja y asertiva. La República Popular China avanza con guion propio: dos respuestas

Rafael Osete

Las clases sociales

Antonio Antón

Lo que sabemos sobre las privatizaciones sanitarias

Marciano Sánchez Bayle y Madalina Crisbasiu

Sesenta años de la riada de Sabadell de septiembre de 1962: ¿pudo evitarse la tragedia?

Soledad Bengoechea

El papel de las mujeres en la independencia de Argelia

Houria Sabri Benaziza

El extremista discreto

Siete puntos de calor y una noticia inesperada

Maqui

De otras fuentes

Luces y sombras de Mijaíl Gorbachov (1931-2022)

Rafael Poch de Feliu

Giulia Adinolfi: la semilla roja del feminismo catalán

Marta Román

¿Hay que abandonar el feminismo?

Fundación de los Comunes

Contra el capitalismo del desastre

Yayo Herrero

El capitalismo verde es un mito

Adrienne Buller

¿Reducir el consumo de energía? Sí, y mucho más

Fernando Luengo

La guerra, la inflación y la hidra de la revolución

Josefina L. Martínez

Renovarse o morir

Rafael Poch de Feliu

La nueva guerra de la OTAN y la gran secesión

Rafael Poch de Feliu

Giraud sobre Ucrania: "Negociación, o será destrucción total"

Andrea Tornielli

Memoria histórica y colonialismo

Iñaki Tofiño

Comemos todas o el gobernador al río

Gustavo Duch

Ayuso y el sheriff de Nottingham

Agustín Moreno

La Biblioteca de Babel

Desaparecidos

Gabriel Gatti

El bazar de la memoria

Verónica O'Keane

Futbolistas de izquierdas

Quique Peinado

... Y la lírica
Ana Luísa Amaral

Renace la austeridad

Cuaderno pandémico: 12

Albert Recio Andreu

I

Ser presidente de Francia obliga a realizar proclamas contundentes. Es lo que tiene formar parte de una cultura que, desde la Revolución de 1789, se vio a sí misma como centro de la nueva civilización. Lo hizo Sarkozy en la crisis de 2008, al proclamar la necesidad de transformar el capitalismo, y lo ha repetido Macron al anunciar “el fin de la abundancia”. Frases vacías, pensadas para impactar en los medios, pero que conectan con algunos aspectos relevantes de la realidad. Les dan un cierto contenido. Ya sabemos que la reinención del capitalismo consistió en salvar al sistema financiero y endurecer las políticas neoliberales. Ahora nos anuncian directamente que lo único que podemos esperar son políticas de austeridad más o menos radicales. Una situación que llevan tiempo experimentando importantes capas sociales de los países capitalistas desarrollados y la inmensa mayoría del resto de la población mundial.

El concepto de austeridad renace en cada fase crítica del capitalismo. Se utiliza con fines variados, aprovechando que se ofrece a una variada gama de interpretaciones. En la crisis de la década de 1970, la llamada a la austeridad estuvo fundamentalmente dirigida a justificar la devaluación salarial, y liquidar los mecanismos de indexación salarial con el argumento que tenían un fuerte impacto inflacionario. Fue también el momento en el que se puso en circulación el concepto de “inflación subyacente”, que sólo mide las variaciones de los precios sin tener en cuenta los aumentos de la energía y las materias primas. Se trataba de otra forma de justificar reducciones de salarios reales en épocas de inflación de precios energéticos. En la crisis de 2008-2010, el concepto se concentró más en el espacio de las políticas públicas. A los países endeudados se les acusó de haber gastado por encima de sus posibilidades, y se forzaron dolorosos recortes del gasto público. En este caso, la austeridad se centró en los recortes presupuestarios y las reformas de las pensiones públicas. Se hizo un menor énfasis en las cuestiones salariales porque hacía tiempo que los sindicatos eran débiles y se había desmantelado el sistema de protección de rentas. Lo que no impidió que en países como España se aprobará una reforma laboral radical, que incorporaba de facto una enorme devaluación salarial.

Ahora, la llamada a la austeridad parece tener dos objetivos: el primero es impedir que renazcan las demandas de indexación de rentas. El discurso

dominante es que la inflación ha venido de fuera y todos tenemos que contribuir a frenarla. Hay una reiterativa voluntad de presentar los fenómenos económicos, fundamentalmente de raíz social, como si fueran fenómenos meteorológicos a los que simplemente cabe adaptarse (aunque hoy sabemos que los comportamientos sociales influyen poderosamente en el clima). En segundo lugar, parece ser un objetivo del concepto de austeridad el mentalizar a la población ante posibles recortes de suministros, especialmente energéticos, en los próximos meses. En todo caso, se trata siempre de un discurso genérico, en el que parece que todo el mundo tiene la misma cuota de responsabilidad en el gasto excesivo. Y, sobre todo, donde la llamada al sacrificio se acaba concentrando en la población de a pie.

II

La idea de austeridad tiene otro sentido para la izquierda. La crítica al consumismo por sus efectos ecológicos y sociales apuntan a la necesidad de potenciar formas de vida más austeras, con menos despilfarro material, con menos tiempo dedicado a producir bienes dañinos. También apunta a otro tipo de despilfarro: el de la proliferación de actividades de dudosa utilidad, diseñadas para proteger desigualdades, privilegios, o simplemente a restañar los mil y un efectos perversos (las externalidades negativas, los costes sociales) que genera el funcionamiento habitual del capitalismo “normal”. En este sentido, la austeridad tiene tanto de renuncia a un consumo desaforado, como de demanda de mayor racionalidad social y ecológica.

Pero esto tiene poco que ver con las propuestas de austeridad que emanan del poder, por varias razones básicas. En primer lugar, porque las presiones actuales se centran en las rentas salariales directas (salarios) e indirectas (pensiones), sin que incorporen una propuesta seria de control de las rentas no salariales. Tampoco tienen en cuenta la existencia de desigualdades y de sectores de la población que están en situaciones de depauperación. Las pensiones y rentas públicas son fáciles de controlar (dejando de lado la respuesta social que pueda provocar una política de recortes), basta un trámite presupuestario. Los salarios también, pues dependen de una negociación colectiva puntual y, en muchos casos, bastante centralizada. Basta convencer a los líderes sindicales. Las otras rentas son mucho más difíciles de controlar, porque dependen de los precios que fijan las empresas, en un ejercicio individual y extendido en el tiempo. Sólo pueden regularse con mecanismos como el control de precios o, a posteriori, con cargas fiscales y sanciones a las empresas que han realizado subidas de precios abusivas. Ambas actividades —control de precios o de beneficios— exigen contar con un aparato de supervisión administrativo potente y técnicamente solvente, que no es el caso en la actualidad. Hace años que la Economía dominante ha impuesto la idea que intervenir los mercados es mala cosa (Stiglitz, el Nobel

de Economía más radical, ha escrito buenos trabajos mostrando las mil y una irregularidades de los mercados reales, para acabar casi siempre con una profesión de fe en la competencia perfecta), y carecemos de un buen sistema institucional que sirva, cuando menos, para detectar las situaciones oligopolistas, los abusos de poder y los cuellos de botella de los sistemas productivos.

Las instituciones reguladoras de la competencia en teoría se encargan de ello, pero parten de un enfoque inadecuado (solo hay manipulación del mercado cuando hay colusión), carecen de recursos y casi siempre acaban controladas por los grupos económicos que pretenden regular. Recientes ejemplos de la CNMC española son ilustrativos: descubren tras veinte años un reparto de obra pública entre siete empresas que han actuado a la vista de todo el mundo; elabora un informe sobre el sector de pisos turísticos que más bien parece un panfleto del propio *lobby*; la actual presidenta se tiene que abstener en numerosos informes porque era la representante legal del *lobby* al que hay que regular, etc. Sin una propuesta seria de cómo piensan regularse las rentas del capital, toda política de austeridad es un simple eufemismo clasista.

En segundo lugar, una política de austeridad debe basarse en garantizar la cobertura del nivel de vida básico a todo el mundo, y debe ser más rigurosa con las rentas elevadas, las que consumen mayores cantidades de recursos. En la mayoría de las sociedades de clases el consumo desmesurado de las élites y su exhibición ostentosa han ido de la mano de la miseria de los demás. Una política de austeridad decente debe incorporar tanto mecanismos de sanción al consumo excesivo como garantías de rentas a los sectores más necesitados. Técnicamente, pueden diseñarse muchas fórmulas: impuestos, esquemas de rentas, subvenciones o controles de precios básicos... Pero su implementación exige un debate social previo que justifique tanto su introducción como la vía que se considere más eficiente y práctica de llevarlo a cabo. Las actuales demandas de moderación que toman a todo el mundo por igual no son de recibo. Como ya he comentado otras veces, el mismo hecho de tomar un único IPC como expresión de la inflación (y acabar diciendo que todos somos un $x\%$ más pobres) incluye en sí mismo un espejismo. Se puede llegar a un mismo aumento del IPC por vías muy diversas, cada una tiene unos impactos distributivos diferentes porque los consumos de la gente difieren (básicamente en función del nivel de renta). Y, por eso, debemos exigir que haya análisis más finos sobre cómo impacta la inflación en las rentas más bajas con el objetivo de elaborar buenas medidas de garantías de rentas básicas.

En tercer lugar, la austeridad requiere una reorientación global de la vida económica y social. No se trata de la austeridad del tacaño, obsesionado en

acumular dinero y casi siempre tirano con el consumo de los demás (y bastante condescendiente con el propio). Se trata de una reorganización social que garantice bienestar básico, que genere espacio y tiempo para que todo el mundo pueda vivir una vida aceptable. Y de la que pueden detectarse trazas en muchas experiencias humanas. Precisamente esta es la cuestión a la que nos enfrenta la crisis ecológica: la de buscar formas de vida que tengan en cuenta los condicionantes naturales para garantizar universalmente derechos y una vida aceptable. Nada que ver con apelaciones a la austeridad que dejan fuera del debate social la propia organización material, eluden el debate sobre el modelo de producción y consumo, olvidan las desigualdades sociales y olvidan también las diferentes responsabilidades que cada grupo social tiene en el desencadenamiento de los problemas que nos amenazan.

III

En los próximos años, la amenaza de nuevas políticas de austeridad —en sus diversas variantes: salarial, gastos públicos, racionamientos— estará presente. Y por eso es más necesario que nunca contar con una estrategia para hacerles frente. Una estrategia que, a mi entender, debe pasar por confrontar las políticas reaccionarias de austeridad con las ideas que he tratado de comentar en el apartado anterior: equidad y justicia social, garantía de condiciones de vida básica, reorganización productiva y social en clave ecológica. No va a ser un ejercicio sencillo, pues las ideologías que sustentan las sociedades burguesas pesan mucho (y la masa de los que, a pesar de todo, participan de ella es lo bastante grande para garantizarles apoyos). Por ello, también, hay que pensar tanto en los grandes discursos como en las cuestiones de detalle. Porque a menudo alguna de las buenas propuestas de la izquierda se empantana por problemas de diseño, por no haber previsto todos los procesos para llevarlos a cabo. En este sentido, el caso de la renta básica es ilustrativo: la medida no es accesible a una parte importante de los potenciales beneficiarios porque no existen mecanismos adecuados a un acceso fácil ni un aparato administrativo volcado en conseguirlo.

Y, en este campo, conviene tener clara una cuestión. Cuando hay que racionar recursos (que es lo que plantea en parte la crisis ecológica), el racionamiento puede hacerse vía precios o mediante regulaciones administrativas. Ambas pueden ser eficientes y ambas tienen problemas. El de los precios es que el racionamiento beneficia a los ricos y expulsa a los pobres. El del racionamiento administrativo es que puede generar numerosas distorsiones por mal diseño o porque su aplicación está controlada por redes clientelares, amiguismos, etc. No hay que fijarse en la experiencia del mundo soviético para entenderlo; basta con ver lo que ocurre con el enchufismo presente en nuestra sociedad, y no sólo privado: es, por ejemplo, sospechoso que las

clases ricas acaben teniendo un acceso más fácil a la cirugía pública. Hay, pues, que pensar cuidadosamente en las propuestas, ver sus posibles fallos, seguir su aplicación.

Aunque la batalla principal es la de las ideas y las propuestas, en la medida en que persista una presencia institucional de la izquierda, este último aspecto va a jugar sin duda un papel en el desenlace del conflicto. La austeridad burguesa vuelve a llamar a la puerta. Nunca se fue. Es el sino de un sistema económico que acumula demasiadas contradicciones y que es manifiestamente incompatible con los límites del mundo natural. Hay que hacerle frente con un discurso realista que ponga en evidencia la necesidad de una profunda transformación social.

31/8/2022

Ucrania y el movimiento por la paz

José Luis Gordillo

Lleva razón Pascual Serrano cuando explica en su último libro que la guerra de Ucrania sólo puede tener tres finales posibles: la victoria de Rusia después de haber arrasado Ucrania, la victoria de Ucrania tras haber padecido una terrible devastación y un acuerdo de paz con concesiones de quien tenga más que perder si continúa la guerra y más que ganar si mañana cesan los combates (P. Serrano, *Prohibido dudar*, Akal, Madrid, 2022, p. 170).

A los ucranianos, por simples razones de bienestar material, les debería interesar la tercera opción. Y así lo parecía cuando se iniciaron las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú en diversas localidades de Bielorrusia y Turquía entre los meses de febrero y marzo pasados. En ellas, los representantes de Kiev afirmaron estar dispuestos a renunciar a la integración de Ucrania en la OTAN y, entre otras concesiones, a reconsiderar el status jurídico-político de las repúblicas del Donbás. Los representantes rusos, por su parte, se mostraron dispuestos a retirar sus tropas del territorio ucraniano. Dadas las circunstancias, no parecía un mal acuerdo. Pero, tras la matanza de Bucha —o, mejor dicho, de la cobertura mediática que hicieron los *mass media* occidentales de dicha masacre— y después de haber recibido promesas de ayuda económica y militar por parte de EE.UU., el gobierno de Zelenski afirmó que su objetivo era la victoria total sobre Rusia. Así lo ha reiterado al cumplirse los seis meses del inicio de la invasión y después de haber recibido la promesa de un incremento de la ayuda estadounidense de 3.000 millones de dólares a añadir a los 40.000 millones de dólares prometidos con anterioridad.

Por otra parte, para contribuir a dicha victoria muchos países de la Unión Europea, presionados por EE.UU. y sus aliados del este de Europa, han impuesto sanciones a Rusia, las cuales, a la vista de sus efectos demoledores sobre la economía europea, tal vez habría que comenzar a llamar las *autosanciones*.

En este contexto va a comenzar un curso que se prevé complicado por las consecuencias del alza del precio de los combustibles fósiles y la consiguiente inflación, hechos que los dirigentes europeos atribuyen en exclusiva a «la guerra de Putin» ocultando que son el resultado, en primer lugar y antes que nada, de la imposición de sanciones a la Federación Rusa decidida al otro lado del océano atlántico. Y, aunque nosotros somos de los que estamos convencidos de que el problema de fondo es «el fin de la abundancia», de la «abundancia de tierras, de materiales y del agua», como dijo Emmanuel

Macron el pasado 24 de agosto, es también evidente que la política de sanciones contra Rusia está *acelerando* las consecuencias de esa tendencia de fondo y que esa aceleración nos la podríamos haber ahorrado si los dirigentes europeos no hubiesen dicho perrunamente amén a los dictados de Washington.

Por eso es importante, de cara a las previsibles movilizaciones sociales contra la carestía de la vida del próximo otoño e invierno, que la izquierda y el movimiento por la paz tengan claras algunas cuestiones en relación con la guerra de Ucrania.

La primera de ellas es que a Europa y al mundo les conviene parar la guerra de Ucrania lo más rápidamente posible. El peligro de una escalada bélica que pueda desembocar en una guerra nuclear continuará latente mientras no cesen los combates. Y que para ello hay que presionar a Rusia, pero también a EE.UU., porque la guerra de Ucrania, desde su inicio en forma de guerra civil en 2014, es una guerra *subrogada, subsidiaria, vicaria o por delegación* (en inglés, una *proxy war*) entre EE.UU. y Rusia. Lo es porque reúne todas las características propias de ese tipo de guerras y porque así lo han explicado significados dirigentes estadounidenses. Lloyd Austin, actual secretario de defensa estadounidense, ha declarado que para EE.UU. el objetivo prioritario de su apoyo a Kiev es *debilitar* a Rusia (en declaraciones recogidas por la CNN el pasado 25 de abril). Con anterioridad, Leon Panetta, antiguo director de la CIA y antiguo secretario de defensa en la Administración de Obama, afirmó sin pelos en la lengua que para la hiperpotencia la guerra de Ucrania era «una *proxy war*» (en declaraciones recogidas por la ABC el pasado 17 de marzo).

[Como explicó en una nota anterior Juan-Ramón Capella](#), el origen de las guerras *subrogadas* se pierde en la noche de los tiempos, pero éstas se hicieron muy frecuentes durante la guerra fría del siglo XX, siendo la guerra de Corea de 1950-1953 la primera de ellas. Entonces, las potencias nucleares, para resolver sus conflictos de poder y al mismo tiempo evitar un choque militar frontal que les podía conducir a la mutua destrucción asegurada, preferían delegar en terceros la defensa de sus intereses geopolíticos. Para ello, las potencias nucleares mantenían relaciones de dependencia con los terceros subrogados mediante el asesoramiento político y militar, el aprovisionamiento de armas, la ayuda económica, la cobertura diplomática y mediática o mediante la provisión de información de interés militar, que es un factor vital en las guerras contemporáneas.

Como se puede ver, exactamente el tipo de relación que han establecido los gobiernos occidentales con el gobierno de Kiev desde 2014. Eso no implica afirmar que el gobierno de Kiev carece de agenda política propia. Sin duda la tiene, pero ésta debe necesariamente supeditarse a los proyectos e intereses

de quienes le proporcionan las armas, la información, el dinero, la cobertura diplomática y mediática, etcétera, pues de lo contrario el gobierno ucraniano corre el riesgo de quedar indefenso ante Rusia. De lo cual se infiere que uno de los finales de la guerra de Ucrania —y no sería el peor de todos los posibles— puede consistir perfectamente en un acuerdo entre el gobierno de EE.UU. y el de la Federación Rusa, hipotético acuerdo que los ucranianos no tendrían más remedio que aceptar y suscribir.

La segunda cuestión que la izquierda y el movimiento por la paz deberían tener clara es que deben unir sus esfuerzos al de los sindicatos, partidos y colectivos diversos que van a convocar movilizaciones contra el alza de los precios de la energía, la inflación y la carestía de la vida. Para lo cual deben convencer a los dirigentes sindicales que las reivindicaciones de alto el fuego inmediato en Ucrania, paz y desarme deberían sentir las tan suyas como la siente el más pacifista de los pacifistas. Ante sus posibles resistencias ideológicas a no cuestionar la propaganda bélica occidental (o a pensar que no conviene mezclar temas o que no hay que crearle problemas al gobierno de Pedro Sánchez y UP), es importante que los colectivos pacifistas sepan explicar con claridad que sólo la pacificación de Ucrania puede hacer factible una relajación del ambiente *neomacartista* que, junto a derechos y libertades, también limita la lucha sindical sin la cual nunca será posible que los costes de la crisis que se avecina no recaiga en exclusiva sobre los hombros de los trabajadores asalariados.

31/8/2022

La memoria democrática: una tarea para el demos

Antonio Madrid Pérez

El pasado 14 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó el dictamen de la comisión que ha elaborado el proyecto de ley de memoria democrática (se puede seguir el debate [en este enlace](#), de 2h 43' 50'' a 4h 26' 05''). Este proyecto de ley obtuvo 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones. El proyecto de ley, que ahora pasa al Senado para seguir su tramitación, una vez aprobado definitivamente sustituirá a la Ley de memoria histórica de 2007.

La futura ley de memoria democrática “repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista” y “declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar”. Pese a la claridad de este posicionamiento político, queda intacta la ley de amnistía de 1977. Incluye la ley una disposición adicional decimosexta pactada con EH Bildu que ha soliviantado aún más al PP, a Vox y a Ciudadanos, que se oponían al conjunto de la ley, y al sector tradicionalista del PSOE. Dice esta disposición adicional: “El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas”. Quienes se han opuesto a esta medida han visto en ella un ataque a la transición política española. Defienden a capa y espada que el contador se puso a cero en 1978 con la aprobación de la Constitución y las primeras elecciones democráticas. Rechazan que se reconsideren las violencias ejercidas contra quienes lucharon por la consolidación de la democracia en el periodo 1978-1983. Para ellos, el franquismo acabó con la aprobación de la Constitución del 78.

El PP, Vox, Ciudadanos y antiguos altos cargos del PSOE y de otras formaciones políticas alineados en torno al “Manifiesto por la concordia y en defensa de la transición” se refieren a esta ley como la *ley Bildu*. En su opinión es una ley de la memoria totalitaria, una ley ignominiosa que impone una visión sectaria de la realidad histórica. Para estas formaciones políticas, esta ley alimenta el revanchismo y los odios cainitas y supone una amenaza para el fundamento del consenso constitucional. Consideran que la revisión del periodo 78-83 llevará a justificar las acciones violentas que miembros de ETA protagonizaron durante esos años.

El conflicto sobre la memoria es un conflicto de quienes viven. Aunque se

hable de hechos pasados, y de lo que hemos de hacer hoy y en el futuro con relación a esos hechos, al elegir qué memoria guardar nos explicamos a nosotros mismos. Mediante la memoria explicamos tanto quiénes somos como quiénes queremos ser, individual y colectivamente. Para una parte de la población, y para el conjunto de los partidos políticos, la memoria sobre el régimen franquista es todavía una cuestión en conflicto. Para otra parte de la población, la más joven, la memoria sobre el franquismo cae más en la ignorancia, que ha sido facilitada por la política educativa de este país, que en el olvido.

Con frecuencia, el conflicto en torno a la memoria no es un conflicto sobre el sufrimiento de las víctimas, sino un conflicto a cuenta del sufrimiento de las víctimas. El sufrimiento, en cada época histórica, cuenta en la medida en que política y socialmente se quiere que cuente. La memoria democrática no es ajena a esta cuestión. La mejor ley posible puede ayudar a preservar la memoria, pero ninguna ley puede asegurar una memoria democrática que garantice que nunca más se repetirán, como se puede leer en el preámbulo del proyecto de ley de memoria democrática, los “enfrentamientos y cualquier justificación de violencia política o regímenes totalitarios”. La ley, así como las políticas públicas y las acciones a las que da pie, son instrumentos de acción pública. Han de hacer posible, entre otros objetivos, evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos como las que se cometieron durante y a cuenta del régimen franquista. La ley es un posibilitante del ‘nunca más’, de cualquier ‘nunca más’, pero, por importante que sea, es eso: un instrumento para hacer posible algo.

Se suele defender el deber de preservar la memoria como una actividad racional necesaria para la democracia. Sin duda que no se puede renunciar a ello. Sin embargo, las razones en conflicto nos conducen a las emociones que subyacen en la pugna en torno a la memoria y que afloran, por ejemplo, de forma visible en el debate parlamentario del pasado 14 de julio. Nuestra vinculación con la memoria, con el conflicto de la memoria, es racional y es emocional al mismo tiempo. A alguien con quien se debate sobre memoria se le podría decir: preséntame, háblame de tus emociones sobre las personas y colectivos de personas cuyo sufrimiento no consideras que ha de ser reconocido y recordado de igual forma que hacemos con otros sufrimientos. Háblame de lo que sientes acerca de las ideas que defendieron, de la forma de vida que tenían... En definitiva, háblame de ti.

Si pensamos en una memoria democrática que vaya más allá del gobierno estatal de la memoria, lo que es imprescindible si queremos evitar la confusión del *demos* con el estado, se ha de tener en cuenta un factor de difícil tratamiento. Además de las violencias a manos del aparato estatal, hay que tener presentes las violencias perpetradas por unos vecinos sobre otros

vecinos al amparo del régimen franquista: abusos, palizas, violaciones, asesinatos, rapiñas, justificación de la violencia arbitraria ejercida por agentes estatales o paraestatales, delaciones, aislamiento social...

La cuestión puede ser planteada en estos términos: ¿ha de abarcar la memoria democrática del *demos* estas violencias oportunistas? En mi opinión, sí. Y, en segundo lugar, si se considera que es importante para un *demos* democrático recordar que se dio este tipo de violencias entre iguales, por qué es importante preservar esta memoria de lo que fue. La respuesta directa a esta segunda pregunta es la siguiente: porque la memoria nos puede ayudar a elegir nuestro futuro. Y nuestro futuro nos lo jugamos también en lo que estemos dispuestos a hacer como *demos*, no solo en lo que haga o deje de hacer una estructura estatal.

El proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso recoge el 'deber de memoria'. Se le ha dado este contenido (art. 34): "Con el objeto de preservar en la memoria colectiva los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismo, las administraciones públicas desarrollarán todas aquellas medidas destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, puedan volver a repetirse". A tenor de este texto, las administraciones públicas tienen el deber de memoria y los ciudadanos serían los destinatarios de las acciones públicas de preservación de la memoria. Así dicho, estaríamos ante la administración de la memoria.

La cuestión puede ser planteada de otra forma, que no excluye la primera. Se admite mayoritariamente que la memoria nos ayuda a conocer y a entender nuestra historia colectiva. La memoria puede actuar como una herramienta que, como se dice en el preámbulo del proyecto de ley, nos ayude a detectar y desactivar las derivas totalitarias o antidemocráticas que crecen en el seno de nuestra sociedad. Por tanto, si se dice que las derivas totalitarias y antidemocráticas pueden crecer en la sociedad, se está indicando que el protagonismo lo tienen también las personas que forman parte de esa sociedad y no solo las instituciones estatales. Se hace referencia entonces a una doble realidad que ocupa un mismo escenario: la necesidad de controlar la acción de los agentes estatales (por ejemplo, para prevenir y evitar un golpe de estado como el del 36) y la necesidad de prevenir y evitar comportamientos sociales totalitarios o antidemocráticos, ya que quienes vivimos en sociedad no somos meros sujetos pasivos de un estado.

El reconocimiento de las violencias entre iguales tiene importancia para cumplir la exigencia de conocer la verdad de lo ocurrido y para complementar la garantía de no repetición: no repetir lo que otras personas hicieron sobre sus iguales ni colaborar en su repetición. La memoria democrática es una

tarea para el *demos* si queremos un *demos* que sea consciente de su propia historia y de su futuro posible.

30/8/2022

Una ola de calor, la desigualdad y el derecho del cambio climático en un fin de mundo

Márcia Rodrigues Bertoldi

Una ola de calor sin precedentes: el mes de julio de 2022

El Norte global pasa por una de sus peores olas de calor, con temperaturas que sobrepasan los 40 grados. Las regiones más afectadas son Europa, el norte de África, el Medio Oriente y Asia. El 13 de julio del 2022, [la Nasa divulgó el mapa de un mundo rojo](#), en llamas, que permite observar temperaturas de 42,2 °C en Sevilla (España), 46,5 °C en Ahvaz (Irán) y 37,6 °C en Shanghái (China). Según Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en [rueda de prensa el 19 de julio de 2022](#), las olas de calor serán más frecuentes e intensas al menos hasta 2060.

El calor desértico en zonas rurales y urbanas, entre otras cosas, provoca incontables incendios forestales e incrementa las muertes a causa del clima. En el caso de España, [según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales \(EFFIS\)](#), en 2022 se han producido 324 incendios y alrededor de 206.900 hectáreas de bosques han sido devastadas. En el mismo sentido, [según el Informe MOMO del 19 de julio de 2022](#), sobre la mortalidad diaria, en 2022, han muerto 2.988 personas en España a causa de las temperaturas extremas. Sólo en junio, se produjeron 830 defunciones atribuibles al calor.

En Reino Unido, Hamburgo y Escocia, las temperaturas llegaron a 40,3, 40,1 y 35 °C respectivamente, sus marcas históricas. En Groenlandia, a 15,6 °C, 10 grados más que lo normal, como puede verse en las desalentadoras [imágenes exhibidas por CNN/español](#).

Por otro lado, mientras el Norte arde, el Sur se hiela: Argentina y Chile padecen una ola de nevadas histórica, con mínimas hasta -16,5 °C. [En la foto publicada por la Nasa el 20 de julio del 2022](#), se puede observar un exponencial aumento de la nieve entre los años 2021 y 2022. [El reciente Informe de la OMM sobre el Estado del clima en América Latina y el Caribe](#) expone que los glaciares de los Andes tropicales han perdido, al menos, un 30 % de su superficie desde la década de 1980. En el caso de los glaciares de Perú, la pérdida supera el 50%.

A su vez, Australia sufre lluvias torrenciales, que han obligado a más de 85.000 personas al oeste de Sídney a dejar sus casas.

Desigualdad y el derecho del cambio climático

Naciones Unidas, al igual que [el Parlamento Europeo](#) y [la Comisión Interamericana de Derechos Humanos](#), ha optado por utilizar la expresión “emergencia climática” para tratar el fenómeno, al tratarse de la que más se acerca a la urgencia en la adopción de medidas objetivas y progresivas para contener el cambio climático. Noam Chomsky y Robert Pollin prefieren, en cambio, el término “crisis climática” **[1]**. Mientras que Bruno Latour se refiere a una “mutación climática” **[2]**, al entender que tratar a la situación climática actual como una crisis supone ver el problema como reversible, en vez de una transmutación hacia un mundo nuevo.

La emergencia climática es una realidad manifiesta. Desde 1990, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) viene presentando [Informes de Evaluación](#) sobre el estado global del clima. Sin embargo, los Estados avanzan poco en la implementación de las estrategias de respuesta propuestas para la mitigación y la adaptación. Con el resultado de que la población ya experimenta por sí misma el despliegue de las consecuencias. La ola de calor en el verano del Norte global del 2022 no hace más que poner en claro la falta de consideración política de lo demostrado por los científicos.

El comentado Informe de la OMM prevé que la temperatura global media anual entre 2022 y 2026 será de 1,1 °C y 1,7 °C más elevada en relación a los niveles preindustriales (1850-1900) y que hay un 93% de posibilidades de que al menos un año, entre 2022 y 2026, exceda la del más cálido (2016).

El referido fenómeno impacta directamente en los derechos humanos (por ejemplo, los derechos a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al medio ambiente equilibrado, a la vida, entre otros) y en la protección de la naturaleza y la fauna. Y aunque afecta a todas las personas, sus consecuencias son más impactantes sobre las de aquellos países con ingresos más bajos. Desde 2008, con [la Resolución 7/23](#), el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce esta relación, desarrollándola e informando sobre ella.

Ilustra muy bien el incremento de la desigualdad provocado por la emergencia climática [la segunda parte del 6.º Informe del IPCC, propuesta por el Grupo II](#), al afirmar la elevada vulnerabilidad al cambio climático a la que están expuestas las regiones y personas con bajos niveles de desarrollo: en los *hotspots* globales de alta vulnerabilidad humana (África central y oriental, sur de Asia, Américas Central y del Sur, pequeños estados insulares en desarrollo y ártico) se prevén 250.000 muertes hasta el 2050 a causa del calor, de la desnutrición, de la malaria y la diarrea. Asimismo, la producción de alimentos

ya es un problema en estas zonas —sobre todo en los lugares donde las personas no comen lo suficiente—, lo que produce un aumento del precio de los alimentos y de la consiguiente exposición a la pobreza.

Del mismo modo, el Informe del Banco Mundial, [*Shock Waves Managing the Impacts of Climate Change on Poverty*](#) estima que hasta 2030 la emergencia climática podría arrojar a más de 100 millones de personas a la pobreza.

La emergencia climática, pues, produce desigualdad, incrementa la pobreza y, en este sentido, exige justicia climática, que puede manifestarse en el derecho humano a un sistema climático seguro o “derecho del cambio climático”, a saber: el conjunto de instrumentos jurídicos aptos para proteger, garantizar y dar fuerza jurídica efectiva a los derechos humanos frente a las amenazas de la emergencia climática.

Teniendo en cuenta que los derechos humanos, además de surgir de las luchas sociales, deben garantizar determinados bienes y que para esto exigen condiciones materiales e inmateriales para ponerlos en práctica, es manifiesta la celeridad en circunscribir y asegurar a los seres humanos (igualmente a los no humanos y a la naturaleza) un sistema de protección jurídica capaz para hacer frente al clima cambiante.

Al lado sobre todo de las luchas sociales que la sustentan, la justicia climática depende de la construcción de un sistema de protección jurídica muy distinto al que conocemos, capaz de hacer frente al cambio climático. Y en este sentido, hasta ahora el derecho del cambio climático viene siendo desarrollado más desde los litigios climáticos que desde la aplicación de las normas internacionales y nacionales. Por ejemplo, el emblemático Caso Uganda, juzgado en 2019, ha obligado los Países Bajos a reducir un 25% de las emisiones de gases de dióxido de carbono respecto de los niveles de 1990.

Según el [*Sabin Center for Climate Change Law*](#), exceptuando los Estados Unidos, hay actualmente 598 litigios climáticos en el mundo. Los cuales se presentan como una refinada estrategia, en el campo de las instituciones, para avanzar en la protección del derecho a un medio ambiente equilibrado ejerciendo presión en el seno de la gobernanza multinivel.

El derecho es tan solo una de las herramientas para enfrentar la emergencia climática. Es preciso insertarlo dentro del pensamiento complejo que se está elaborando para frenar los efectos de la tragedia que se nos avecina: “(...) es evidente que las cosas están cambiando rápidamente y no en beneficio de la vida humana *tal como la conocimos*. No tenemos la más mínima idea de lo que hacer. El Antropoceno es el Apocalipsis en sentido etimológico y escatológico” **[3]**.

Notas:

[1] CHOMSKY, N.; POLLIN, R, *Crise climática e o Green New Deal global: a economia política para salvar o planeta*, 1ª edición, Roça Nova, Rio de Janeiro, 2020.

[2] LATOUR, B. *Onde aterrar? Como se orientar politicamente no antropoceno*, 1º edición, Bazar do Tempo, Rio de Janeiro, 2020.

[3] DANOWSKY, D.; DE CASTRO, E. V. *Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins*. Cultura e Barbárie, Florianópolis, Instituto Socioambiental, São Paulo, 2014, p. 35.

[Márcia Rodrigues Bertoldi es investigadora María Zambrano (Universitat de Barcelona 2022-2024) y profesora de la Universidad Federal de Pelotas (Brasil)]

27/8/2022

La izquierda alternativa ante una perspectiva peligrosa

Albert Recio Andreu

I

Es difícil saber si estamos ante un punto crucial de la historia. Más bien, creo que los grandes cambios tienen largos procesos de maduración, aunque la forma como se resuelven las coyunturas puede influir en las trayectorias. Y lo que es evidente es que en el presente se acumulan muchas circunstancias críticas. En primer lugar, la crudeza del verano europeo —con olas de calor, sequías y grandes incendios forestales— ha acrecentado la sensación de que el cambio climático es algo palpable. En los últimos años ya hemos tenido otros veranos calurosos y secos, pero el de 2022 marca un hito. En segundo lugar, la amenaza de una crisis energética, que ya se manifiesta en los precios y que genera el temor a futuros desabastecimientos. En tercer lugar, la inflación, en parte fruto de las dos cuestiones anteriores, pero propiciada por los problemas de funcionamiento del capitalismo global, de los poderes oligopólicos, de los mecanismos especulativos de los mercados financieros, y de las políticas nacionalistas que practican los grandes estados. Una inflación que golpea duramente a las clases trabajadoras y que tiene su expresión más cruda en temas como el acceso a la vivienda, los servicios básicos y la alimentación. En cuarto lugar, la guerra de Ucrania y la tensión chino-occidental, conflictos que pueden desembocar en salidas catastróficas y que contribuyen a realimentar todos los problemas. Y, en quinto lugar, la perspectiva, bastante probable, de que la extrema derecha venza en las elecciones italianas y contribuya a generar un efecto dominó en el que España sería el siguiente eslabón, visto el talante de nuestra derecha local.

Muchas cuestiones que exigen respuestas de gran envergadura, que comportan cambios sustanciales en la organización social, en las políticas, en las instituciones y en los comportamientos. Que sólo serán posibles si existe una masa social crítica que apoye estos cambios y tenga capacidad de bloquear las numerosas y variadas reacciones que se van a producir. Es necesario actuar en distintos niveles y frecuencias. Los grandes cambios sociales requieren de procesos sostenidos de consolidación de valores, percepciones, de alternativas. Pero hay que saber dar respuestas a cada situación concreta, sortear cada obstáculo. Necesitamos actuar en el tiempo largo y en el corto, y que entre ambos planos no se generen tensiones que lo manden todo al carajo.

II

La derecha lo tiene fácil. Tiene muchas bazas a su favor, y un marco institucional —a escala nacional e internacional— que impide los cambios necesarios. Un enorme y sofisticado sistema de propaganda y manipulación de masas. Recursos materiales que sostienen un enorme “ejército” privado de opinadores, controladores, bloqueadores y, cuando es necesario, de trabajos sucios. Juega también a su favor la fragmentación social y el aislamiento individual generado por las dinámicas laborales y las formas de vida que el propio sistema ha potenciado. Y cuenta, además, con unos oponentes poco consolidados, con débil implantación social. Desorientados frente a la acumulación de procesos destructivos de los últimos cincuenta años. E incapaces de reconstruir un proyecto consistente tras la constatación del fracaso de la experiencia soviética. Pero la derecha no tiene proyecto. Tampoco es un bloque homogéneo. También en sus filas proliferan proyectos estafalarios que resultan contradictorios con el modelo social dominante. Y, sobre todo, no tiene ninguna respuesta coherente frente a la acumulación de problemas. Les queda la confianza irracional en que el desarrollo tecnológico podrá hacer frente a todos los problemas. Y la tranquilidad de que, al menos a corto plazo, cuenta con una colosal barrera de protección.

Las propuestas de la derecha ultra (que es dominante en estos tiempos) son completamente inocuas para hacer frente a los problemas estructurales, pero tienen un enorme potencial lesivo. Ya lo hemos comprobado cuando se ha tenido que hacer frente a la pandemia de la covid-19 con un sistema sanitario enormemente debilitado por los recortes y externalizaciones de las políticas neoliberales. Se basan en explotar la resistencia al cambio de amplios sectores de población aculturizados por la propaganda del consumismo y el cultivo del ego. Se basan más en la indolencia y la rutina que en el cambio. Y en amplificar miedos irracionales. Y por todo ello son tan peligrosos. La crisis ecológica no conduce necesariamente a una sociedad mejor. Las viejas sociedades precapitalistas combinaron la miseria de muchos con enormes concentraciones de riqueza. Basta viajar para constatar los lujosos edificios que se construyeron para satisfacer las demandas de las clases adineradas. El crecimiento económico, basado en la explotación masiva de recursos naturales, permitió superar, en parte, el viejo modelo. Pero no hay garantías de que retomemos alguna variante de los viejos modelos en un mundo devastado. La historia no siempre transcurre bajo un guion lineal, basta recordar el caso de la esclavitud para darse cuenta. Y las propuestas de la derecha radical (no hay otra) abren las puertas a desastres en cadena.

III

A esta situación se llega en un contexto especial. Es la primera vez, salvando el período de la Guerra Civil, en la que un partido de izquierdas está en el Gobierno, y participa en algunos gobiernos autonómicos y ayuntamientos

importantes, como Barcelona. Y, a pesar de sus muchas debilidades, condicionamientos y limitaciones, su presencia ha permitido introducir políticas beneficiosas para la población más desfavorecida y, tímidamente, reformas con sentido ecológico. Los casos más conocidos son, claro está, el de los ERTE, la subida del salario mínimo, la reforma laboral, la ley del “sí es sí”, etc. Pero, si se analiza al detalle, pueden encontrarse otros muchos cambios. En Barcelona, por ejemplo, las partidas de gasto que más han crecido los últimos años han sido la del gasto social y el transporte público (y, recientemente, la nueva contrata de residuos cuyo recorrido se verá en los próximos años). Está bastante claro que cualquier Gobierno a la derecha empeorará la situación. En muchos casos hasta niveles insoportables. No es que no haya deficiencias y que debamos evitar críticas, simplemente constatar que aún en un marco tan condicionado como el actual, la presencia de esta izquierda es, cuando menos, necesaria para evitar la debacle social.

La llegada de esta izquierda a los distintos espacios del poder político fue el resultado de las movilizaciones generadas como respuesta a las medidas de ajuste neoliberal que tuvieron en el movimiento 15-M su mayor expresión. Se trató también de la eclosión de nuevos lideratos, de gente joven, en bastantes casos ajena a la vieja izquierda y que optaron por una “guerra de movimientos” en busca de un cambio radical. Figuras como Pablo Iglesias y Ada Colau son representativas de este proceso. En la primera fase obtuvieron resultados espectaculares, especialmente en las elecciones municipales de 2015 o las generales de ese mismo año. Pero con el paso del tiempo la situación se ha deteriorado. Rifirrafes internos, acoso externo de todo tipo, y el propio deterioro generado por la acción de gobierno, que nunca es capaz de transformar de inmediato todo lo que se pretende. Hoy el proyecto está congelado y es necesario replantear una nueva dinámica de activación. Entiendo que esto es lo que pretende el proyecto de Yolanda Díaz con “Sumar”.

Este nuevo proyecto nace, de entrada, complicado por la persistencia de las habituales rencillas entre las diferentes facciones de la izquierda, siempre más dispuesta a pelear sobre la base de la lógica de cada familia que a producir un proyecto común (leyendo entre líneas, estas tensiones pueden detectarse en las páginas de la prensa digital de izquierdas). Pero, tal como se está desarrollando, no consigo percibir que se trate de un proceso diferente a lo intentado otras veces. La propuesta de “escuchar” suena bien, pero es bastante vacua. Hay demasiadas voces y sensibilidades en el seno de esta base social para que de la simple escucha salga un resultado consolidado. Dependerá de a quién se escuche y cómo se filtre y se elabore lo escuchado. En un momento tan complejo, con tantas tensiones variadas, más que un proceso de escucha lo que hace falta es un debate organizado, que permita elaborar una propuesta de acción clara y que sitúe los debates irresueltos y

las cuestiones de largo plazo en un proyecto de trabajo consistente.

Los problemas citados anteriormente —inflación, cambio climático, crisis energética, guerra mundial, derechización social (la lista debe prolongarse con desigualdades, migraciones, etc.)— son todo menos de fácil solución. En muchos casos persisten puntos de fractura o tensión evidentes. El más obvio es el que separa lo que podríamos llamar *neolaborismo*, centrado en la mejora de derechos laborales y sociales (el que de hecho representa mejor la propia Yolanda Díaz a la que apoyan los sindicatos) y el que podemos llamar de ecologismo fuerte. La crisis ecológica es sin duda el mayor problema que afecta a la especie humana; la forma como se aborde tendrá importantes implicaciones en muchos campos. Por eso considero tan inadecuado no priorizar la reflexión y la propuesta en este campo, como el de limitarse a anunciar la necesidad de un cambio radical (o peor, de una crisis apocalíptica) sin entender que las respuestas sociales son complejas, y sin elaborar propuestas de acción a diversos planos. Un filósofo puede teorizar en abstracto, pero la política es otra cosa. Soy consciente de que en la anterior exposición he trazado una caricatura de los posicionamientos de la gente. En todas partes hay gente sensata que puede aportar mucho, pero lo que no veo es que haya un intento serio de abrir un debate integrador, constructivo que posibilite la creación de un discurso fuerte, entendible, movilizador.

Sugiero que, en lugar de limitarse a escuchar, sería mejor organizar buenos debates, bien preparados y estructurados, que posibilitaran una elaboración colectiva. De propuestas, de cuestiones irresueltas y de líneas de trabajo futuras. Para quitarle tensión, podría sugerirse que se organizara como cooperación entre medios alternativos, *think tanks* (los pocos que hay) y organizaciones sociales. La izquierda organizada es demasiado débil en cuanto recursos humanos, y debe dedicar demasiados esfuerzos a la lucha institucional para hacerlo sola. Es, como siempre, una modesta proposición, que requiere un trabajo previo para fructificar.

Sólo un apunte final. Los temas a abordar no pueden limitarse sólo a las cuestiones planteadas. La política de izquierdas hace mucho tiempo que no sabe cómo intervenir en un marco social dominado por la atomización y el individualismo. Que la derecha crezca en sus expectativas electorales en un período donde se ha evitado un desastre social y donde algunos derechos han mejorado obliga a una reflexión profunda. Y también aquí hace falta abrir un debate que permita hacer frente a la persistente intoxicación cultural.

30/8/2022

E nsayo

Asier Arias

El capitalismo verde ante la desintegración de la globalización neoliberal

1. Un funcionamiento normal patológico

La tradición de la economía política marxista que desemboca en autores como David Harvey o Michel Husson ha analizado con detalle la insostenibilidad socioeconómica del capitalismo. Hubo que esperar a la década de los setenta para que esta tradición comenzara a integrar en su análisis la insostenibilidad específicamente ecosocial del capitalismo, en una línea que se prolonga de Barry Commoner o Manuel Sacristán a John Bellamy Foster o Michael Löwy.

Lo primero que debe hacerse notar a la hora de tratar de cualquiera de esas formas de insostenibilidad es que el capitalismo, interpretado como un sistema socioeconómico basado exclusivamente en la iniciativa privada y la «libre competencia en el mercado», es algo que, sencillamente, no ha existido nunca. Un vistazo a la historia económica basta para constatar que todas las variantes del «capitalismo realmente existente» han consistido en diversas versiones de «economía mixta» asentadas en el amparo colectivo del poder privado.

Así, en lugar de iniciativa privada y libre competencia, lo que hallamos a todo lo largo y ancho de la historia económica del capitalismo son prolongadas intervenciones a gran escala destinadas a desviar la riqueza fruto del esfuerzo colectivo hacia la provisión de infraestructuras, la investigación básica, el desarrollo de tecnologías, la formación de trabajadores especializados, la subvención directa, el auspicio de los derechos de inversión o los periódicos rescates de los que depende el sector privado. No se conoce ejemplo histórico alguno de «mercados» capaces de funcionar en ausencia de estos mecanismos de protección colectiva del poder privado, sin los que tan siquiera existirían los principales sectores del capitalismo industrial (cf., v. g., Allen, 2011: 13; Chang, 2008; Chomsky, 1996: 47; 1997a; 1999; 2000: 192; 2014: 77; 2017a; Kocka, 2013: 109; Mazzucato, 2013). De hecho, el punto de inflexión en torno a 1820 al que Samuel Huntington se refirió como «la gran divergencia» consistió en la divergencia entre aquellos países cuyos Estados pusieron en marcha dichos mecanismos y aquellos otros a los que éstos no les permitieron hacerlo.

El pistoletazo de salida del desarrollo de las economías industriales nacionales sería también, a la postre, el del «mercado global». En realidad, ninguna

economía industrial estuvo nunca enclaustrada en sus fronteras nacionales: todas ellas dependieron siempre —antes ya de los orígenes del industrialismo— de formas internacionales de explotación, pero la globalización de la economía capitalista que se disparó a partir de la década de 1970 podía encontrarse ya en germen en las economías industriales nacionales que surgieran durante la «gran divergencia». Ese germen no es otro que la naturaleza autoexpansiva del capitalismo, que hace de su buen funcionamiento económico una disfuncionalidad ecosocial.

Si hubiéramos de buscar un solo factor al que atribuir la actual deriva hacia el desastre ecológico, el mismo sería indudablemente la contradicción entre la finitud de nuestro planeta y el imperativo de valorización del capital, que es la nota distintiva de cualquier economía capitalista concebible y se encuentra indisociablemente ligado a la necesidad de crecimiento.

Ese imperativo puede describirse como el de «transformar el dinero en más dinero» (Soler Montiel & Delgado Cabeza, 2018: 104), y nada tiene que ver con rasgos de personalidad o decisiones individuales: «las compañías no son personas que toman decisiones basadas en consideraciones morales, sino concentraciones de poder cuyo fin es obtener beneficios» (Rodríguez, 2020). «La decisión individual de los capitalistas de reinvertir la mayor parte de sus beneficios para generar más beneficios, que es la génesis del comportamiento colectivo depredador que muestran nuestras sociedades respecto de la biosfera, *no es estrictamente una decisión*». Se trata, más bien, de un «mecanismo automático, ciego»: el automatismo autoexpansivo que define al sistema socioeconómico capitalista (Santiago Muíño, 2018: 238-239) **[1]**.

Una economía capitalista es por tanto un dispositivo ciego, pero también mágico: el único dispositivo capaz de expandirse, de engordar exponencialmente, *ad infinitum*. Cuando esta magia no funciona bien hablamos de «crisis», pero aún no existe una denominación consensuada para la constatación de que es imposible que el truco funcione indefinidamente.

Es el automatismo autoexpansivo ínsito en el imperativo de valorización del capital el que hace que exista un rol institucional bien definido para los miembros de una junta directiva cualquiera: incrementar beneficios y ampliar cuota de mercado. Ahora que tanto se oye hablar de la «responsabilidad social corporativa», no está de más recordar en qué consiste, y quizá fuera Milton Friedman el que lo explicara con mayor claridad: la única responsabilidad social de una empresa privada es la de aumentar sus beneficios (Friedman, 1970), y de ahí que sus directivos deban dejar de lado cualquier otra consideración, pues no han de rendir cuentas ante las especies extintas, los ecosistemas devastados o las generaciones futuras, sino ante los accionistas, que no se acercan a la máquina del infinito por mera curiosidad.

Es por tanto comprensible que «las ‘fronteras naturales’ de la Standard Oil, el Deutsche Bank o la De Beers Diamond Corporation se sitúen en el confín del universo, o más bien en los límites de su capacidad de expansionarse» (Hobsbawm, 1987: 318).

Tal y como señalara Joseph Schumpeter, «capitalismo sin crecimiento es una contradicción en los términos» (Schumpeter, 1946: 198). Por su parte, el crecimiento indefinido es una imposibilidad material. Kenneth Boulding, expresidente de la *American Economic Association* y de la *American Association for the Advancement of Sciences*, lo expresó de forma memorable en su testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos a raíz del primer informe del Club de Roma: «quien crea que el crecimiento exponencial puede prolongarse indefinidamente, o está loco o es economista» (USC, 1973: 248).

A veces, aquella «responsabilidad corporativa» y aquellas fronteras en constante expansión topan con algunos estorbos, y así advertían ya en los noventa las principales luminarias de las «ciencias económicas» que las regulaciones ambientales de los países desarrollados comenzaban a asfixiar a los inversores, pero atisbaban un futuro esperanzador en el que los mercados globales «restringirían» esos «excesos» (Becker, 1993): incluso los más tímidos intentos de contener el exceso connatural al capitalismo —su sed de infinito— se les antojan excesivos a los fanáticos del exceso. Con todo, hay un estorbo contra el que nada podrán hacer los mercados globales y la buena disposición de nuestros amigos del tercer mundo para absorber nuestras «externalidades»: como recordaba recientemente un famoso alumno de Georgescu-Roegen, «la Tierra no se expande» (Marchese, 2022), y habría que añadir —con ese mismo alumno— «que no se puede quemar dos veces el mismo trozo de carbón» (Daly, 1997: 273); en otras palabras, las leyes de la termodinámica no son negociables.

La alternativa de la economía capitalista es por tanto la alternativa entre crisis y crecimiento. Dada la relación directa entre crecimiento económico y uso de recursos materiales y energéticos (cf., v. g., Hickel & Kallis, 2019; Arias, 2020: cap. 1, § 2.2, cap. 2, § 1.3), la alternativa de la ecología capitalista es la alternativa entre colapso y colapso. Las diferentes facetas de la crisis ecológica global en curso no son, pues, fallos del sistema capitalista, sino expresiones de su normal funcionamiento en nuestra era de extralimitación material (Röckstrom et al., 2009; Steffen et al., 2015) y descenso energético (Turiel, 2020).

«Nuestro estilo de vida ha descansado y descansa todavía hoy en la existencia de una oferta abundante y barata de combustibles [fósiles], que alimentaba el motor del crecimiento económico, motor que permitía sostener en los denominados países desarrollados cierto consenso social en torno a las

ventajas del mismo. Este motor y el coche que propulsaba ya no funcionan y el camino por el que circulaba ha dejado de ser transitable» (Luengo, 2022). La idea de que ese motor podría seguir funcionando y ese camino podría seguir siendo transitable se llama «desacoplamiento». La idea del desacoplamiento equivale a la del «capitalismo verde» y se reduce, en último término, a la convicción de que el crecimiento económico podría prolongarse en un contexto de reducción de consumo de recursos e impactos ambientales. El problema de esta idea estriba en que cuesta encontrar motivos para atisbar algo análogo a la posibilidad de su implementación.

2. El mito del desacoplamiento

Suele distinguirse entre desacoplamiento relativo y desacoplamiento absoluto. Del mismo modo, suelen aplicarse estos conceptos a alguna dimensión aislada de los impactos ecológicos del crecimiento económico. Así, haciendo abstracción del resto de esos impactos, puede —y suele— definirse el desacoplamiento relativo como una situación en la que, durante un determinado periodo, los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero aumentan más despacio que el crecimiento económico; por su parte, el desacoplamiento absoluto puede definirse como una disminución en las emisiones acompañada de crecimiento económico.

Cabe afirmar que existen fragmentos de «evidencia parcial» que animarían a pensar que el desacoplamiento podría dar algún día el salto desde el mundo de las ideas al de los hechos, pero cabe sólo afirmarlo cuando ponemos la lupa sobre el desempeño de la economía de alguna nación desarrollada específica durante algún periodo de tiempo concreto. «El problema de este tipo de ‘evidencia parcial’ es la naturaleza porosa de las fronteras comerciales nacionales y regionales» (Jackson & Victor, 2019: 950): mientras en las dos últimas décadas la Unión Europea lograba, sobre el papel, reducir sus emisiones de CO₂ en casi un 20%, las emisiones de China aumentaban un 200%, y las de la India un 150%; la mitad del CO₂ emitido a la atmósfera para producir todo lo que se consume en el Reino de España se libera fuera de sus fronteras (López Santiago, Cadarso & Ortiz, 2020). No cuesta, pues, entender que tercerizar la producción equivale a exportar polución (Davis & Caldeira, 2010; v. et. Cadarso, López Santiago & Ortiz, 2020), pero lo que arrojamos por la ventana vuelve a entrar por la puerta, porque no se trata de una ventana al espacio exterior: «para un contaminante como el carbono, y para los recursos en general, lo que sucede a nivel global es lo que cuenta, y aquí no hay evidencia de desacoplamiento absoluto en absoluto» (Jackson & Victor, 2019: 950). Muy al contrario, lo que encontramos a nivel global es que nuestras emisiones de CO₂, lejos de disminuir, han venido aumentando «acopladas» año tras año.

Pero la cuestión es de hecho más grave y compleja, porque el *sprint* hacia el desacoplamiento absoluto debería ser extraordinariamente rápido: de acuerdo con el último informe del IPCC, incluso aunque consiguiéramos estabilizar o reducir ligeramente nuestros niveles globales de emisiones, contaríamos con una probabilidad de tan sólo el 33% de no rebasar, al cabo de una sola década, el peligroso umbral de 1,5 °C de calentamiento sobre el nivel preindustrial.

«A nivel mundial, un desacoplamiento absoluto del calado suficiente para evitar el colapso climático requeriría una disminución anual promedio en la intensidad de carbono —esto es, en las emisiones por unidad monetaria de PIB— de alrededor del 14% cada año durante las próximas tres décadas. La tasa de desacoplamiento más alta jamás alcanzada por las economías avanzadas fue algo inferior al 3%, en los años inmediatamente posteriores a la crisis del petróleo de los setenta» (Jackson & Victor, 2019: 950-951). La idea de que es posible avanzar hacia el desacoplamiento con la celeridad suficiente para evitar peligrosos umbrales de calentamiento empieza a sonar, en fin, a ciencia ficción: incluso los análisis ampliamente citados como soporte para la esperanza del desacoplamiento no pueden ofrecer resultados que mejoren este magro 3%, lo cual resulta particularmente preocupante al considerar que los mismos se basan en los periodos más propicios de las economías nacionales mejor situadas en la carrera hacia el desacoplamiento y el crecimiento verde (cf., v. g., Le Quéré et al., 2019).

No debiera extrañar, por tanto, la conclusión de que la reducción de emisiones necesaria para mantener el calentamiento por debajo de los umbrales de seguridad «sólo es empíricamente factible en un escenario de decrecimiento» (Hickel & Kallis, 2019: 13; v. et. Parrique et al., 2019), como tampoco debiera extrañar que las más prestigiosas publicaciones académicas comiencen a dar cabida a la ponderación de las virtudes sociales, económicas y ecológicas de ese escenario por su contraste con las diferentes versiones de la ortodoxia construida en torno a la idea del crecimiento verde (cf., v. g., D’Alessandro et al., 2020; Nature, 2022).

La idea del desacoplamiento no debe confrontarse sólo con nuestro horizonte de caos climático, sino asimismo con el resto de los síntomas de nuestra situación de extralimitación. Quizá nuestro descenso por la pendiente de la curva de Hubbert y nuestro ascenso paralelo por la de los costes exergéticos sean los dos síntomas a los que convenga prestar una atención prioritaria.

La curva de Hubbert es una modelización matemática que describe el ciclo de extracción de recursos minerales. Fue concebida para el análisis de la evolución de la producción de petróleo y se representa como una curva sobre coordenadas cartesianas, con la producción anual en ordenadas y el tiempo

en abscisas. La curva tiene forma de campana y puede ajustarse considerablemente bien mediante una función gaussiana o la derivada de una función logística. De acuerdo con esta forma de campana, la extracción asciende rápidamente hasta alcanzar un «pico», tras el cual desciende tan rápido como ascendió.

Tal y como la Agencia Internacional de la Energía reconoció en 2010, el petróleo crudo convencional alcanzó su pico en algún momento entre los años 2005 y 2006 (Turiel, 2020: 30). La tasa de extracción del resto de petróleos, menos rentables en términos energéticos y económicos, viene descendiendo también en los últimos años. Se puede jugar con las cifras y discutir acerca del momento en que debiera fecharse el pico del petróleo, pero lo que no está en discusión es que se trata de un recurso finito cuyo aprovechamiento se asoma ya a un inevitable proceso de declive, y lo mismo puede decirse del resto de los combustibles fósiles. Existen recursos sustituibles: si no te gusta la lombarda puedes comer repollo, pero lo cierto es que no hay a la vista alternativas viables para la sustitución de la base fósil del capitalismo industrial.

Actualmente, las modernas «energías renovables» —la eólica y la fotovoltaica— son las candidatas oficiales para un proceso de «sustitución» de la señalada naturaleza. Sin embargo, los combustibles fósiles siguen suponiendo cuatro quintas partes de nuestro consumo energético: exactamente lo mismo que en el momento en que comenzaran su andadura las modernas «energías renovables», hace cuatro largas décadas. Por otra parte, esas «energías renovables» sirven sólo para producir electricidad, que representa una quinta parte de nuestro consumo energético total. Además, la producción eléctrica debida a esas «energías renovables» apenas logra alzarse por encima del 5% del total, y el incremento mundial de la demanda de electricidad viene rebasando holgadamente al de la instalación de capacidad renovable: para el periodo 2021-2022, se espera que el conjunto de las energías renovables alcance a cubrir alrededor de la mitad del incremento neto de la demanda (IEA, 2021a: 7; v. et. IEA, 2021b).

El entrecomillado de la locución «energías renovables» en contextos en los que de lo que hablamos es de paneles solares y molinos eólicos obedece al hecho de que, como apuntábamos, mientras descendemos por la pendiente de la curva de Hubbert ascendemos por la de los costes exergéticos.

La sustitución de fósiles por «renovables» habría de cimentarse sobre unas tecnologías dependientes de ingentes insumos materiales: la Agencia Internacional de la Energía estima que la transición hacia las «energías renovables» exigiría que, durante las dos próximas décadas, la extracción de tierras raras se multiplicara por 7, la de níquel por 19, la de cobalto por 21 y la

de litio por 42 (IEA, 2021c: 9).

Los recursos minerales que condicionan la viabilidad del proyecto de sustitución de fósiles por renovables escasean ya y escasearán cada vez en mayor medida, de forma que su obtención requerirá inversiones de energía que aumentarán mientras se reduce progresivamente la calidad del recurso extraído (Valero et al., 2018; Valero, Valero & Calvo, 2021). A esto se refiere la noción de «coste exergético», asentada a su vez en la de valoración exergética.

Como su nombre sugiere, la valoración exergética es una forma de contabilidad: en concreto, una contabilidad termodinámica de la riqueza mineral basada en la aplicación de la segunda ley de la termodinámica al análisis de la disponibilidad de recursos minerales (Almazán, 2021; Valero & Valero, 2009). Lo que esta ley nos dice acerca de esa disponibilidad es que cuando la concentración de un recurso mineral tiende a cero, la energía requerida para extraerlo tiende a infinito, siendo así que, en la práctica, resulta imposible recuperar los recursos minerales una vez han sido dispersados.

En nuestro contexto de declive fósil y expansión de tecnologías dependientes de gran cantidad de recursos minerales, el mensaje que debemos retener del marco de la valoración exergética es el de que existen límites físicos que constriñen la disponibilidad de los recursos minerales que condicionan el proyecto de mantener inalterado el orden socioeconómico del capitalismo industrial mediante el simple expediente de sustituir fósiles por renovables.

Pasar de la adicción a los combustibles fósiles a una politoxicomanía de la tabla periódica al completo puede sonar a buena idea, pero se trata de una empresa lastrada por al menos dos problemas. En primer lugar, el de la disponibilidad limitada y la presencia finita y geográficamente concentrada de los recursos minerales indispensables para la pretendida «sustitución» de fósiles por «renovables»; en segundo lugar, que su minería requeriría un significativo incremento de consumo de combustibles fósiles.

Ante un escenario en el que al horizonte de declive energético y material bosquejado se suma el de la inestabilidad de una biosfera gravemente dañada (Steffen et al., 2018), nuestro marco cultural no nos llama a la prudencia, sino a perdernos en utopías tecnológicas que se desinflan tan pronto como dejamos de desatender hechos tales como la profunda dependencia fósil de la eólica, la baja tasa de retorno energético de la fotovoltaica, que el hidrógeno no es una fuente de energía —sino un mal vector—, que el uranio es un recurso finito con cuyos residuos no sabemos qué hacer, que la idea de sustituirlo por torio lleva décadas siendo una mera idea, que siempre faltan 40

años para que el ITER logre imitar al Sol con alguna eficiencia o que «nuclear» se traduce antes por «problema» que por «solución» (cf., v. g., Williams, 2010: 136-144; Bardi, 2014: 54 y ss.; 2021; Santiago Muíño, 2015: cap. 7; Casado, 2020; Oreskes, 2022). «Todo se fía a un progreso tecnológico milagroso [...]. Creemos que las centrales nucleares de torio o la eternamente esperada fusión nuclear nos esperan a la vuelta de la esquina: todo menos asumir que si no llegan muchos de estos milagros a la vez, y rápido, más nos valdría estar preparados para adaptarnos a los límites» (Bordera & Turiel, 2021).

El mito del desacoplamiento topa, en fin, con la terquedad de los límites. Estamos muy acostumbrados a la consabida expresión en partes por millón del límite climático, pero este límite es sólo uno de los que bloquean el camino hacia el desacoplamiento y el «capitalismo verde»: incluso aunque pudiéramos olvidar por un momento el monstruo climático, la verosimilitud de un futurible sistema energético renovable que pudiera permitirnos continuar la senda del crecimiento exponencial habría de vérselas aún con el hecho de que nuestro planeta no está expandiéndose, con el de que los minerales esenciales para la «transición» no crecen en los árboles y con el de que el reciclaje no es un proceso que pueda esquivar las leyes de la termodinámica. Es comprensible, por tanto, que tan siquiera los análisis más optimistas respecto del proyecto de erigir una economía basada en electricidad de origen renovable contemplen la posibilidad de la prolongación del crecimiento económico tras la eventual transición a fuentes de energía no fósiles (cf. García-Olivares, 2015; 2016; García-Olivares & Ballabrera, 2015; García-Olivares & Beitia, 2019; García-Olivares et al., 2012; v. et. Smil, 2013; 2019).

3. La desintegración de la globalización neoliberal

Resulta palmario que nuestro sistema socioeconómico se encuentra en una encrucijada, «un *kairós* sistémico: continuar la loca carrera destructiva o liberarse de la lógica de la valorización y el crecimiento infinito» (Bouquin, 2020: 32). Ese «*kairós* sistémico» es también hoy el de la globalización neoliberal, cuya deriva (cf. Arias, 2022) conformará el contexto en que habremos de contender por vidas dignas para nuestra generación y las sucesivas, para nuestra especie y las que logren atravesar el actual cuello de botella. Quizá un vistazo a ese «*kairós* sistémico» de la globalización neoliberal pueda servirnos de orientación en esta complicada contienda.

El salto a la época de la historia económica que hoy toca a su fin se produjo en la anterior gran encrucijada, durante la crisis de los setenta. Aquélla fue una caída que se amortiguó mediante el transvase de la «economía real» a la abstracción financiera. Ante la incapacidad del capitalismo regulado por el Estado que emergiera de la Segunda Guerra Mundial para mantener un ritmo

de crecimiento respetable en base a la actividad económica efectiva, hubo de crearse un mundo sin fronteras para un capital cuya inexcusable actividad autoexpansiva se desplazó de la «economía real» al comercio de expectativas. Esta huida hacia delante, con su predecible sucesión de burbujas y estallidos especulativos, ha sido la mayor transformación del imperativo de valorización y crecimiento en toda la historia del capitalismo industrial.

Las políticas redistributivas, el gasto social y el control legal de la circulación de capitales lograron durante los cincuenta y los sesenta los mejores resultados económicos de la historia del capitalismo. Las tasas de crecimiento y las condiciones de vida de los trabajadores experimentaron una evolución positiva durante todo el periodo. No obstante, ya a finales de los sesenta empezaron a hacerse manifiestos los síntomas de una crisis de acumulación, con tasas de desempleo e inflación que atravesaron la década de los setenta sin regresar a unos niveles aceptables. La incapacidad del capitalismo regulado por el Estado para hacer frente a su colapso parecía exigir una reformulación del modelo.

El primer paso en esa dirección fue la demolición del sistema de Bretton Woods a comienzos de los setenta, momento a partir del cual comenzaron a fluctuar las tasas de cambio entre divisas, descolgadas ahora de un dólar que abandonaba su base material en el oro. De forma paralela, el paso más importante en la reformulación del modelo tuvo que ver con una decidida apuesta por la transferencia de la toma de decisiones hacia el mundo corporativo mediante una desregulación selectiva de los segmentos críticos de la actividad económica, que trajo consigo una ola de privatizaciones de servicios públicos, un ataque al poder político y económico de la fuerza de trabajo y sucesivos ajustes presupuestarios.

Es curioso que esta reformulación se presentara como un paquete de medidas necesarias por reflotar la economía herida por la crisis de los setenta, porque ni durante la década de los ochenta ni durante las siguientes volverían a alcanzarse ya niveles respetables de rendimiento económico: las tasas de reinversión, productividad y crecimiento no se han recuperado desde entonces, y la demanda sólo logró mantenerse mediante una respiración asistida crediticia que, si bien ayudó a los países occidentales a sobrellevar su desindustrialización, inflaría al tiempo la ominosa burbuja que terminó estallando en 2008. No hubo recuperación económica, pues, pero sí una victoria crucial en otro frente: el del aumento de la desigualdad económica y la erosión de la fuerza política de la clase trabajadora.

La reacción obrera a la crisis de los setenta ofreció tímidos motivos para la esperanza de una alternativa de tintes socialistas a la manifiesta inestabilidad

del capitalismo regulado posbélico. La movilización popular experimentó un importante florecimiento y la izquierda política ganó terreno, particularmente en Europa y América Latina. Las élites tenían sobrados motivos para temer por su posición, y no tardaron en reaccionar.

La década de los setenta asistió a un esfuerzo sin precedentes de relaciones públicas y activismo corporativo. Aquella fue la era dorada de los *lobbies*, *think tanks* y comités de acción política. La arena pública se inundó con propaganda en todos los formatos y las tres ramas del gobierno con dinero y abogados. La campaña fue un éxito: la década se cerró con los resortes estatales de los principales centros de la economía capitalista en manos de acólitos del credo neoliberal. No obstante, el Estado no desapareció, como preconizaba el credo. Así, por ejemplo, a pesar de la retórica anti-impuestos de la administración de Margaret Thatcher, los mismos no se redujeron durante sus tres mandatos: muy al contrario, el contribuyente británico hubo de soportar «una carga impositiva considerablemente mayor que la que había soportado bajo el gobierno laborista» (Hobsbawn, 1994: 412). En el otro lado del erario encontramos exactamente lo mismo: la estridente condena del gasto público no sólo no fue acompañada de su efectiva reducción en relación con el PIB, sino que de hecho el mismo aumentó a lo largo de aquellos tres mandatos (Eaton, 2013). Variaron, eso sí, los destinatarios: las élites celebraron el festín subvencionado por el Estado mientras los «recortes salvajes en programas sociales hacían a la nación presa del pánico a causa del inminente colapso social» (Chomsky, 1997b); la pobreza infantil, por poner un ejemplo al azar, alcanzó de la noche a la mañana niveles desconocidos desde la Segunda Guerra Mundial.

La revolución neoliberal consistió así, antes que en un «programa de reformas socioeconómicas», en un conjunto de eslóganes diseñado para evitar abandonar procedimientos formalmente democráticos en el proceso de reforzar el control elitista de las «democracias capitalistas». Toda vez que este proceso ha chocado con la retórica oficial, ha sido ésta y no aquél quien ha cedido, prevaleciendo los intereses de clase (Harvey, 2005) frente a los publicitados principios neoliberales: libertad de mercado, responsabilidad individual, etc.

Si bien incluso publicaciones como el *Financial Times* o *Foreign Affairs* vieron en la «crisis del coronavirus» la sentencia de muerte del neoliberalismo (Financial Times, 2020; Fahnbulleh, 2020), lo cierto es que podríamos estar deslizándonos hacia una fase de agudización de la naturaleza autoritaria del control elitista neoliberal (Garí, 2022; Urbán, 2022). Mucho se especuló acerca de una salida keynesiana a la «crisis del coronavirus», pero parece evidente que ésa no es la hoja de ruta del periodo de transición en el que nos adentramos. Tal y como advertía recientemente Boaventura de Sousa Santos,

«los signos de los tiempos nos obligan a pensar» en una transición de nuestras «democracias de baja intensidad» a «dictaduras de nuevo tipo», una transición que, de consumarse, bloquearía la vía hacia cualquier respuesta efectiva a la crisis ecosocial en curso (De Sousa Santos, 2022).

La amenaza de la inercia autoritaria del control elitista de las «democracias capitalistas» coincide en el tiempo con la de una más que probable desglobalización y fragmentación económica potencialmente caótica. Dos años después de que Carmen Reinhart, economista jefe del Banco Mundial, detectara «el último clavo en el ataúd de la globalización» (Reinhart, 2020), Robert Koopman, economista jefe de la OMC, anotaba que la fragmentación de la economía mundial «ha llegado para quedarse» (Herranz, 2022). Por su parte, el último WEO del FMI planteaba que, de la mano de la deriva geopolítica en curso, la previsible escisión en bloques económicos del mercado global podría desembocar con facilidad en una «transición impredecible hacia una nueva realidad marcada por la volatilidad financiera, las fluctuaciones en los precios de las materias primas y la dislocación de la producción y el comercio» (IMF, 2022: 19). El Banco Mundial, en sus últimas *Perspectivas Económicas Mundiales*, acusaba también recibo de los riesgos de una «fragmentación del comercio, la inversión y los sistemas financieros globales», y añadía que no debiera desestimarse la «posibilidad de que la economía global experimente un largo período de estanflación» (World Bank, 2022: 6).

No hay en cualquier caso motivos para descartar que la predecible desintegración del capitalismo globalizado venga acompañada de una profundización del autoritarismo neoliberal, pero tampoco para esperar que cualquier apertura concebible de un nuevo ciclo de acumulación pueda alterar nuestro rumbo hacia la «sopa entrópica» en la era del descenso energético, el caos climático y la Sexta Gran Extinción.

Algunos han creído intuir en esta coyuntura el albor de una «transición autoritariamente controlada hacia una suerte de neofeudalismo corporativo [...] potencialmente exterminista», en el que «la mayor parte de la población humana [será expulsada] a un vasto extramuros de pobreza, abandono y decadencia» mientras, intramuros, se configuran en burbujas neofeudales espacios-fortaleza autoritarios (Hernández Martí, 2022).

Poco antes de que Macron anunciara entre líneas la nueva ronda de sacrificios populares aneja al «fin de la abundancia» (cf. Riechmann, 2022), otros hablaban ya de nuestro horizonte de transición en términos de «capitalismo de la escasez». Incluso aunque alguna región se mostrara capaz tomar el relevo del ciclo financiarizado con centro en Estados Unidos y alumbrar un nuevo ciclo de acumulación basado en la producción real, ese nuevo ciclo

chocaría igualmente con la terquedad de los límites: «ante el agotamiento de reservas energéticas y materias primas vitales puede surgir un modo de regulación y gobernanza capitalista nuevo, con la guerra por los recursos como elemento de regulación a nivel externo y la imposición de medidas de racionamiento a la población a nivel interno» (Castillo, 2022).

Las asperezas de la gestión capitalista de la escasez seguirán atribuyéndose durante algún tiempo a la guerra en Ucrania; después, posiblemente, la recesión hacia la que hoy se dirige Alemania se emplee como metáfora de los obstáculos que era imposible que pudiera salvar el capitalismo globalizado: un modelo de expansión basado en la *importación* de energía barata.

Si no se obra el milagro, los primeros compases del capitalismo de la escasez se limitarán a prolongar la trayectoria de estas cuatro décadas de globalización neoliberal: socialismo a gran escala para las élites corporativas y «responsabilidad individual» y «libre competencia» para la clase trabajadora. Esta vez, el habitual divorcio entre la retórica y la práctica efectiva se vestirá además de verde **[2]**: el masivo patrocinio colectivo del poder privado se nos presentará como la única tabla de salvación disponible, tal y como viene de hecho sucediendo ya en el marco de la «gestión capitalista de la crisis ecológica» (Vindel, 2022).

Al igual que en la encrucijada de los setenta, en la actual vuelve a escenificarse el intento de contener una inflación ocasionada por la oferta como si tuviera algo que ver con una espiral precios-salarios. Desde luego, no existe evidencia ni lógica interna que sugiera que esas herramientas monetarias puedan contener este tipo de inflación, pero pocas dudas pueden haber acerca de sus consecuencias: en el exterior, postración de los países más débiles, sometidos al incremento de los servicios de sus deudas, así como a fugas de capital y depreciación de sus monedas; en el orden doméstico, degradación de las condiciones de vida de la clase trabajadora—tal y como Alan Greenspan le explicaba en 1997 al Congreso de los Estados Unidos, los elevados niveles de inseguridad entre los trabajadores constituyen un importante factor de la estabilidad social y la salud económica de nuestras «democracias capitalistas» (Chomsky, 2017b: III; 2021: 120).

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, advertía recientemente que «si bien el aumento de las tasas de interés reducirá la inflación, también traerá algo de dolor: son los lamentables costos de reducir la inflación» (cf. Smith & Platt, 2022; Jiménez, 2022). En la anterior encrucijada, la fuerza del «movimiento obrero, todavía existente» (Rodríguez, 2022), atenuó en parte el golpe que se cernía sobre los más débiles. La cuidada dedicación de las élites a la lucha de clases durante aquella encrucijada hace que hoy ese movimiento deba reconstruirse prácticamente desde cero, y los «dolores» de la gestión

autoritaria de la escasez parecen así destinados a ser sufridos en la soledad de la «responsabilidad individual».

Tanto la versión del neofeudalismo corporativo como la del capitalismo de la escasez nos ponen ante algo así como el reflejo sociopolítico de la «sopa entrópica». Toca concebir otras versiones, imaginar y luchar por «horizontes futuros que puedan impulsar la resistencia a la distopía en curso» (Jan, 2022).

4. El barco de Neurath

«Ni el modelo alimentario actual, ni el de transporte, ni el energético, ni el de consumo se sostendrán en un contexto de contracción material. Sufrir contracción material en el orden económico y político actual, sin transformar las relaciones que se dan en él es situar la política en la balsa de la Medusa, en donde las únicas opciones son matar o morir. Quienes no queremos matar o morir debemos esforzarnos porque el marco de relaciones y el tablero político sea otro» (Herrero, 2022). La cuestión es, justamente, la de qué «otro» y, sobre todo, la de cómo avanzar hacia él.

Desde luego, no faltan las propuestas y las etiquetas: ecosocialismos con diversas adjetivaciones, Green New Deal como puente reformista, cibercomunismo, ecoprimitivismo, ecologismo profundo. Todas estas propuestas, además de horizontes, esbozan con frecuencia programas estratégicos para avanzar hacia ellos. Por mi parte, creo innecesario argumentar que no sabemos lo suficiente acerca del ser humano como para tratar el diseño de una sociedad o el de un programa estratégico del mismo modo que el de una lavadora. Las cosas como fueran, el hecho de que nadie disponga del mapa para salir del capitalismo ni de los planos de una sociedad justa y sostenible no implica que no podamos obtener frutos de la tarea de asentar luchas concretas en una crítica del capitalismo tan minuciosa y centrada en realidades concretas como sea posible.

Las alternativas habrán de construirse, pues, *a bordo del barco de Neurath*, sobre la marcha; quizá con algunas buenas orientaciones de partida, que desde luego de poco servirán si no van de la mano de la flexibilidad y la sabiduría práctica que permitan acompañarlas con la endiablada compleja dinámica de la vida social. Ninguna receta incapaz de aterrizar en el accidentado suelo de las heterogéneas circunstancias y la concreción de las diferentes luchas podrá ser de mucha ayuda; del mismo modo, será inútil tejer el más sutil de los entramados teóricos si el diagnóstico y la crítica que podamos destilar de él se sirve sólo en fiestas de cóctel académicas.

Notas:

[1] La ceguera del automatismo que rige nuestro sistema socioeconómico se extiende a nuestra cultura, que ha permanecido durante cincuenta años de espaldas a la creciente evidencia de la contradicción esencial entre los límites biofísicos de nuestro planeta y el infinito al que no pueden dejar de aspirar nuestras economías. En este marco cultural, «sólo los utopistas chiflados, inadaptados o desquiciados, piensan que el crecimiento sin límites, no importa cuáles sean las consecuencias medioambientales, económicas, sociales y políticas, podría ser malo» (Harvey, 2010: 254).

[2] Incluso ahora que a nadie se le escapa ya que las calificaciones ESG son una broma pesada, la propaganda corporativa sigue tratando de cuadrar el círculo de esas inversiones verdes que, si no han podido enderezar aún nuestra trayectoria de colapso ha sido sólo porque los Gobiernos no acaban de «construir un cuerpo normativo robusto» para la graduación de activos sostenibles y otros hierros de madera (Fernández, 2022).

Referencias:

Allen, R. C. (2011) *Historia económica mundial. Una breve introducción*. Madrid: Alianza.

Almazán, A. (2021) *Thanatia. Los límites minerales del planeta*. Barcelona: Icaria.

Arias, A. (2020) *La batalla por las ideas tras la pandemia. Crítica del liberalismo verde*. Madrid: Catarata.

Arias, A. (2022) "Tirar del freno de emergencia: notas preliminares sobre el colapso", *Mientras Tanto*, 213, junio.

Bardi, U. (2014) *Extracted. How the Quest for Mineral Wealth Is Plundering the Planet*. White River Junction: Chelsea Green Publishing.

Bardi, U. (2021) «Extracted», *El Salto*, 22 de noviembre.

Becker, G. S. (1993) «Nafta: The pollution issue is just a smokescreen», *Bloomberg*, 9 de agosto.

Bordera, J. & Turiel, A. (2021) «El 'negocionismo'», *ctxt*, 22 de octubre.

Bouquin, S. (2020) "La tormenta perfecta", *Viento Sur*, 169, pp. 27-37.

Cadarso, M. A., López Santiago, L. A. & Ortiz, M. (2020) «La economía europea no reduce emisiones de CO₂, las deslocaliza», *The Conversation*, 7 de septiembre.

Casado, M. (2020) «Transición Energética, planificar para los próximos 100.000 años», *15/15\15*, 14 de agosto.

- Castillo, J. (2022) «Bienvenidos al capitalismo de escasez», *El Salto*, 17 de agosto.
- Chang, H.-J. (2008) *Bad Samaritans: The Guilty Secrets of Rich Nations and the Threat to Global Prosperity*. London: Random House.
- Chomsky, N. (1996) «Enduring truths», *CovertAction Quarterly*, 56, pp. 45-51.
- Chomsky, N. (1997a) «Market democracy in a neoliberal order: Doctrines and reality», *Z Magazine*, 10, noviembre.
- Chomsky, N. (1997b) «The passion for free markets», *Z Magazine*, 10, mayo.
- Chomsky, N. (1999) *El beneficio es lo que cuenta. Neoliberalismo y orden global*. Barcelona: Crítica.
- Chomsky, N. (2000) *Rogue States: The Rule of Force in World Affairs*. Cambridge: South End Press.
- Chomsky, N. (2014) *Democracy and Power: The Delhi Lectures*. Cambridge: Open Book Publishers.
- Chomsky, N. (2017a) «Neoliberalism: An accounting», *Amherst, UMass*, 13 de abril.
- Chomsky, N. (2017b) *Requiem for the American Dream. The 10 Principles of Concentration of Wealth & Power*. New York: Seven Stories.
- Chomsky, N. (2021) *The Precipice: Neoliberalism, the Pandemic and the Urgent Need for Radical Change*. Dublin: Penguin.
- D'Alessandro, S., et al. (2020) "Feasible alternatives to green growth", *Nature Sustainability*, 3, pp. 329-335.
- Daly, H. E. (1997) "Reply to Solow/Stiglitz", *Ecological Economics*, 22(3), pp. 271-273.
- Davis, S. J. & Caldeira, K. (2010) "Consumption-based accounting of CO₂ emissions", *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 107(10), pp. 1-6.
- De Sousa Santos, B. (2022) «Las transiciones del mundo: Dónde y hacia dónde», *Público*, 28 de agosto.
- Eaton, G. (2013) «How public spending rose under Thatcher», *NewStatesman*, 8 de abril.
- Fahnbulleh, M. (2020) «The neoliberal collapse: Markets are not the answer», *Foreign Affairs*, 99(1), pp. 38-43.

Fernández, M. (2022) «Los tropiezos del capitalismo sostenible», *El País*, 28 de agosto.

Financial Times (2020) «Virus lays bare the frailty of the social contract», *Financial Times*, 3 de abril.

Friedman, M. (1970) «The social responsibility of business is to increase its profits», *The New York Times Magazine*, 13 de septiembre.

García-Olivares, A. (2015) “Substitutability of electricity and renewable materials for fossil fuels in a post-carbon economy”, *Energies*, 8, pp. 13308-13343.

García-Olivares, A. (2016) “Energy for a sustainable post-carbon society”, *Scientia Marina*, 80, pp. 257-268.

García-Olivares, A. & Ballabrera, J. (2015) “Energy and mineral peaks, and a future steady state economy”, *Technological Forecasting & Social Change*, 90, pp. 587-598.

García-Olivares, A. & Beitia, A. (2019) “El progreso económico capitalista desde la Revolución Industrial hasta su actual crisis”, *Intersticios*, 13, pp. 23-44.

García-Olivares, A., et al. (2012) “A global renewable mix with proven technologies and common materials”, *Energy Policy*, 41, pp. 561-574.

Garí, M. (2022) “La pertinaz pulsión autoritaria del neoliberalismo”, *Viento Sur*, 180, pp. 39-47.

Harvey, D. (2005) *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal.

Harvey, D. (2010) *Guía de ‘El Capital’ de Marx. I*. Madrid: Akal.

Hernández Martí, G. M. (2022) «El capitalismo del colapso», *El Salto*, 30 de abril.

Herranz, D. (2022) «La globalización deja paso a la ‘Era de la Escasez’, que restará 1,6 billones de dólares al PIB mundial», *Público*, 23 de mayo.

Herrero, Y. (2022) «Contra el capitalismo del desastre», *ctxt*, 13 de agosto.

Hickel, J. & Kallis, G. (2019) “Is green growth possible?”, *New Political Economy*, 24, pp. 1-18.

Hobsbawm, E. (1987) *The Age of Empire: 1875-1914*. London: Weidenfeld and Nicolson.

Hobsbawm, E. (1994) *Historia del siglo XX. 1914-1991*. Barcelona: Crítica, 1995/2018.

IEA (2021a) *Electricity Market Report*. Paris: International Energy Agency.

IEA (2021b) «Global electricity demand is growing faster than renewables, driving strong

increase in generation from fossil fuels», *IEA*, 15 de julio.

IEA (2021c) *The Role of Critical World Energy Outlook Special Report Minerals in Clean Energy Transitions*. Paris: International Energy Agency.

IMF (2022) *World Economic Outlook. War Sets Back the Global Recovery*. Washington, DC: International Monetary Fund.

Jackson, T. & Victor, P. A. (2019) «Unraveling the claims for (and against) green growth», *Science*, 366(6468), pp. 950-951.

Jan, A. A. (2022) «¿Somos prisioneros de un pasado imaginario?», *ctxt*, 27 de agosto.

Jiménez, M. (2022) «Powell advierte que rebajar la inflación requiere provocar 'algo de dolor' a familias y empresas», *El País*, 26 de agosto.

Kocka, J. (2013) *Historia del capitalismo*. Barcelona: Crítica.

Le Quéré, C., et al. (2019) "Drivers of declining CO₂ emissions in 18 developed economies", *Nature Climate Change*, 9, pp. 213-217.

López Santiago, L. A., Cadarso, M. A. & Ortiz, M. (2020) "La huella de carbono del comercio internacional español", *ICE, Revista De Economía*, 913, pp. 141-165.

Luengo, F. (2022) «¿Reducir el consumo de energía? Sí, y mucho más», *El Salto*, 13 de agosto.

Marchese, D. (2022) «This pioneering economist says our obsession with growth must end», *The New York Times Magazine*, 17 de julio.

Mazzucato, M. (2013) *The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths*. London: Anthem Press.

Nature (2022) «Are there limits to economic growth? It's time to call time on a 50-year argument», *Nature*, 603(7901), p. 361.

Oreskes, N. (2022) «Breaking the techno-promise», *Scientific American*, 326(2), p. 74.

Parrique, T., et al. (2019) *Decoupling Debunked: Evidence and Arguments Against Green Growth as a Sole Strategy For Sustainability*. Brussels: European Environment Bureau.

Reinhart, C. (2020) «Reinhart says Covid-19 is the 'last nail' in the coffin of globalization», *Harvard Kennedy School, Mossavar-Rahmani Center for Business & Government*, 21 de mayo.

Riechmann, J. (2022) «Cuando decimos "fin de la abundancia", ¿de qué hablamos?», *El País*, 26 de agosto.

Röckstrom, J., et al. (2009) "A safe operating space for humanity", *Nature*, 461(24), pp. 472-475.

Rodríguez, E. (2022) «La crisis nos hará más pobres y también más vulnerables», *ctxt*, 24 de agosto.

Rodríguez, L. (2020) «Kathrin Hartmann: '¿Por qué es legal que los productos que están en las tiendas favorezcan la destrucción ambiental?'», *eldiario.es*, 26 de julio.

Santiago Muíño, E. (2015) *No es una estafa, es una crisis (de civilización)*. Madrid: Enclave.

Santiago Muíño, E. (2018) "Los frutos podridos de la economía política: Notas para un posmarxismo ecológicamente fundamentado", en J. Riechmann, A. Almazán Gómez, C. Madorrán Ayerra & E. Santiago Muíño, *Ecosocialismo descalzo. Tentativas*, Barcelona: Icaria, pp. 215-310.

Schumpeter, J. A. (1946) "Capitalism", en *Encyclopaedia Britannica*, vol. IV, Chicago: Encyclopaedia Britannica, pp. 801-807. [Reimpreso en R. V. Clemence (ed.), *Essays on Entrepreneurs, Innovations, Business Cycles, and the Evolution of Capitalism*, New York: Routledge, 1951/2017, pp. 189-210].

Smil, V. (2013) *Making the Modern World. Materials and Dematerialization*. Chichester: Wiley.

Smil, V. (2019) *Growth. From Microorganisms to Megacities*. Cambridge: MIT Press.

Smith, C. & Platt, E. (2022) «Investors expect higher rates to persist after hawkish Jay Powell ends hope of Fed pivot», *Financial Times*, 27 de agosto.

Soler Montiel, M. & Delgado Cabeza, M. (2018) "Rearticular la economía desde los territorios: Hacia una economía de los vínculos para el cuidado de la vida", en J. Riechmann, A. Matarán & O. Carpintero (coords.), *Para evitar la barbarie: Trayectorias de transición ecosocial y de colapso*, Granada: Editorial Universidad de Granada, pp. 103-131.

Steffen, W., et al. (2015) "Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet", *Science*, 347(6223), pp. 736-747.

Steffen, W., et al. (2018) "Trajectories of the Earth system in the Anthropocene", *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 115(33), pp. 8252-8259.

Turiel, A. (2020) *Petrocalipsis. La crisis energética y cómo (no) la vamos a solucionar*. Madrid: Alfabeto.

Urbán, M. (2022) "Iliberalismo, fase superior del neoliberalismo. Los casos de Hungría y Polonia", *Viento Sur*, 180, pp. 65-74.

USC (1973) *U. S. Congress, Energy Reorganization Act of 1973 (Hearings, Ninety-third Congress, First Session, H.R. 11510)*. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Valero, A. & Valero, A. (2009) “La valoración exergética, una forma de medir la disponibilidad de recursos minerales. El agotamiento de la «gran mina Tierra»”, *Ecologista*, 63, pp. 18-21.

Valero, A., Valero, A. & Calvo, G. (2021) *Thanatia. Límites materiales de la transición energética*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.

Valero, A., et al. (2018) “Global material requirements for the energy transition: An exergy flow analysis of decarbonisation pathways”, *Energy*, 159, pp. 1175-1184.

Vindel, J. (2022) «El Sísifo ecologista», *Espacio Público*, 28 de junio.

Williams, C. (2010) *Ecology and Socialism. Solutions to Capitalist Ecological Crisis*. Chicago: Haymarket.

World Bank (2022) *Global Economic Prospects, June 2022*. Washington, DC: World Bank.

30/8/2022

Rafael Osete

Roja y asertiva. La República Popular China avanza con guion propio: dos respuestas

□□□□□□□□□□□□□□□□

(péngyǒu lái yǒu hào jiǔ,
cháiláng lái yǒu lièqiāng)

Los amigos vienen con buen vino,
los chacales con escopetas [1].

1.- Respuesta de la RP China a la declaración de la Cumbre de Madrid de jefes de estado y de gobierno de la OTAN y al documento *Concepto estratégico 2022* [2].

Los *media* oficiales chinos han apostado por una respuesta que responde a un cierto «perfil precavido» frente a la declaración de los jefes de estado y de gobierno que han participado en la Cumbre de la OTAN de Madrid del pasado mes de junio, y frente al documento *Concepto estratégico 2022*, que describe las prioridades de la OTAN para los próximos diez años; documentos que no ahorran en retórica:

El epígrafe 6 de la declaración dispone:

«Nos enfrentamos a amenazas cibernéticas, espaciales, híbridas y asimétricas, y al uso malicioso de tecnologías emergentes y disruptivas. Nos

enfrentamos a la competencia sistémica de aquellos que, incluida la República Popular China, desafían nuestros intereses, seguridad y valores y buscan socavar el orden internacional basado en normas [...]».

Mientras que en el documento *Concepto estratégico 2022* China se gana la atención de diversos epígrafes:

«13.- Las ambiciones y las políticas coercitivas de la República Popular China (RPC) desafían nuestros intereses, seguridad y valores. La RPC emplea una amplia gama de herramientas políticas, económicas y militares para aumentar su presencia global y proyectar su poder, a la vez que permanece en la opacidad con respecto a su estrategia, intenciones y desarrollo militar.

Las operaciones híbridas y cibernéticas maliciosas de la RPC y su retórica de confrontación y desinformación apuntan a los Aliados y dañan la seguridad de la Alianza. La PRC busca controlar sectores clave tecnológicos e industriales, infraestructuras críticas, materiales estratégicos y cadenas de suministro. Utiliza el apalancamiento económico para crear dependencias estratégicas y potenciar su influencia. Se esfuerza por subvertir el orden internacional basado en normas, incluso en los dominios espacial, cibernético y marítimo. El refuerzo de la asociación estratégica entre la RPC y la Federación Rusa, y sus intentos de socavar el orden internacional basado en normas, va en contra de nuestros valores e intereses.

14.- Seguimos dispuestos a comprometernos con la RPC de manera constructiva, incluyendo una mayor transparencia mutua, con el objetivo de proteger los intereses relativos a la seguridad de la Alianza. Trabajaremos juntos de manera responsable, como Aliados, para responder a los desafíos sistémicos que la RPC plantea a la seguridad euroatlántica y para garantizar que la OTAN permanece en una posición de proporcionar defensa y seguridad a sus aliados. Mejoraremos nuestro conocimiento común de los problemas, mejoraremos nuestra resiliencia y preparación, y nos protegeremos contra las tácticas coercitivas y los esfuerzos de la RPC para dividir la Alianza. Defenderemos los valores que compartimos, así como el orden internacional basado en normas, incluida la libertad de navegación.

18.- [...] La RPC está ampliando rápidamente su arsenal nuclear y está desarrollando sistemas de entrega cada vez más sofisticados, sin aumentar la transparencia o participar de buena fe en el control de armas o la reducción de riesgos.

43.- La Unión Europea es un socio único e imprescindible para la OTAN. Los Aliados de la OTAN y los miembros de la UE comparten los mismos valores. La OTAN y la UE juegan un papel complementario, coherente y que se refuerza

mutuamente en el apoyo a la paz y la seguridad internacionales. Sobre la base de nuestra dilatada cooperación mejoraremos la relación estratégica entre la OTAN y la UE, fortaleciendo las consultas políticas y aumentando la cooperación [...] y contrarrestando las amenazas cibernéticas e híbridas y los desafíos sistémicos planteados por la RPC a la seguridad euroatlántica [...].»

Así, no se deja lugar a dudas: «desafío sistémico» (aunque, irónicamente, unido a una intención de conseguir un «compromiso constructivo»), «competidora», «amenaza», «riesgo para los valores», etc. En el aspecto formal, el texto despliega toda la retahíla de manidos clichés con el olor a la naftalina propia de un nostálgico de la política confrontación de bloques, de alguien a quien se le escapa un tiempo que vislumbra que, antes o después, podría dejar de ser el suyo...

No obstante, no es la primera vez que se adopta este enfoque por parte de la OTAN: en 2019, en la denominada «Declaración de Londres» **[3]**, esta organización calificó por primera vez a China, a la vez, como una «oportunidad» y como un «desafío» **[4]**. Así mismo, con posterioridad, en el documento de evaluación «OTAN 2030. Informe de jóvenes líderes» publicado en 2021, se sugirió tratar a China más como lo que se podría calificar de «adversario sistémico a gran escala» que como un «mero actor económico» **[5]**.

Esta vez, frente a las declaraciones de la cumbre de Madrid, las autoridades chinas no han querido entrar en el toma y daca del caduco y acerbo juego dialéctico de la OTAN para no darse por zaheridos y para no magnificar las consecuencias, pero han respondido al *chamarilerismo* de artificios semánticos obsoletos propios del relato de la OTAN, de forma rotunda y contundente: China no va a consentir ninguna injerencia en sus asuntos internos o provocación que afecte a su integridad territorial o intereses. Unas líneas rojas que Occidente no se cansa de tensar y tensar —como se está viendo con el «incidente Pelosi»— y que China recuerda constantemente con amargura en gran parte de sus discursos oficiales, lamiéndose todavía las heridas fruto de las Guerras del Opio y el no olvidado pasado colonial a la que fue sometida por parte de las denominadas «potencias extranjeras» **[6]**.

Han sido en cambio los *media* occidentales, incluso —y especialmente— en sus versiones en idioma mandarín, las que más están atizando constantemente el fuego; por citar algunos ejemplos: *BBC*, *The New York Times* y *Radio France Internationale* **[7]**, en sus intentos de crear contenidos con los que ganarse a determinados segmentos —mayoritariamente urbanos— de lectores en idioma chino **[8]**.

La respuesta china ha venido en cambio, en cierta medida, de modo un tanto

«indirecto», principalmente a través de la declaración efectuada a través de su Misión ante la Unión Europea **[9]**. La crítica que efectúa China (advirtiendo de antemano que no va a caer en ninguna ingenuidad) al documento *Concepto estratégico 2022* de la OTAN la realiza basándose y denunciando los siguientes aspectos: (i) perpetuación de la mentalidad de la Guerra Fría y la política de bloques, creando así enemigos artificiales; (ii) exceso de celo por parte de la OTAN en áreas geográficas que, en principio, deberían estar excluidas de la misión inicial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte **[10]**; (iii) difusión de información falsa; (iv) acusaciones infundadas contra una China que no ha dejado ninguna huella de colonización y agresión contra otros países (como sí lo hizo en cambio Occidente con China —recuerda de nuevo este documento—) y que incluso ha consagrado el principio de «adherencia al camino del desarrollo pacífico» en su Constitución **[11]**; (v) el gasto en defensa de China representa alrededor del 1,3 por ciento de su PIB, muy por debajo de la línea establecida por la propia OTAN, siendo, además, el país que envía el mayor número de cascos azules de entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad **[12]**.

China arguye, en dicho documento de respuesta, que está dispuesta a acatar un sistema multilateral internacional centrado en las Naciones Unidas, un orden asentado en el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales basadas en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, pero no está dispuesta a aceptar la imposición de las reglas de juego de un grupo que, a pesar de autocalificarse de «defensivo», está librando guerras (no siempre autorizadas por la ONU) contra otras naciones soberanas.

Así, China declara que está dispuesta a trabajar con todos los países amantes de la paz para fortalecer la solidaridad, practicar un multilateralismo genuino, construir un nuevo tipo de relaciones internacionales caracterizadas por el respeto mutuo, la equidad y la justicia, y fomentar una cooperación beneficiosa para todos que proporcione un sentido de comunidad que comparta el bienestar a fin de mantener conjuntamente la paz mundial.

En otro foro, en la conferencia de prensa ordinaria del ministerio de Relaciones Exteriores de 30 de junio de 2022 **[13]**, las declaraciones chinas han ido en la misma dirección, aunque destilando mayor acritud. No obstante, su portavoz, Zhao Lijian, abunda en incidir en dos aspectos adicionales que han irritado especialmente a las autoridades chinas: (i) el hecho que la OTAN invitara a determinados líderes de los países de Asia y el Pacífico (específicamente, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda) a asistir a la Cumbre de Madrid por primera vez (el portavoz estima que la OTAN alienta la confrontación y prejuzga ideológicamente y recalca que China, en cambio, se adhiere al camino del desarrollo pacífico, promueve la construcción del

destino común de la humanidad y fomenta la cooperación a través de la iniciativa de *la Franja y la Ruta*); y (ii) advierte el portavoz que el pueblo chino no olvidará nunca el crimen del bombardeo de la embajada china en Yugoslavia por parte de la OTAN dirigida por Estados Unidos hace 23 años.

Prosigue el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores advirtiendo a la OTAN que es completamente inútil exagerar y usar constantemente la llamada «amenaza China» **[14]** e insta a la OTAN a que cese de inmediato las acusaciones infundadas y los comentarios provocativos contra China, abandone la mentalidad obsoleta de la Guerra Fría, el concepto trasnochado del juego de suma cero y el peligroso juego de desorganizar Europa y la región de Asia-Pacífico. China, prosigue el portavoz, prestará mucha atención a los acontecimientos relacionados con la OTAN y no se quedará de brazos cruzados si esta organización perjudica los intereses de China.

Aprovecha también el portavoz para denunciar la discriminación de género contra la mujer en EE. UU. Y recuerda que Estados Unidos aún tiene que ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y que las mujeres estadounidenses han sufrido durante mucho tiempo discriminación sistemática, generalizada e institucional. Estas declaraciones son parte de una batalla ideológica más amplia que planea sobre el concepto mismo de «democracia» que llevan manteniendo EE.UU. y China (especialmente en los *media*, a través de *The New York Times* y del *China Daily*). Su análisis pormenorizado excede del ámbito de estas modestas líneas.

Un tanto más incisivos en el análisis del documento de la OTAN aprobado en la cumbre de Madrid han sido los artículos de opinión publicados por la prensa china. Así, por ejemplo, la más próxima al Partido Comunista Chino, el *Diario del Pueblo* **[15]**, es contundente al especificar que el «desafío de China» es el resultado de la mentalidad y el prejuicio ideológico de la Guerra Fría que arrastra una OTAN que nunca ha dejado de crear «enemigos» de forma artificial, cosa que sí ha planteado un «desafío sistémico» a la seguridad y la estabilidad mundiales. Y recalca: «no se puede tolerar que las guerras que pasan en Europa puedan pasar en la región de Asia-Pacífico».

Y en otra publicación, también afín, el *China Daily*, se realizan análisis y se expresan opiniones todavía un poco más atrevidas **[16]**. Por ejemplo, se ironiza cuando se menciona que: «China también se ha convertido en el primer país que aparece en el llamado “documento de concepto estratégico” de la OTAN geográficamente lejos de un estado miembro de la OTAN»; se manifiesta el temor de Occidente frente al desarrollo impulsado por la iniciativa de *La Franja y la Ruta*; y se preguntan retóricamente: ¿Están los miembros de la OTAN dispuestos a asignar decenas de miles de millones de

dólares en recursos para proteger el medio ambiente, luchar contra el cambio climático, erradicar la pobreza, reducir el analfabetismo, construir infraestructura civil o frenar una pandemia global? Hay que tener en cuenta que unos días antes de la Cumbre de Madrid de la OTAN, los líderes del G7 anunciaron un plan de 600 mil millones de dólares para expandir la inversión en proyectos de infraestructura en los países en desarrollo de todo el mundo. El plan es contrarrestar la iniciativa *La Franja y la Ruta*, en la que el gobierno chino ha gastado grandes sumas de dinero para construir puertos, ferrocarriles y redes de telecomunicaciones en todo el mundo, consolidando así en el proceso lazos diplomáticos con numerosos países.

En definitiva, la comprensión de seguridad de la OTAN tiene principalmente dos dimensiones: una es la dimensión geográfica, la otra es la dimensión hegemónica de los valores; y la tasa de expansión de la última es mucho más alta que la primera. Y todo ello alimentado por unos entramados comerciales que, cuando fallan las predicciones de las premisas del capitalismo, recurren con la amenaza a otros escenarios.

2.- Respuesta de la RP China a la estancia de la tercera autoridad de EE. UU. en territorio taiwanés: publicación del tercer *libro blanco* del gobierno chino sobre Taiwán.

Cómo se enlaza la respuesta a este episodio con el anterior, y más teniendo en cuenta los próximos calendarios políticos domésticos de ambas potencias **[17]**, es tema arduo controvertido en los *media*, no faltos en ocasiones de ciertas dosis especulativas de política-ficción, donde se cruzan mensajes —en un entorno y contexto de muchos decibelios que ha incluido la llamada a capítulo a los respectivos embajadores—**[18]** que no es necesario reproducirlos todos aquí; por ejemplo, por parte de EE. UU. —y Taipéi—, se arguye: (i) que el viaje y estancia estaba programada para el mes de abril y fue pospuesta debido al positivo en COVID de Pelosi, es decir, que no ha sido para aprovechar la inercia de las declaraciones de la Cumbre de Madrid de la OTAN; (ii) que el objetivo de la visita ha sido en base a los lazos que le unen con Taiwán (y, de paso, ser una muestra de apoyo al ejercicio de derechos y libertades en dicho territorio) y como parte de un itinerario más amplio encaminado a fortalecer la posición de EE.UU. entre sus socios del Pacífico (en un intento de contrarrestar el peso de la RPC en su «zona de influencia natural»); (iii) que la respuesta de la RPC ha sido desproporcionada, con una demostración de poderío y despliegue militar **[19]** sin precedentes (considerada el ensayo de una futura invasión); (iv) y que EE. UU. no está dispuesto a tolerar una «nueva normalidad» en la que la RPC aisle a Taiwán **[20]**. Mientras que por parte de la RPC: (i) considera la visita, no como un error en el calendario, sino como una continuación de las declaraciones de la Cumbre de la OTAN de Madrid; (ii) entiende que ha sido una provocación por

parte de EE. UU. **[21]** de la mayor importancia, injiriéndose en los asuntos internos de la RPC e intentando socavar su influencia en el área geográfica del Pacífico, por lo que la RPC no puede dejar de reaccionar; (iii) que los ejercicios militares son una cuestión interna, ya que Taiwán no ha dejado nunca de ser territorio de la RPC y, además, ya había advertido previamente de las consecuencias severas —en un lenguaje comprensible para EE. UU.— para el caso de llevarse finalmente a cabo la visita; y (iv) que establecerá una «nueva normalidad» para evitar cualquier intento independentista y asegurar la futura e inevitable reunificación.

De sofisticadas razones (y apropiación de un determinado discurso y uso del lenguaje) se han arrogado uno y otro lado del Estrecho de Taiwán (una de las rutas marítimas de tráfico más concurrido) —y no solo estrictamente ambos lados del Estrecho, sino también enclaves, como Washington, a 12639 kilómetros de Taipéi— para defender sus argumentos (y reacciones) en torno a la estancia de la presidenta del Congreso de EE. UU. en territorio taiwanés. Las respectivas posiciones de la RPC y de los EE. UU. son claras y distantes, y arrastran un componente histórico y, por supuesto, de contienda en torno al modelo de hegemonía sociocultural (en toda la amplitud del término). Y el silencio (o pleitesía) de otros actores internacionales tampoco deja de ser significativo **[22]**.

Más allá de todo este frenesí mediático y su escenificación **[23]**, la respuesta de la RPC a todo este batiburrillo de daga y toma dialéctica ha venido de la mano de la publicación de un nuevo *libro blanco* del gobierno chino, de 10 de agosto de 2022, sobre la cuestión de Taiwán y la reunificación de China en la Nueva Era (el tercero relativo a Taiwán; los anteriores fueron publicados en 1993 y 2000) **[24]**. Es un documento de lectura imprescindible para conseguir proyectar más luz sobre el particular, especialmente para entender las razones de la RPC (más allá de la política *ique viene el malo!* dispersada por doquier por la mayor parte de los *media* occidentales, que se trasluce incluso, y principalmente, en el uso sesgadamente simplón del lenguaje, utilizando términos como «recuperar», «anexionar», «invadir», etc.) **[25]**. Así, el actual *libro blanco* pone en valor (sin duda alentado por la doctrina de las Cuatro Autoconfianzas) **[26]** que «Este nuevo libro blanco se publica para reiterar el hecho de que Taiwán es parte de China, para demostrar la determinación del PCC y el pueblo chino y su compromiso con la reunificación nacional», que «Resolver la cuestión de Taiwán es indispensable para la realización del rejuvenecimiento de China y es una misión histórica del Partido Comunista de China» y que «El desarrollo y el progreso de China y, en particular, los aumentos constantes de su poder económico, fortaleza tecnológica y capacidades de defensa nacional, son un freno efectivo contra las actividades separatistas y la interferencia de fuerzas externas» **[27]**. Es interesante la exposición histórica que el *libro blanco* realiza del particular como punto de

partida para legitimar su posición: en 1684 se estableció una administración, a nivel de prefectura, de Taiwán bajo la jurisdicción de la provincia de Fujian; en 1885, el estatus de Taiwán mejoró y se convirtió en la vigésima provincia de China; en 1894 sufrió la agresión japonesa; y, como consecuencia de esta última, China se vio forzada a ceder Taiwán a Japón. El 9 de diciembre de 1941 (en plena Guerra de Resistencia contra el invasor japonés), el gobierno chino emitió una declaración de guerra contra Japón y proclamó que todos los tratados, convenciones, acuerdos y contratos relacionados con las relaciones entre China y Japón habían sido derogados y que China recuperaría Taiwán **[28]**.

La Declaración de El Cairo emitida conjuntamente por China, Estados Unidos y el Reino Unido el 1 de diciembre de 1943, estableció que era el propósito de los tres aliados que todos los territorios que Japón le había robado a China, como el noreste de China, Taiwán y las Islas Penghu, debían ser restaurados a China. Posteriormente, la Proclamación de Potsdam fue firmada por China, Estados Unidos y el Reino Unido el 26 de julio de 1945, y reconocida también por la Unión Soviética con posterioridad. En septiembre del mismo año, Japón firmó el instrumento de rendición, en el que se comprometía a cumplir fielmente con las obligaciones establecidas en la Proclamación de Potsdam. El 25 de octubre del mismo año el gobierno chino anunció que reanudaba el ejercicio de la soberanía sobre Taiwán. A partir de ese momento, China había recuperado Taiwán *de jure* y *de facto*. Tras la guerra civil, el 1 de octubre de 1949, se fundó la República Popular China, sucesora de la República de China (1912-1949), y el Gobierno Popular Central se convirtió en el único gobierno legítimo de toda China. El nuevo gobierno reemplazó al anterior régimen del *Guomindang* en una situación en la que China, como sujeto del derecho internacional, no cambió y la soberanía y el territorio inherente de China no cambiaron. Como resultado natural, el gobierno de la República Popular China debería disfrutar y ejercer la plena soberanía de China, que incluye su soberanía sobre Taiwán.

Es rotundo el *libro blanco*, cuando prosigue y explicita: «Como resultado de la guerra civil en China a fines de la década de 1940 y la interferencia de fuerzas externas, los dos lados del Estrecho de Taiwán han caído en un estado de confrontación política prolongada. Pero la soberanía y el territorio de China nunca se han dividido y nunca se dividirán, y el estatus de Taiwán como parte del territorio de China nunca ha cambiado y nunca se permitirá que cambie». El repaso histórico del documento prosigue haciendo referencia al 26° período de sesiones de Naciones Unidas, en octubre de 1971, cuando su Asamblea General adoptó la Resolución 2758, por la que se comprometió a restaurar todos sus derechos a la República Popular China y reconocer a los representantes de su gobierno como los únicos representantes legítimos de China ante las Naciones Unidas (y expulsar inmediatamente a los

representantes de Jiang Jieshi del lugar que ocupaban en las Naciones Unidas y en todas las organizaciones relacionadas con ellas, estableciendo el principio de «una sola China»); principio también adoptado en 1979 por parte de EE. UU. [29], año en el que también ese país adoptó la *USA Taiwan Relations Act* [30]. El *libro blanco* hace referencia a la ilegalidad del *Tratado de San Francisco* de 1951, por el que se ponía fin al imperialismo japonés, ya que la RPC no fue invitada a la discusión y firma de dicho tratado (ni, puestos al caso, Taiwán). Tratado al que precisamente se aferran los EE. UU. para defender que el estatus de Taiwán aún no se ha determinado. En definitiva, como expresa el documento del *libro blanco*, EE. UU. trata de «utilizar a Taiwán para contener a China». También se denuncia en el documento que actualmente EE. UU. no está respetando el segundo Comunicado Conjunto China-Estados Unidos, donde se establece: «El Gobierno de los Estados Unidos de América reconoce la posición china de que solo hay una China y Taiwán es parte de China» [31]. El documento del *libro blanco* también hace mucho hincapié en la promoción de la reunificación y sus ventajas y oportunidades económicas [32], en el estatus que tendría la isla como región administrativa especial [33], en la calidad de vida, etc. También pone en valor el papel decisivo del Partido Comunista de China durante todos estos años para el fomento pacífico de la reunificación. En su XIX Congreso Nacional, en octubre de 2017, el PCC reafirmó la política básica de defender el principio de *Un País, Dos Sistemas* y promover la reunificación nacional, y reforzó su resolución de no permitir que ninguna persona, organización o partido político, en ningún momento ni en cualquier forma, pueda separar cualquier parte del territorio chino, de China (como las autoridades del Partido Progresista Democrático taiwanés que «se han confabulado con fuerzas externas [34] en sucesivas acciones de provocación diseñadas para dividir el país, y que se niegan a reconocer el principio de *una sola China* y distorsionan y niegan el Consenso de 1992 [35]).

Y la crítica velada a la Declaración de Madrid también se ha dejado entrever en el siguiente pasaje del *libro Blanco*: «Todavía perdidas en delirios de hegemonía y atrapadas en la mentalidad de la Guerra Fría, algunas fuerzas estadounidenses insisten en percibir y retratar a China como un importante adversario estratégico y una seria amenaza a largo plazo». También se puede considerar el *libro blanco* chino como una respuesta al *libro blanco* japonés sobre defensa, publicado anualmente [36].

Por otro lado, son también especialmente severas las declaraciones —de una semana antes de la publicación del *libro blanco*— del viceministro de Asuntos Exteriores de la RPC, Xie Feng, cuando requirió la presencia del embajador de EE. UU. [37]. El tono de la protesta formal ha sido el siguiente:

«El movimiento [...] tendrá consecuencias extremadamente graves. China no

se quedará de brazos cruzados», «[...] poner a Taiwán en su [EE. UU.] llamada "estrategia del Indo-Pacífico", mejorar descaradamente sus lazos con Taiwán, aumentar las ventas de armas a la región de Taiwán, clamar abiertamente por ayudar a Taiwán a mejorar la "capacidad militar asimétrica" y apoyar las actividades separatistas para la "independencia de Taiwán" [...] la parte estadounidense debe pagar el precio de sus fechorías. China tomará las medidas necesarias y responderá con contramedidas firmes. No lo decimos por decir», «China insta una vez más a los Estados Unidos a que detenga sus movimientos peligrosos antes de que sea demasiado tarde, a que deje de provocar problemas en la cuestión de Taiwán, deje de confabularse e instigar a las fuerzas separatistas de la "independencia de Taiwán", deje de jugar la "carta de Taiwán" en cualquier forma y deje de usar a Taiwán para contener a China y deje de entrometerse en Taiwán e interferir en los asuntos internos de China», «Los que juegan con fuego perecerán por él. Taiwán es el Taiwán de China y finalmente regresará al abrazo de la patria. El pueblo chino no se dejará asustar por los demonios, intimidar por la presión, ni engañar por las falacias. En la mente del pueblo chino, nada es más sagrado que proteger la soberanía y la integridad territorial de China, y nada es más importante que salvaguardar la unidad nacional y lograr la reunificación nacional. Ningún país, ninguna fuerza y ningún individuo debe subestimar la firme determinación, la fuerte voluntad y la gran capacidad del gobierno y el pueblo chinos para defender la soberanía nacional y la integridad territorial, y lograr así la reunificación y el rejuvenecimiento nacionales».

En definitiva, la RPC ha sido clara y meridiana. Asertiva. A pesar de las maniobras militares, de sus declaraciones se desprende que no busca la confrontación a menos que se la haga sentir ultrajada **[38]**. Una guerra, como toda guerra, es siempre reprobable y, sobre todo, teniendo en cuenta que hay personas y demasiados intereses en juego en una situación en la que todos perderían. Pero, en efecto, China está siendo más asertiva que nunca **[39]**.

No obstante, las tensiones se prevén largas, ya que una segunda visita a Taiwán, esta vez por parte de una delegación del Congreso de EE. UU. encabezada por Ed Markey y compuesta por miembros tanto del partido demócrata como del republicano, ha tenido lugar el 15 de agosto. Y parece que no será la última, ya que el comité de asuntos exteriores de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña también está planeando una visita a Taiwán a finales de este año, probablemente en noviembre o principios de diciembre **[40]**. Esta segunda visita de representantes del congreso de EE. UU. ha provocado un nuevo despliegue y demostración de fuerza militar por parte de la RPC (que no se produjo, en cambio, cuando, por ejemplo, Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también visitó la isla a mediados del pasado mes de abril).

A nivel doméstico de la RPC, el foco está situado en el próximo otoño, que viene cargado con la agenda marcada por la celebración del XX Congreso del Partido Comunista de China. Y tanto la Declaración de Madrid como, especialmente, el incidente de Taiwán, influirán (además de otros factores como la gestión de la COVID, los resultados económicos, etc.). Aunque no pesarán tanto —por más que se esfuercen en lo contrario los *media* occidentales— como toda la doctrina cultural que Xi ha sido capaz de conformar y la cohesión, confianza e impulsos renovados que ha sabido propiciar entre el pueblo y los cuadros **[41]**. Los delegados al XX Congreso Nacional del PCC han sido seleccionados primero por congresos a nivel provincial, que ya han concluido (y cuyo resultado ha mostrado una cierta rotación significativa de líderes locales). La renovación y/o nuevo cargo de Xi está por ver (así como los ajustes necesarios —barreras de edad, de consecución de objetivos previos y de carrera política— adicionales a los ya efectuados, para facilitar así mismo la (re)elección de todas las personas de su confianza); y la composición del Comité Permanente del Politburó también está en juego. Las diversas facciones se posicionarán: principalmente entre la facción «elitista, o de los príncipes» (精英, *tàizǐ dǎng*), vinculada por lazos familiares a los que formaron la Larga Marcha (como el propio Xi Jinping) y la facción de la «coalición populista» (群众, *tuánpài*), conformada por los políticos que ocuparon cargos en la Liga de la Juventud Comunista (como el Primer ministro Li Keqiang o el expresidente Hu Jintao). Pero no es intención de estas líneas efectuar pronósticos de política-ficción; eso es harina de otro costal...

Notas

[1] Proverbio chino (成语, *chéngyǔ*). Citado, como última frase, en la respuesta china —efectuada a través de la Misión de la República Popular China en la Unión Europea— a la declaración de la Cumbre de la OTAN de Madrid, que la califica como «desafío sistémico». Disponible, en chino, en: http://eu.china-mission.gov.cn/stxw/202207/t20220702_10714122.htm

[2] V. *NATO Strategic Concept* 2022, disponible (en inglés) en: <https://www.nato.int/strategic-concept/>, y (en francés) en: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept-fr.pdf. Documento al que se le suma la declaración formal de los jefes de estado y de gobierno participantes en la Cumbre de Madrid: *Madrid Summit Declaration*; disponible (en inglés) en https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_196951.htm?selectedLocale=en

[3] Disponible en: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm

Contrariamente a las últimas «desavenencias» hay que recordar que, en 2002, la OTAN y China iniciaron un diálogo político bilateral y decidieron llevar a cabo una «cooperación selectiva» en los desafíos de seguridad comunes. Así, la OTAN había venido considerando

gradualmente a China como un socio en la lucha contra la piratería, el terrorismo y el mantenimiento de la estabilidad regional.

[4] Textualmente: «We recognise that China's growing influence and international policies present both opportunities and challenges that we need to address together as an Alliance» [*Reconocemos que la creciente influencia de China y sus políticas internacionales presentan tanto oportunidades como desafíos que debemos abordar juntos como Alianza*].

[5] OTAN 2030. Informe de jóvenes líderes, febrero 2021. En dicho documento, en el que participan las «nuevas generaciones» aportando *inputs* desde la perspectiva de diferentes disciplinas, se califica a China como «competidora» y «asertiva». Y se especifica: «Incluso aunque China está geográficamente alejada del área euroatlántica, la Alianza reconoce que su creciente influencia y políticas internacionales presentan tanto oportunidades como desafíos. Desafíos para el espacio euroatlántico y que los Aliados deben abordar juntos». Disponible (en inglés) en: <https://www.nato.int/nato2030/young-leaders/>.

[6] V., por ejemplo, el reciente discurso de Xi Jinping (1 de julio de 2022) con motivo del 25º aniversario del «regreso» de Hong Kong a la RPC y la ceremonia inaugural del sexto mandato del gobierno de dicha Región Administrativa Especial, donde se menciona la Guerra del Opio de 1840 y la humillación de ceder Hong Kong; disponible en: https://english.www.gov.cn/news/topnews/202207/02/content_WS62bf8de6c6d02e533532d147.html

[7] A modo de ejemplo, BBC: <https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-62033226> (5 de julio de 2022); The New York Times <https://cn.nytimes.com/china/20220704/china-nato/> (4 de julio de 2022); Radio France Internationale: <https://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20220629-%E5%8C%97%E7%BA%A6%E6%96%B0%E6%88%98%E7%95%A5%E6%A6%82%E5%BF%B5%E9%A6%96%E6%8F%90%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%8C%91%E6%88%98-%E7%A7%98%E4%B9%A6%E9%95%BF%E7%A7%B0%E5%B0%86%E5%8A%A0%E5%BC%BA%E4%B8%8E%E5%8D%B0%E5%A4%AA%E4%BC%99%E4%BC%B4%E7%9A%84%E5%90%88%E4%BD%9C> (30 de junio de 2022).

[8] Para así trasladarles misma «ilusión» con la que convive la mal denominada «clase media» occidental, tendenciosamente encuadrada como «burguesía»: esa enfermedad que afecta mayoritariamente -aunque no solo- a cuadros intermedios desmemoriados que, a su vez, transmiten su enfermedad a las nuevas generaciones. V. Pasolini, P.P., *El caos*, citado en <http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/approfondimenti/pasolini-contra-vampiros-y-muertos-vivientes-burgueses-esit/>, donde se menciona: «todo quedará claro cuando especifique que por burguesía no entiendo tanto una clase social cuanto una verdadera y precisa enfermedad. Una enfermedad altamente contagiosa: tanto es así que ha contagiado a casi todos los que la combaten: desde los obreros del norte hasta los trabajadores que han emigrado del sur, los burgueses de la oposición y los «solitarios» (como es mi caso)». La columna de Pasolini «El caos» apareció en el semanario *Tempo*, desde el 6 de agosto de 1968 hasta el 24 de enero de 1970, con escasas y breves interrupciones; publicada por Editori Ruiniti en 1980 y por Editorial Crítica en 1981.

V. también Capella, J.-R., «Con el mantel puesto», donde se critica con ironía la falta de formación de las nuevas generaciones en una disciplina como la Historia, en cierta forma «marginada»; disponible en: <https://mientrastanto.org/boletin-203/de-otras-fuentes/con-el-mantel-puesto>.

[9] *Cit. ut supra.*

[10] Se podría argüir que la OTAN tiene una «ansiedad hegemónica». El *Concepto estratégico 2022* establece tres tareas centrales para la próxima década: (i) disuasión y defensa; (ii) prevención y gestión de crisis; y (iii) seguridad cooperativa. Y extiende sus tentáculos más allá de la zona de defensa euroatlántica tradicional, buscando sucesivamente oportunidades para llevar a cabo «intervenciones extraterritoriales» (Yugoslavia, Irak, Libia, Afganistán).

Y no hay que olvidar que el ámbito de la organización se amplía a «nuevas fronteras», como la cibernética y el espacio.

[11] Los *Cinco Principios de la Convivencia Pacífica* son: el respeto mutuo de la soberanía y la integridad territorial, la no agresión mutua, la no injerencia en los asuntos internos de cada uno, la igualdad y el beneficio mutuo y la convivencia pacífica.

La versión, en inglés, de la Constitución de la RPC, está disponible en:

<http://www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml>

Adicionalmente, hay que traer a colación que, en octubre de 1964, China detonó con éxito su primera bomba atómica. El mismo día, el gobierno chino anunció solemnemente que no sería la primera en usar armas nucleares en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, y se comprometió incondicionalmente a no usar o amenazar con usar armas nucleares contra estados no poseedores de armas nucleares y zonas libres de armas nucleares. Una versión de dicho documento está disponible (en inglés) en <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/134359.pdf?v=b1e04ac05705>.

[12] V. United Nations Peacekeeping, Troop and police contributors, <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors> (a 31 de mayo de 2022).

[13] Disponible, en chino, en: https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/202206/t20220630_10713013.shtml

[14] Mencionando, como ejemplos, las campañas mediáticas occidentales al respecto del «genocidio» en Xinjiang, el «virus de Wuhan», el «ataque de piratas informáticos chinos» y las «bases militares de China en el extranjero».

[15] V. 新聞(*rénmín rìbào*) de 5 de julio de 2022, página 17; disponible también en línea, en chino, en: <http://world.people.com.cn/n1/2022/0705/c1002-32465790.html>

[16] V., por ejemplo, el artículo de Zhang Mingxin «Afirmación que China es un ‘desafío sistémico’. Contradicciones y enredos en la mente de la OTAN», 3 de julio de 2022; disponible en: <https://cn.chinadaily.com.cn/a/202207/03/WS62c16669a3101c3ee7add95d.html>. O el artículo «La OTAN en el camino hacia el militarismo», de 13 de julio de 2022, de Jan Oberg (presidente de la Fundación Sueca para la Paz Transnacional y la Investigación del Futuro); disponible en: <https://cn.chinadaily.com.cn/a/202207/13/WS62ce9d2fa3101c3ee7adf0c1.html>. O la reseña referente a la cumbre de la OTAN, de 03 de julio de 2022, disponible en: <https://cnews.chinadaily.com.cn/a/202207/03/WS62c15fe2a3101c3ee7add958.html>

[17] Este otoño, tanto la RPC con el XX congreso del Partido Comunista como EE. UU. con las elecciones de medio mandato, se verán sometidos a procesos internos de renovación de la legitimación.

[18] Muy severos los términos del gobierno chino dirigidos al embajador de EE. UU., como se verá más abajo.

[19] Usando, por cierto, el Dongfeng 17 (东风, *dōngfēng*; viento del Este), un misil de planeo hipersónico.

[20] China continental es el primer socio comercial de Taiwán, representando alrededor del 40 por ciento de sus exportaciones. Entre otras medidas, en la RPC se ha establecido la prohibición de la importación de cítricos y exportación de arena natural a Taiwán. Por otra parte, la discordia sobre el levantamiento de tarifas a los productos chinos que se importan en EE. UU. es un tema candente en dicho país. Mientras la CHIPS and Science Act de EE. UU. pretende suprimir la dependencia externa en la fabricación de semiconductores (no así la de litografías de semiconductores de alta precisión, de las que es líder) - a este último respecto, EE.UU. ha intentado presionar a los Países Bajos (otro líder en la fabricación de litografías) para que no se las venda a la RPC-; la ley está disponible en: <https://www.state.gov/the-passage-of-the-chips-and-science-act-of-2022/>. V. también la información proporcionada por la propia Casa Blanca: «FACT SHEET: CHIPS and Science Act Will Lower Costs, Create Jobs, Strengthen Supply Chains, and Counter China»; disponible en: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/>

[21] Excede del ámbito del presente texto el análisis pormenorizado de los entresijos de la política doméstica de EE. UU. y las rivalidades entre diferentes facciones de las familias del ala demócrata, las interacciones de esta con el ala republicana en lo referente a Taiwán, así como la animadversión y relaciones anteriores de Pelosi con la RPC, que se retrotraen a principios de los pasados noventa.

[22] Un dato histórico a menudo ninguneado: la presencia española en el sureste de la isla Hermosa (Taiwán) desde 1626 hasta 1642. Alonso Fajardo y Tenza, Gobernador de España en Filipinas, envió al dominicano Bartolomé Martínez a China (persiguiendo el sueño del Reino Católico Oriental); a su vuelta, y por las condiciones climáticas, desembarcó en Taiwán. Le siguió Carrenio de Valdés, con trescientos soldados, bajo la orden del gobernador español en Filipinas, esta vez, Fernando de Silva. La isla se convirtió en la puerta de entrada a China de los misioneros españoles y en una escala intermedia entre Filipinas y China (en la ruta marítima: China-Filipinas-Méjico-España), hasta que en 1642 los holandeses expulsaron a los españoles de la isla. Ni siquiera con este pretexto hay un acercamiento profundo de la política exterior española -o, por qué no decirlo, europea- a los asuntos concernientes a Asia Oriental (cosa no de extrañar, vista la miopía con la que se tratan otros escenarios muchos más cercanos). V., Cervera, J. A., *Tras el sueño de China. Agustinos y dominicos en Asia Oriental a finales del siglo XVI*, Plaza y Valdés, Pozuelo de Alarcón, 2013, págs. 306 y ss. y Zhang Kai, *Historia de las relaciones sino-españolas*, Editorial popular, Madrid, 2014, págs. 209 y ss.

[23] Aunque no es nada nuevo: Zhou Enlai ya se quejaba en 1955, cuando se refería al hecho que «Estados Unidos sigue creando tirantéz en la región de Taiwán». V. Zhou Enlai, «Discurso en la Conferencia de Bandung», Conferencia Afroasiática de países no-alineados realizada en Bandung, Indonesia, entre el 18 y el 24 de abril de 1955; disponible (en lengua española) en: <https://www.marxists.org/espanol/zhou/1955/abril-a.htm>.

[24] «The Taiwan Question and China's Reunification in the New Era», 10 de agosto de 2022, Oficina de Asuntos de Taiwán y Oficina de Información del Gobierno de la República Popular China; disponible (en chino) en: <http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1728489/1728489.htm> y (en inglés) en: <http://en.people.cn/n3/2022/0810/c90000-10133593.html>

[25] La RPC, en cambio, ha intentado moderar los términos de su discurso, no utilizando expresiones como «liberar su territorio de Taiwán» utilizada en 1955 en el pasaje: «[...] la salvaguarda resuelta de la soberanía e integridad territorial son la demanda común de los países afroasiáticos y sus pueblos que se han despertado [...] la demanda de China de liberar su territorio de Taiwán también se ha granjeado el apoyo de todos los pueblos de Asia y Africa [...]». V. Zhou Enlai, *Cit.*

[26] (四个自信, sì gè zìxìn), impulsada por Xi Jinping y recogida en los estatutos del Partido Comunista de China, urge a sus miembros, a los funcionarios del gobierno y al pueblo chino a tener confianza en (i) el camino del socialismo con características chinas, (ii) las teorías rectoras, (iii) el sistema político, y (iv) la cultura propia.

[27] En otro pasaje del documento puede leerse: «Cuando Taiwán fue invadida por una potencia extranjera hace más de 100 años, China era un país pobre y débil. Hace más de 70 años, China derrotó a los invasores y recuperó Taiwán. Hoy, China se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo. Con un crecimiento significativo en su fuerza política, económica, cultural, tecnológica y militar, no hay probabilidad de que China permita que Taiwán se separe nuevamente».

[28] En clara alusión, entre otros, al Tratado de Shimonoseki, de 1895, que puso fin a la primera guerra sino-japonesa (centrada básicamente en el control de Corea), y por el que China cedía Taiwán a Japón (y, hay que recordar, no solo eso: la indemnización de Shimonoseki permitió al Japón adoptar el patrón oro en 1897 y desarrollar su economía a principios del s. XX). V. Gernet, J., *El mundo chino*, Crítica, Barcelona, 2005, pág. 517 y págs. 529 y ss.

[29] Que actualmente se quiere cambiar con la propuesta planteada por los senadores Menéndez, B., y Graham, L. V. *Taiwan Policy Act of 2022*; disponible en: <https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Taiwan%20Bill%20Text%20FINAL.pdf>

La declaración de 1979 es el segundo de los tres comunicados de EE. UU. en relación con la cuestión de Taiwán (el anterior del 72 y, el posterior, del 82), a los que se sumarían más tarde las *Seis Garantías* de Reagan: (i) «No acordamos fijar una fecha cierta para poner fin a la venta de armas a Taiwán»; (ii) «No vemos un papel de mediación para los Estados Unidos entre Taiwán y la República Popular China»; (iii) «No intentaremos ejercer presión sobre Taiwán para que inicie negociaciones con la República Popular China»; (iv) «No ha habido cambios en nuestra posición sobre el tema de la soberanía sobre Taiwán»; (v) «No tenemos planes de buscar revisiones a la *Ley de Relaciones con Taiwán*»; y (vi) «el Comunicado del 17 de agosto [tercer Comunicado] no debe interpretarse en el sentido de que hemos acordado participar en consultas previas con Pekín sobre la venta de armas a Taiwán», cuyo contenido ha sido desclasificado recientemente. V. *Financial Times* <https://www.ft.com/content/24e87b4b-b146-4ea8-a9b2-9f801af21ea6> y Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. <https://sgp.fas.org/crs/row/IF11665.pdf>

[30] *USA Taiwan relations Act 04/10/1979* (Public Law 96-8, en vigor desde el 1 d enero de 1979). Sin desperdicio: bajo el diálogo constructivo subyace el compromiso de defensa. En concreto, dicha ley establece que: «Estados Unidos proporcionará a Taiwán armas de carácter defensivo y mantendrá la capacidad de Estados Unidos para repeler cualquier recurso a la fuerza u otras formas de coerción que puedan poner en peligro la seguridad o el sistema social o económico del pueblo de Taiwán» y también lo reconoce como entidad jurídica ya que permite a Taiwán demandar y ser demandado en los tribunales de los Estados Unidos, de conformidad con las leyes de los Estados Unidos. Prosigue declarando que «la decisión de los Estados Unidos de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China se basa en la expectativa de que el futuro de Taiwán se determinará por medios pacíficos [...]». Se puede consultar en: <https://www.congress.gov/bill/96th-congress/house-bill/2479>

[31] *Cit., v. ut supra.*

[32] Según el documento, el volumen del comercio a través del Estrecho fue de solo 46 millones de dólares estadounidenses en 1978. Aumentó a 328.340 millones de dólares estadounidenses en 2021. El continente ha sido el mercado de exportación más grande de Taiwán durante los últimos 21 años, generando un gran excedente anual para la isla. El continente es también el principal destino de las inversiones fuera de la isla de Taiwán. A fines de 2021, las empresas de Taiwán habían invertido en casi 124.000 proyectos en el continente, por un valor total de 71.340 millones de USD. En 1987 se realizaron menos de 50.000 visitas entre los dos bandos; para 2019, este número se había disparado a unos 9 millones. Las estadísticas del Fondo Monetario Internacional muestran que en 1980 el PIB del continente era de unos 303.000 millones de USD, un poco más de 7 veces el de Taiwán, que era de unos 42.300 millones de dólares estadounidenses; en 2021, el PIB del continente fue de aproximadamente 17,46 billones de USD, más de 22 veces el de Taiwán, que fue de aproximadamente 790.000 millones de USD.

[33] Se establecería, según el propio *libro blanco* -siguiendo la cautelosa tradición de cómo se implementan las políticas públicas en la RPC- una zona piloto para el desarrollo integrado a través del Estrecho en la provincia de Fujian, promoviendo la integración a través de una mejor conectividad y políticas preferenciales, y sobre la base de la confianza y el entendimiento mutuos.

[34] Calificadas en el documento como «un obstáculo importante para la reunificación de China». Y añade: «Detrás de las cortinas de humo de "libertad, democracia y derechos humanos" y "defensa del orden internacional basado en reglas", algunas fuerzas anti-China en los EE. UU. distorsionan deliberadamente la naturaleza de la cuestión de Taiwán, que es puramente una cuestión interna».

[35] Reuniones informales entre ambos lados del Estrecho que se mantuvieron en noviembre de 1992, cuyas declaraciones resultantes son objeto todavía hoy de reinterpretación y discordia.

[36] Donde se establecen afirmaciones como las siguientes: «En particular, China continúa cambiando unilateralmente, o intentando cambiar, el *statu quo* mediante la coerción en el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional. Los lazos del país con Rusia, una nación agresora, se han profundizado en los últimos años, con navegaciones y vuelos conjuntos en las áreas que rodean a Japón por parte de barcos y aviones chinos y rusos. Además, China ha dejado claro que no dudará en unificar Taiwán por la fuerza, aumentando aún más las tensiones en la región» y «Taiwán es un socio extremadamente importante para Japón, que

comparte los mismos valores fundamentales como la libertad y la democracia. La estabilidad de la situación que rodea a Taiwán también es crítica para la seguridad de Japón y debe ser monitorizada de cerca con un sentido de urgencia mientras se coopera con la comunidad internacional, con base en el reconocimiento de que los cambios en el statu quo por medio de la coerción son desafíos compartidos a nivel mundial». V. *Defense of Japan 2022*, Ministerio de Defensa japonés; disponible (en inglés) en: https://www.mod.go.jp/en/publ/w_paper/wp2022/DOJ2022_Digest_EN.pdf

[37] V. la protesta formal frente al embajador de EE. UU. de 2 de agosto en la web del ministerio de Asuntos Exteriores de la RPC; disponible (en chino) en: https://www.fmprc.gov.cn/wjbxw_new/202208/t20220803_10732681.shtml y (en inglés): https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjbxw/202208/t20220803_10733167.html.

Por otro lado, los *media* occidentales, en mandarín e inglés, no dejan de poner de manifiesto las palabras más duras, de Wei Fenghe (ministro de Defensa y miembro de la Comisión Militar Central). V., por todos, en chino: <https://cn.nytimes.com/china/20220613/china-taiwan-us/> y en inglés: <https://www.nytimes.com/2022/06/12/world/asia/china-taiwan-us.html>. La dureza también está explícita en el libro *Blanco*: «Nadie debe subestimar nuestra determinación, voluntad y capacidad para defender la soberanía y la integridad territorial de China [...]. Solo nos veremos obligados a tomar medidas drásticas para responder a la provocación de elementos separatistas o fuerzas externas si alguna vez cruzan nuestras líneas rojas [...]. Siempre estaremos dispuestos a responder con el uso de la fuerza u otros medios necesarios a la interferencia de fuerzas externas o la acción radical de elementos separatistas. Nuestro objetivo final es asegurar las perspectivas de la reunificación pacífica de China y avanzar en este proceso».

[38] De hecho, el andamiaje teórico de la política exterior de Xi siempre ha promulgado, aunque sea a nivel teórico, el pacifismo, la cooperación y las buenas relaciones de vecindad. V. Xi Jinping, «Take on the Task of Expanding Cross-Straits Relations and Achieving National Rejuvenation», *The governance of China*, Foreign Languages Press, Pekín, 2014, y, en general, todos los artículos que conforman la recopilación que recoge dicho volumen.

[39] V. Esteban, M., «La acción exterior de China tras el XIX Congreso: la consolidación de una política exterior asertiva», en Beltrán, J. (ed.), *Viaje al centro. El XIX Congreso del Partido Comunista Chino*, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2017, págs. 181 y ss. Acierta el autor al afirmar que: «No en balde, desde que China comenzase a sufrir la presión de las potencias coloniales a mediados del siglo XIX, ningún líder chino se ha mostrado tan confiado como Xi en el papel que puede desempeñar Beijing dentro de la comunidad internacional. Esta confianza se sustenta en un espectacular crecimiento de las capacidades de la República Popular China en todos los ámbitos, económico, militar y blando».

[40] V. *The Guardian* <https://www.theguardian.com/world/2022/aug/14/us-congressional-delegation-visits-taiwan-on-heels-of-pelosi-trip> y <https://www.theguardian.com/world/2022/aug/01/british-mps-plan-visit-to-taiwan-as-tension-with-china-simmers>

[41] Algún magnate de EE. UU., favoreciendo el ruido mediático (para que sea escuchado especialmente por los nuevos *urbanitas* chinos) y motivado por el resquemor de la pasada crisis de las divisas, se ha aventurado a pronosticar que Xi no será próximamente reelegido para un tercer mandato y, si lo es, no podrá contar con un Comité Permanente de su

influencia (arguyendo contiendas internas entre la facción que representa Xi Jinping y la de Li Keqiang, a favor de la influencia de este último). V. al respecto:

<https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-05-25/xi-jinping-may-not-get-a-third-term-george-soros-thinks-so-here-are-the-odds>

Bibliografía utilizada

Capella, J.-R., «Con el mantel puesto», *Mientras Tanto*, *mientrastanto.e*, 203, julio 2021, haciendo referencia al texto publicado por dicho autor en *InfoLibre*; disponible en: <https://mientrastanto.org/boletin-203/de-otras-fuentes/con-el-mantel-puesto>.

Cervera, J. A., *Tras el sueño de China. Agustinos y dominicos en Asia Oriental a finales del siglo XVI*, Plaza y Valdés, Pozuelo de Alarcón, 2013.

Esteban, M., «La acción exterior de China tras el XIX Congreso: la consolidación de una política exterior asertiva», en Beltrán, J. (ed.), *Viaje al centro. El XIX Congreso del Partido Comunista Chino*, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2017.

Gernet, J., *El mundo chino*, Crítica, Barcelona, 2005.

[Japón] ministerio de Defensa, *Defense of Japan 2022*, Ministerio de Defensa japonés; disponible (en inglés) en: https://www.mod.go.jp/en/publ/w_paper/wp2022/DOJ2022_Digest_EN.pdf

ONU, *United Nations Peacekeeping, Troop and police contributors*, <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors> (a 31 de mayo de 2022).

OTAN, *Embrace the challenge, guard the values. A report by the NATO 2030. Young Leaders Group - for this generation and the next* (junio 2020); disponible en: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/2/pdf/210204-NATO2030-YoungLeadersReport.pdf.

OTAN, *London Declaration* (diciembre 2019); disponible en: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm

OTAN, *Madrid Summit Declaration*, emitida por los jefes de estado y de gobierno participantes en la reunión del Consejo del Atlántico Norte en Madrid el 29 de junio de 2022; disponible en: https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_196951.htm?selectedLocale=en

OTAN, *NATO Strategic Concept 2022*, disponible (en inglés) en: <https://www.nato.int/strategic-concept/>, y (en francés) en: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept-fr.pdf

OTAN, *OTAN 2030. Informe de jóvenes líderes*, febrero 2021; disponible (en inglés) en: <https://www.nato.int/nato2030/young-leaders/>

Pasolini, P.P., *El caos*, citado en

<http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/approfondimenti/pasolini-contra-vampiros-y-muertos-vivientes-burgueses-esit/>. La columna de Pasolini «El caos» apareció en el semanario *Tempo*, desde el 6 de agosto de 1968 hasta el 24 de enero de 1970, con escasas y breves interrupciones, publicada por Editori Ruiniti en 1980 y por Editorial Crítica en 1981.

[República Popular China, ministerio de Asuntos exteriores], conferencia de prensa ordinaria del ministerio de Asuntos exteriores de 30 de junio de 2022; disponible, en chino, en: https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/202206/t20220630_10713013.shtml

[República Popular China], *Constitución de la República Popular China*; disponible (en inglés) en:

<http://www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml>

[República Popular China, gobierno], declaración del gobierno de la RPC de 16 de octubre de 1964 al respecto del test nuclear y la política que se compromete a aplicar al respecto; versión consultable en los archivos del Wilson Center: <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/134359.pdf?v=b1e04ac05705>

[República Popular China, Misión de la República Popular China en la Unión Europea], Respuesta a la declaración de la Cumbre de la OTAN de Madrid que califica a China como «desafío sistémico». Disponible, en chino, en: http://eu.china-mission.gov.cn/stxw/202207/t20220702_10714122.htm

[República Popular China, ministerio de Asuntos exteriores], protesta formal frente al embajador de EE. UU. de 2 de agosto en la *web* del ministerio de Asuntos exteriores de la RPC; disponible (en chino) en: https://www.fmprc.gov.cn/wjbxw_new/202208/t20220803_10732681.shtml y (en inglés): https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjbxw/202208/t20220803_10733167.html

[República Popular China, oficina de Asuntos de Taiwán], «The Taiwan Question and China's Reunification in the New Era», 10 de agosto de 2022, Oficina de Asuntos de Taiwán y Oficina de Información del Gobierno de la República Popular China; disponible (en chino) en: <http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1728489/1728489.htm> y (en inglés) en: <http://en.people.cn/n3/2022/0810/c90000-10133593.html>

USA Taiwan relations Act 04/10/1979 (Public Law 96-8). Se puede consultar en: <https://www.congress.gov/bill/96th-congress/house-bill/2479>

USA Taiwan Policy Act of 2022 (propuesta de los senadores Menéndez, B., y Graham, L.); disponible en: <https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/Taiwan%20Bill%20Text%20FINAL.pdf>

Xi Jinping, discurso de 1 de julio de 2022 con motivo del 25º aniversario del «regreso» de Hong Kong a la RPC y la ceremonia inaugural del sexto mandato del gobierno de dicha Región Administrativa Especial; disponible en: https://english.www.gov.cn/news/topnews/202207/02/content_WS62bf8de6c6d02e533532d147.html

Xi Jinping, «Take on the Task of Expanding Cross-Straits Relations and Achieving National Rejuvenation», *The governance of China*, Foreign Languages Press, Pekín, 2014.

Zhang Kai, *Historia de las relaciones sino-españolas*, Editorial popular, Madrid, 2014.

Zhou Enlai, «Discurso en la Conferencia de Bandung», *Conferencia Afroasiática de países no-alineados realizada en Bandung*, Indonesia, entre el 18 y el 24 de abril de 1955; disponible (en lengua española) en: <https://www.marxists.org/espanol/zhou/1955/abril-a.htm>.

22/8/2022

Antonio Antón **Las clases sociales**

Las clases y capas sociales, cuya existencia pareció superada en el discurso público en un cierto momento, reclaman hoy de nuevo su protagonismo

Marina Subirats (2012)

Clase es una categoría 'histórica'... La clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras, fases del proceso real histórico

E. P. Thompson (1979)

Los debates sobre el carácter de las clases sociales, su estructuración, formación y pugna, atraviesan las distintas corrientes ideológicas, políticas y socioculturales. En particular, existe una fuerte controversia histórica sobre la composición y el papel de las clases trabajadoras, supuestamente en declive, en contraposición con el auge político-mediático de las clases medias. Aquí voy a hacer alusión a algunas de estas posiciones, con el ánimo de actualizar los análisis y readecuar un enfoque realista, crítico y transformador.

Primero, señalo el sentido de la mayor visibilidad mediática y política de las clases sociales derivado del nuevo discurso del presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que ha arropado su nueva iniciativa política. Segundo, con abundantes datos sociológicos explico la situación de las clases sociales por su situación objetiva, la identificación subjetiva de clase y las trayectorias sociolaborales ascendentes y estancadas de las clases trabajadoras. Tercero, analizo varias controversias: el concepto relacional de clase y el nivel de rentas, la relación de dominio / subordinación y las alianzas de clase, el auge de las clases medias y su sesgo interpretativo, la transversalidad popular frente a clases dominantes y la clase social como sujeto colectivo.

Vuelven las clases sociales

El presidente del Gobierno de coalición, el socialista Pedro Sánchez, lo ha declarado solemnemente en el Estado de la nación: **el Ejecutivo progresista representa y defiende los intereses de la ‘clase media trabajadora’ frente a ‘poderes opacos’.** Hay un reconocimiento de la existencia de clases sociales y del conflicto social entre ellas y entre sus representantes, en este caso entre la izquierda gobernante, con sus socios parlamentarios, y las derechas.

No es la primera vez que líderes socialistas utilizan esa expresión como objeto hacia el que dirigir sus políticas públicas. La propia ministra de Hacienda y actual número dos del *Partido Socialista*, María Jesús Montero, se ha atrevido a cuantificar los dos campos: la clase media trabajadora constituiría el 95% de la población y los poderes mencionados serían el 5% restante. No obstante, existe cierta indefinición de las características de ambas categorías y de su relación.

Con respecto a la mención de ‘clase media trabajadora’, parece que se refiere a ‘una’ clase que sería mixta y a la que en su denominación se le da prevalencia a la palabra media. Incluso en una acepción restringida pareciera que se refiere solo a una parte de la clase media, la que trabaja (y paga impuestos), excluyendo a las capas medias inactivas y rentistas.

Algunos dirigentes socialistas y medios afines han introducido entre medio la ‘y’ e incluso han hablado en plural: ‘clases medias y trabajadoras’; sería lo más adecuado si se quiere evitar equívocos y reconocer y sumar ambas clases sociales al mismo tiempo que expresar su especificidad y diversidad interna. Su conjunto se ha denominado con otras fórmulas según distintas sensibilidades académicas o ideológicas: clases o capas populares, gente común o corriente, pueblo, mayoría social o ciudadana, el 99%, los de abajo...

No hace falta matizar, nos quedamos con la idea general. Existen elementos comunes y compartidos a ambas clases sociales, junto con su gran fragmentación interna socioeconómica, étnico-nacional, de sexo/género, etc., así como algunas condiciones materiales y culturales diferenciadas y otras transversales. Pero podemos simplificar esos dos campos: uno popular, y otro poderoso, tal como he explicado en mi libro "[Cambios en el Estado de bienestar](#)".

El aspecto débil del discurso es que esa expresión de clase es utilizada no como sujeto colectivo de acción y expresión cívica en la relación sociopolítica sino como objeto receptor al que se dirige la gestión de la representación política para conseguir su apoyo electoral y su legitimación social. Luego vuelvo sobre ello.

Por otro lado, respecto del otro polo de las élites poderosas o clases altas, se habla de las grandes corporaciones energéticas y financieras y de un difuso poder opaco (¿mediático e institucional?). En ese sentido, el anterior presidente socialista Rodríguez Zapatero fue más preciso al comienzo de la crisis financiera del año 2008 hablando de los 'poderosos' que apuntaban a la prepotencia y la austeridad que más tarde acató.

Desde mediados de los años noventa, la mayoría de la socialdemocracia europea, con su posición de tercera vía, británica, o nuevo centro, alemán, había abandonado las políticas, la representación y el lenguaje de clase (trabajadora). Su continuidad quedaba en manos de la izquierda tradicional a la que se debía marginar junto con la (supuesta) desaparición del conflicto social y la afirmación del consenso político con las derechas, los grupos de poder y el orden neoliberal.

Ese giro centrista se correspondía con una entronización de las clases medias como base social, supuestamente mayoritaria, y eje central de la acción política. Las clases trabajadoras desaparecían y solo quedaba una clase 'baja' minoritaria y marginal.

Todo ello ha fracasado desde la crisis socioeconómica, las políticas de austeridad y la protesta social progresista de esta década larga que, en España, ha supuesto una recomposición y renovación de la representación de las izquierdas o fuerzas progresistas y que ha culminado con el actual gobierno de coalición progresista.

Por tanto, el nuevo discurso de la dirección socialista expresa un giro retórico sobre la existencia de la clase trabajadora junto con la clase media, diferenciada de los grandes poderes económicos y opacos. **Aparte de los problemas antedichos sobre su significado, se trata de valorar la**

función de este discurso: intentar apropiarse la representatividad de la mayoría ciudadana y de reducir la del *Partido Popular*, que defendería solo los intereses de esa minoría oligárquica en contraposición con la defensa socialista de las amplias mayorías sociales. Aunque, como se sabe, la expresión político-electoral de la sociedad está más diversificada y condicionada por otras variables, además de la socioeconómica y de estatus.

No se trata solamente de la constatación de una realidad objetiva de situaciones de clase contrapuestas sino que se asocia a toda una retórica de polarización de intereses y estrategias políticas. Constituye el marco del llamado giro a la izquierda o, si se quiere, la confrontación ideológica y política y la reafirmación partidaria ('vamos a por todas') frente a las derechas desde el nuevo discurso socialdemócrata. El objetivo político está claro: ganar las elecciones municipales y autonómicas próximas, y preparar el terreno para garantizar la victoria en las elecciones generales de fin del año 2023. Todo ello ha suscitado nuevas ilusiones en el campo socialista.

No obstante, esa nueva retórica tendría un papel político-discursivo, pero sin entrar a fondo en clarificar y posicionarse frente a los grupos de poder que se oponen a una alternativa de cambio de progreso, ajustar la base social de apoyo y definir una estrategia reformadora y de alianzas firme frente a ellos. O sea, la duda es sobre su consistencia para una reorientación política necesaria con una reafirmación progresista y de izquierdas, que es el debate central para avanzar en un proyecto de país a medio plazo basado en la justicia social, los derechos humanos y la democracia. Aun con esos límites, es un avance en el marco discursivo que incluso la derecha ha criticado de 'podemización'.

Las medidas protectoras y redistributivas aprobadas constituyen un programa mínimo para hacer frente a la prolongada crisis social y económica que se ha agravado por la pandemia y por la guerra en Ucrania, particularmente con la inflación de precios y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. De entrada, al menos para este otoño, el Ejecutivo ha recuperado cierta iniciativa política. Pero el plan y el discurso de ambos socios gubernamentales deben ser claros y creíbles para ese objetivo reformador.

No entro a valorar las positivas medidas adoptadas y la necesidad de su concreción y refuerzo, en particular en dos campos que han quedado parcialmente fuera: la recuperación del poder adquisitivo de salarios y pensiones y el control riguroso de precios ante la inflación galopante, y una profunda reforma fiscal progresiva que garantice la protección social, los servicios públicos y la recuperación y modernización económica (junto con los

fondos europeos).

Solo pongo el acento en la necesidad de la coherencia entre ese marco discursivo de confrontación política, la estrategia reformadora, incluido los próximos presupuestos generales, y la expectativa de avanzar en los resultados esperados de incrementar el apoyo social y electoral. Ese debería ser el sentido de la retórica sobre las bases sociales a representar, las clases medias y trabajadoras, y los adversarios a condicionar, los grupos poderosos, para desarrollar una gestión socioeconómica y laboral progresista, complementada con los avances democratizadores y la articulación territorial, especialmente el diálogo sobre el conflicto catalán.

Las clases sociales nunca se habían ido. Solo se habían transformado, especialmente, su marco interpretativo y discursivo. Ante cierta dilución de las clases trabajadoras en las últimas décadas, ahora vuelven aunque sea de la mano del concepto mixto de clase media y trabajadora. Lo principal ahora es impulsar un reformismo fuerte de progreso.

Las clases trabajadoras existen

Para analizar las clases sociales en su situación objetiva, el criterio principal es la diferenciación en la posición de dominio / subordinación (explotación, expropiación, discriminación, subalternidad) entre los grupos sociales en el conjunto de sus relaciones sociales, económicas, familiares y laborales, incluido el componente de género por la dependencia y desventaja de las mujeres en esas estructuras. Tiene que ver con la segmentación del estilo de vida y de consumo, o sea, con los niveles de ingresos, empobrecimiento y desigualdad social, así como con la edad y las capacidades académicas y étnico-culturales. Existen buenos indicadores de rentas, tipo de ocupaciones o formación escolar, pero el análisis debe ser más complejo e interactivo.

Junto con estas condiciones 'objetivas' y su conciencia social el aspecto principal para analizar la clase como sujeto social, tal como expresa E. P. Thompson, es su experiencia relacional, sociopolítica y cultural, aspecto que habrá que considerar. Empiezo por el análisis de esa clase social 'objetiva', cuyos fundamentos ya he abordado en el libro [**Cambios en el Estado de bienestar.**](#)

Acaba de publicarse la EPA de este segundo trimestre de 2022, el más regular respecto del mercado de trabajo, que voy a utilizar para el análisis de clase objetiva. Y la comparo con la situación del mismo trimestre del año 2012, en lo peor de la crisis económica. Los datos los expongo en el gráfico adjunto.

El indicador utilizado, de tradición neoweberiana, es el tipo de ocupación, al que he añadido el nivel de paro. Es decir, es un análisis de la población 'activa'. Dejo al margen la población inactiva (estudiantes, jubilados y con trabajo no remunerado —las convencionales amas de casa—), que en su conjunto por su nivel de mayor dependencia y menores ingresos podrían ampliar más la composición de las clases trabajadoras.

La EPA distribuye a la población ocupada (asalariada y autónoma) en diez categorías: 1) *Directores y gerentes*. 2) *Técnicos y profesionales científicos e intelectuales*. 3) *Técnicos; profesionales de apoyo*. 4) *Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina*. 5) *Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores*. 6) *Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero*. 7) *Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)*. 8) *Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores*. 9) *Ocupaciones elementales*. 0) *Ocupaciones militares*.

El grupo 1) es el que forma las clases altas o dominantes. Los grupos 2) y 3), las clases medias. Y los grupos 4) a 9) las clases trabajadoras, donde también he incluido a la gente parada. Las fronteras de clase no son exactas. Puede haber ocupaciones de técnicos en situación precaria que formarían parte de la clase trabajadora y artesanos a los que les va bien, pertenecientes a la clase media. He excluido del análisis el grupo 0) de poco más de cien mil personas (apenas el 0,5%) por la dificultad para distribuirlo entre las tres clases sociales atendiendo a sus jerarquías (generales, oficiales, soldados), aunque no modifica los porcentajes totales.

Clases sociales (por tipo de ocupación y %)

Clases dominantes (2012T2): 3,8

Clases dominantes (2022T2): 3,9

Clases medias (2012T2): 21,02

Clases medias (2022T2): 27,38

Clases trabajadoras (2012T2): 75,20

Clases trabajadoras (2022T2): 68,74

Fuente INE: EPA 2022T2 y 2012T2, con elaboración propia

El total de población activa es similar entre los dos momentos: 23,4 millones en 2022 y 23,5 millones en 2012. La diferencia significativa está en la variación entre la dimensión de la población ocupada y la parada: 20,47 millones + 2,92 millones en 2022, frente a 17,76 millones + 5,73 millones en 2012. O sea, en esta década ha disminuido el número de personas desempleadas y ha aumentado el de ocupadas, con una variación de unos 2,7 millones de personas que han pasado de una situación a otra. Ello ha supuesto un cambio de la estructura de clases de la población activa y se da por supuesto que de sus familias o unidades de convivencia, con impacto sobre la distribución más asequible de sus gastos, en particular los de vivienda.

El dato global más relevante es la composición ampliamente mayoritaria de las clases trabajadoras, que en 2012 eran el 75,2% del total frente al 21% de las clases medias y la minoría del 3,8% de las clases dominantes. Este porcentaje de las capas altas apenas se modifica, pero sí observamos una modificación sustancial de más de seis puntos de incremento en 2022 de las clases medias (hasta el 27,4%) y una reducción de las clases trabajadoras (hasta el 68,7%). Sin embargo, la desproporción entre ambas todavía es muy grande: las clases medias no alcanzan la mitad de las clases trabajadoras. Esa es la situación ‘objetiva’ de clase social y la tendencia generada.

Podemos compararla con los datos utilizados por el CIS, en la misma época (Estudio 3371 de julio de 2022) y con los mismos grupos de la EPA de la población activa. Pues bien, para la selección de sus estudios demoscópicos, incluidas las estimaciones de voto electoral, la muestra utilizada por el CIS está compuesta por el 7,9% de clases altas o dominantes, el 42,8% de clases medias y el 49,3% de clases trabajadoras.

Hay que considerar que el tamaño muestral de la EPA, ciento sesenta mil personas, es mucho más amplio que el del CIS, unas cuatro mil personas, por lo que los resultados de la EPA tienen una mayor validez y objetividad. Ese sesgo metodológico por clase social del CIS, en perjuicio de la representación de las clases trabajadoras, conlleva la sobrerrepresentación de veinte puntos de las clases medias respecto de los datos más realistas de la EPA. No entro a valorar los evidentes condicionamientos que la falta de rigurosidad de ese indicador tiene para sus estudios de la sociedad. Lo que me interesa destacar es la comparación de esa realidad material con la conciencia social que también estudia el CIS.

La identificación subjetiva de clase

Como aspecto adicional comento los datos del propio CIS sobre la *identificación subjetiva de clase*, en este caso del conjunto de la población cuya variada denominación he agrupado en las tres clases básicas: Clase alta (y media alta): 5,1%; clase media (media): 48,2%; clase trabajadora (clase trabajadora u obrera, clase baja o pobre, clase media-baja y proletariado): 35,8%; al margen hay un 10,9% que no se define (*No sabe/No contesta*) o lo hace por 'otras' denominaciones respecto de esos tres bloques en los que he agregado las respuestas.

Aunque son datos sobre campos muestrales heterogéneos, se observa el sesgo convencional de varios segmentos poblacionales cuya identificación se asocia con un escalón superior al de su estatus objetivo o material; o sea, su pertenencia de clase la define por sus objetivos y deseos no por su posición sociolaboral y vital actual.

Ya he dicho que las clases medias estaban sobrerrepresentadas en el estudio del CIS y las clases trabajadoras infrarrepresentadas. Pero contando con esa distorsión, la discordancia entre situación objetiva e identificación subjetiva suma entre seis y siete puntos. Se trata de un sector de clase media (subjetiva) 'aspiracional', probablemente jóvenes con mayores credenciales académicas y con expectativas de movilidad ascendente inmediata desde su situación todavía precaria.

Por tanto, es relevante la existencia en torno a ese 6% o 7% de clase trabajadora 'objetiva' que se identifica, subjetivamente, con la clase media a la que aspira pertenecer, aunque todavía permanezca en esa situación bloqueada de clase trabajadora. Ello sí tiene implicaciones sociopolíticas y culturales, aunque acotadas a esa dimensión.

Trayectorias sociolaborales ascendentes y estancadas

Por otra parte, hemos visto cómo en esta década, desde la aguda crisis con fuerte desempleo de 2012 hasta la mejora relativa del empleo actual, **ha habido otro 6% de personas que sí ha experimentado realmente esa movilidad ascendente de una situación de clase trabajadora a otra de clase media.**

Además, hay una movilidad ascendente dentro de la propia clase trabajadora, desde la situación de precariedad laboral, de paro o temporalidad, a una relación laboral más estable. Se trata de la gente en paro (2,7 millones, el 12% de la población activa actual) que ha pasado a una situación de empleo, aunque sea precario. Igualmente, tras la reciente

reforma laboral, han mejorado su estatus laboral las personas con una mayor estabilidad por la mayor contratación indefinida (3,3 millones en el primer semestre de 2022, 2,3 millones más que en el mismo periodo del año pasado) frente a la temporalidad anterior (que ha disminuido en 1,4 millones), aunque la mayoría son a tiempo parcial y afecta más a las mujeres.

Todo ello constituye una mejora relativa en las condiciones de trabajo y de vida de segmentos significativos de la población trabajadora, que podemos cuantificar en un tercio de la población activa, casi ocho millones de personas. No obstante, ese avance se contrarresta con la incertidumbre, especialmente derivada de la inflación, con la correspondiente pérdida de poder adquisitivo de los salarios de esos segmentos ascendentes y, sobre todo, de la mayoría de la población activa estancada, que suman el resto de dos tercios, más de quince millones, y con algunos riesgos descendentes. Aunque aquí habría que diferenciar varios segmentos la prolongación de cuya trayectoria laboral tiene más o menos efectos problemáticos, lo que afecta a sus expectativas vitales: desde los más graves de los tres millones que persisten en el paro, a los sectores de clase trabajadora empleada con bajos salarios y devaluación salarial, así como las capas medias con mayor estatus y capacidad adquisitiva, a lo que habría que añadir la especificidad de la población inmigrante.

Junto con esa relativa mejora en esos segmentos significativos y ese estancamiento en la mayoría trabajadora respecto de sus condiciones laborales, el conjunto continúa sometido a la prepotencia empresarial y sus presiones por el incremento de la productividad, así como a la pérdida de condiciones y derechos que todavía persiste de la época más dura de los recortes sociales y de los servicios públicos, la devaluación salarial y la austeridad económica y presupuestaria. Es la base material del todavía existente malestar social, junto con la desconfianza en la clase política por una insuficiente gestión reformadora que dé más seguridad y certidumbre vital a esas mayorías de clase trabajadora.

En conclusión, las clases trabajadoras existen. Pero, además de sus condiciones objetivas y subjetivas, aquí analizadas, el factor fundamental de su existencia como sujeto colectivo, siguiendo a E. P. Thompson, es su experiencia relacional, su comportamiento sociopolítico y su diferenciación sociocultural, aspecto que habrá que tratar en otro momento.

El concepto relacional de clase y el nivel de rentas

El concepto colectivo de clase social es relacional. Se refiere a la posición de subordinación o dominación que las personas (ocupadas, paradas o inactivas) tienen en las relaciones sociales y productivas.

Las clases trabajadoras tienen un estatus subalterno diferenciado respecto de otras posiciones sociolaborales de control o poder, las de las clases dominantes y, con posiciones intermedias y contradictorias, las de las clases medias. Y, por supuesto, con distintos niveles de rentas o capacidad adquisitiva y nivel de vida y consumo.

La diferenciación principal no es la vinculación al factor trabajo o al estatus de asalariado (o autónomo), que están segmentados. Ello es importante pero, ante su división interna, lo decisivo es la situación de subalternidad, explotación y discriminación, o bien la posición de control productivo y laboral con ventajas comparativas, y no el contrato formal de trabajo. La clasificación en las clases trabajadoras, por condiciones objetivas, conlleva una situación de 'desposesión' de propiedades y riquezas que pudieran facilitar suficientes rentas para poder vivir dignamente solo con ellas; es decir, siendo exclusivamente propietario y rentista.

Por tanto, esa mayoría social subalterna y sus familias deben depender de la venta de la propia fuerza de trabajo (los salarios y las prestaciones derivadas de ello, como las de desempleo y las pensiones contributivas). No obstante, hay personas trabajadoras (asalariadas y autónomas) que son de clase media, incluso una parte (altos ejecutivos) de clase alta, al tener una posición de dominio y privilegios en las relaciones productivas y laborales, así como en las estructuras sociales y con unas rentas altas.

La mayoría de los estudios sobre las clases sociales y las teorías de la estratificación social, de impronta liberal, como los de la OCDE, se basan en la clasificación de estratos por nivel de rentas. Puede ser un valor indicativo, pero el problema principal es la opción metodológica de los rangos en que se diferencian las tres clases sociales: ALTA (por encima del 200% de la renta media), MEDIA (entre el 75% y el 200% de la renta media) y BAJA, por debajo de ese 75%.

Otros organismos internacionales como el prestigioso y documentado *World Inequality Database*, sitúan la frontera para clasificar la clase media en la renta media, con lo que se ensancha la adscripción objetiva a la clase baja, se reduce la de la clase media y se equilibran ambas clases.

A ese respecto, constato varios indicadores de ingresos. Según la Encuesta de Estructura salarial de 2020 (publicada en junio de 2022), el salario medio bruto anual es de 25.165 euros y de 1.798 mensual, en catorce pagas. **Así, contado solo con la población asalariada, con ese último criterio de clasificación de clase, las personas asalariadas con ingresos brutos**

inferiores a 1.800 euros serían de clase trabajadora y por encima de clase media.

En el año 2016 el salario medio era algo superior, de 1.878 euros; supone cierta devaluación salarial (aunque la más profunda se produjo entre 2010 y 2015), sobre todo como consecuencia de la creación de nuevo empleo precario con bajos salarios. En todo caso, esa media de ingresos salariales brutos, con las pequeñas oscilaciones anuales, es una referencia para la distinción de clase social de la población asalariada según sus ingresos salariales.

Respecto del sector asalariado y siguiendo este criterio de rentas, la composición de clase es la siguiente: en torno a un 60% son de clase trabajadora (que son los que sufren la devaluación salarial, especialmente la mitad de ella más baja y precaria), 30% de clases medias y 10% de clases altas, y ambas mejoran algo su poder adquisitivo.

Esa distribución varía algo en relación con la población activa (personas asalariadas junto con autónomas y paradas) por tipo de ocupación que, según la EPA 2022T2 y los estudios propios, es como sigue: clases trabajadoras, 68,7%; clases medias, 27,4%,; y clases altas o dominantes, 3,9%.

En todo caso, las clases trabajadoras, por sus condiciones objetivas, están en torno a los dos tercios, el doble que las clases medias, que no llegan a un tercio. La percepción social y, sobre todo, mediática, será diferente.

También hay que considerar que la categoría de asalariado (igual que la de trabajador/trabajadora) no es sinónimo de pertenencia objetiva a la clase trabajadora; y, al contrario, la situación de paro o inactividad tampoco las excluye de esa participación en las clases trabajadoras.

En relación con los indicadores de las rentas, el PIB per cápita de 2021 es de 25.460 euros, la renta media por persona es de 12.269 euros y la renta media *equivalente* por persona de 18.120 euros (17.900 de las mujeres y 18.339 de los varones); este es el dato más significativo ya que se computan los gastos de alquiler en la unidad de convivencia, lo que supone 1.294 euros en 14 pagas; el 75% son 970 euros mensuales (inferior al SMI) a partir de los cuales se pertenecería a la clase media según la OCDE y por debajo a la clase baja. Por otro lado, la pensión media (con datos de abril 2022) es de 1.087 euros y la de jubilación, 1.251 euros, mientras las nuevas altas de jubilación llegan a 1.364 euros (datos a junio 2022).

La relación de dominio / subordinación y las alianzas de clase

Por mi parte, para un análisis de clase ‘objetiva’ la referencia interpretativa más interesante y realista es la de los estudios del neomarxista y neoweberiano Erik Olin Wright, con su énfasis en la clasificación basada en la posición de dominio (o control) / subordinación de la población y el carácter contradictorio de las clases medias. **Es decir, destaco la relevancia de la ‘situación de clase’ de individuos y grupos sociales respecto de las relaciones de poder y estatus social, incluyendo su posición en las estructuras económicas, productivas, reproductivas y laborales, así como en las trayectorias socioculturales, incluidas las de género y étnico-nacionales, y las dinámicas institucionales y políticas.**

En ese sentido, con los datos disponibles, lo más cercano como fuente de datos es el tipo de ocupación que estudia la EPA, además de la situación de desempleo, cuyos resultados para la población activa en 2022T2 he avanzado antes y he desarrollado en otra parte.

El debate académico, mediático y político es intenso y controvertido. La posición dominante en las grandes instituciones estaba clara hasta hace poco tiempo: Vivimos en unas sociedades de ‘individuos’ de clase media muy mayoritaria, en la que se difuminan las clases dominantes y se invisibilizan las clases trabajadoras. **Esa visión de carácter liberal no conlleva solo un problema analítico sino, sobre todo, sociopolítico ya que afecta a las estrategias políticas y la legitimación de los distintos actores.**

Particularmente, con la expansión económica de la posguerra mundial, la conformación de los Estados de bienestar y el relativo consenso político y social en las sociedades occidentales, se amplían y, sobre todo, se reafirman social, política y mediáticamente la existencia de las clases medias que aparecen como mayoritarias y prevalentes en el discurso público dominante. Es la hegemonía del pensamiento liberal en conflicto con la tradición de las izquierdas, socialdemócratas y eurocomunistas, ancladas en la defensa de las clases trabajadoras, pero que ya defendían alianzas populares con sectores de clases medias, nacional-populares o de la ‘cultura’. Aunque, supuestamente, bajo la hegemonía o la dirección de las clases trabajadoras y sus organizaciones sociales y partidarias de referencia, según la tradición gramsciana y antifascista o del compromiso histórico eurocomunista.

El auge de las clases medias y su sesgo interpretativo

Desde los años ochenta y noventa, con la revolución conservadora y la tercera vía socioliberal, se produce un mayor protagonismo mediático de las clases medias que desplaza al de las clases trabajadoras, que se infravaloran; solo existen clases bajas o pobres consideradas marginales. Igualmente, prevalece el modelo social y político neoliberal y socioliberal con la moderación política y

el consenso institucional, frente a pugna transformadora de las clases trabajadoras en cuanto sujeto colectivo, el llamado movimiento obrero y su mundo asociativo y cultural, vinculado a las izquierdas, y ambos en declive. **Por tanto, lo que se reduce es el papel público de las clases trabajadoras como agente sociopolítico autónomo y con influencia social, objetivo estratégico del poder establecido.**

Desde hace décadas, tal como he señalado en el libro [*Cambios en el Estado de bienestar*](#), esa interpretación dominante del predominio de las clases medias tiene un sesgo ideológico-político: ha pretendido darles a ellas y sus demandas mayor visibilidad y, sobre todo, compatibilizar los intereses de los grupos de poder establecido con algunas de sus ventajas posicionales, a efectos de conseguir una legitimidad social básica entre ellas; la contrapartida es la restricción de la realidad, los intereses y la expresión de las clases trabajadoras y el abandono de firmes políticas reformadoras progresistas, con fuerte componente igualitario-emancipador.

Todavía más complejo que el análisis de la composición 'objetiva' de clase ha sido el de la percepción subjetiva o identificación de clase como expresión de esa pertenencia, su influencia en la conformación de los sujetos sociopolíticos, el comportamiento electoral y la legitimación institucional.

La disputa ha llegado a la misma formulación de las opciones frente a la clase media. Las respuestas son muy distintas si la identificación alternativa requerida es con la clase baja, estigmatizada y asimilada a pobre en el esquema de la OCDE, o con la clase trabajadora, mejor que obrera y significativo menos desacreditado.

Por ejemplo, en EE.UU., supuesto modelo social de clase media, ya en los años cuarenta del siglo pasado, con una identificación con la clase alta del 6%, ante la opción de pertenencia a la clase media frente a clase baja se definían en una proporción de 79% por la clase media y el 15% por la baja; pero si en vez de identificarse con la clase baja se preguntaba por la pertenencia subjetiva a la clase trabajadora los datos eran: clase media, 43%; clase trabajadora, 51%. Es decir, incluso esa identificación era mayoritaria en ese país y más de un tercio autoidentificado con la clase media (frente a la baja) pasaba a identificarse con la clase trabajadora.

Aquí, el CIS, para la identificación subjetiva de clase de la población, ofrece media docena de denominaciones (clase trabajadora, obrera, proletariado, medio-baja, pobre o baja) que podemos englobar en la palabra clase trabajadora con los resultados siguientes (entre paréntesis la composición de clase objetiva de la población activa, también del CIS): clase alta (y medio

alta): 5,1% (7,9%); clase media (media): 48,2% (42,8%); clase trabajadora: 35,8% (49,3%); al margen hay un 10,9%, la mayoría de clase trabajadora objetiva, que no se define por ninguno de los tres bloques.

O sea, en términos de situación objetiva hay una ventaja de la composición de clase trabajadora de seis puntos según el CIS (recordando que sus datos están sesgados respecto de los de la EPA, más amplios y rigurosos, donde la diferencia es de cuarenta puntos), aunque respecto de la conciencia de pertenencia ocurre lo contrario, la identificación con las clases medias es superior en más de doce puntos a la de las clases trabajadoras.

Transversalidad popular frente a clases dominantes

Desde los años sesenta y setenta y, especialmente, en esta última década —con mayor activación cívica, los procesos de protesta social progresista y la conformación de las fuerzas del cambio— lo que se produce es **una renovación y diversificación de las expresiones populares transversales, de composición mixta de clase media y clase trabajadora, con un nuevo dinamismo sociopolítico de movimientos sociales e izquierdas renovadas, con identificaciones parciales y fragmentarias de carácter popular**. Así, se puede decir que los nuevos movimientos sociales y también los tradicionales como el sindicalismo (incluyendo el confederal, los corporativos y los sectoriales de la administración pública), así como los partidos de izquierda y las grandes ONG tienen una composición mixta de clase, especialmente distinta entre sus bases sociales y sus núcleos dirigentes, muchos de clase media, y reflejan demandas populares comunes o interclasistas aunque diferenciadas de los poderosos.

La expresión sociopolítica y cultural tiene componentes transversales respecto de sectores de ambas clases sociales, trabajadoras y medias, en una nueva dinámica que denomino progresismo de izquierdas, de fuerte contenido social, feminista y ecologista, superando la prevalencia de solo las demandas sociolaborales y económicas (o solo 'culturales'). Supone una concepción de clase (o bloque social) más diversa, compleja e interactiva de las distintas dimensiones sociales y culturales y, salvando el sesgo economicista y determinista de esa palabra en algunas tradiciones, se reafirma una visión de un conglomerado popular y democrático más interseccional e integrador.

Tal como he explicado en el libro [*Perspectivas del cambio progresista*](#), conlleva una concepción más multidimensional, diversificada e inclusiva de condiciones y conflictos sociopolíticos, con una interacción o intersección en los grupos populares de los aspectos socioeconómicos y laborales con los de

género, medioambientales o étnico-nacionales y otros. Se pasa de una identificación estricta de clase trabajadora (o media), vinculada al estatus socioeconómico, a una identificación sociopolítica y cultural de bloque 'popular', mestiza, diversa y transversal, pero diferenciada del bloque de poder.

Las elites dominantes no necesitan una percepción nítida de su identidad de clase, les son suficientes su operatividad y su posición dominadora. En la sociedad existen denominaciones más o menos claras y parciales pero reales y con fuerte impacto simbólico. Ayer les tocó a los 'poderosos' del sector financiero causantes de la crisis junto con los gestores institucionales de la Troika; hoy, con responsabilidades más difusas, aparecen las empresas energéticas y financieras que 'deben arrimar más el hombro' o los 'poderes opacos', aunque también exista cierta desconfianza popular en los gestores públicos por su insuficiente acción transformadora, en especial los partidos políticos y medios de comunicación, como mediadores institucionales. Mientras tanto, los grupos de poder europeos intentan gestionar una salida a la crisis no *austeritaria*, sin terminar de implementar una orientación consecuente de progreso. En su conjunto podemos denominarlos grupos de poder, poder establecido o, simplemente, clases altas o dominantes (o los de arriba o el 1%).

Ante la relativa orfandad representativa respecto de los poderes públicos y la persistencia de graves problemas sociales y amplio malestar cívico, en la sociedad existe una pugna entre una exigencia democratizadora y de justicia social y las tendencias reaccionarias, autoritarias y ultraconservadoras. Y, junto con ello, los procesos de legitimación de los actores político-sociales con sus respectivas bases sociales. Desde hace una década, la percepción social es más fluida y sus implicaciones político-electoral, con la reconfiguración de nuevos campos sociopolíticos y la recomposición de las representaciones partidarias e institucionales, son más cambiantes respecto del tradicional bipartidismo, tal como he explicado en otros textos.

La clase social como sujeto colectivo

El análisis de clase social objetiva y subjetiva es importante pero insuficiente para explicar el tema más relevante, que es su papel como sujeto colectivo y su influencia en el devenir sociopolítico. El análisis concreto de la experiencia popular en España lo he desarrollado en varios libros, los últimos los citados: [*Cambios en el Estado de bienestar*](#) y [*Perspectivas del cambio progresista*](#)” Aquí, para concluir, sintetizo el enfoque general.

Desde ese punto de vista, la clase social trabajadora o popular, como sujeto de carácter sociopolítico, como dice el historiador E. P.

Thompson, se forma a través de su experiencia relacional en el conflicto socioeconómico, la pugna sociopolítica y la diferenciación cultural respecto de las clases dominantes.

Frente a una idea determinista, influyente en muchos ámbitos, el sujeto colectivo es el resultado histórico y relacional de una interacción social prolongada de un determinado actor, agente, grupo social o movimiento; conlleva una experiencia común al percibir, vivir, solidarizarse y combatir injusticias concretas compartiendo demandas y aspiraciones dentro de una dinámica liberadora e igualitaria.

Esa activación cívica genera vínculos de pertenencia e identificación propia y ajena; o sea, el sujeto social, según su papel sociopolítico y relacional, va conformando y modificando su propia identificación, las características que le proporcionan un determinado perfil de autovaloración y reconocimiento público. La formación del sujeto colectivo, además del componente práctico-relacional y de agencia, presupone un vínculo social, un sentido de pertenencia colectiva a un grupo humano y unos objetivos y trayectorias compartidos. Todo ello configura una identidad (o suma de identidades y rasgos parciales) más o menos fuerte, diversa o múltiple, así como variable y no inmutable, con componentes más o menos expresivos según momentos y circunstancias.

El concepto clase social también expresa una relación social, una diferenciación con otras clases sociales. Su conformación es histórica y cultural y se realiza a través del conflicto social. Por tanto, es un concepto analítico, relacional e histórico. Existe una interacción y mediación entre posición socioeconómica y de poder, conciencia y conducta, aunque no mecánica o determinista en un sentido u otro. Pero, frente al esencialismo identitario, hay que analizar a los actores en su trayectoria, su interacción, su multidimensionalidad y su contexto.

5/8/2022

Marciano Sánchez Bayle y Madalina Crisbasianu **Lo que sabemos sobre las privatizaciones sanitarias**

Hace tiempo, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) venimos señalando los tremendos problemas y las consecuencias de la deriva privatizadora del sistema sanitario de nuestro país, y aunque inicialmente la mayoría de las evidencias sobre sus nefastos resultados provenían de otros países —el caso de Reino Unido es paradigmático— pasados los años tenemos muchas y numerosas pruebas aquí que nos permiten no solo ratificar las primeras impresiones, sino además

señalar nuevos efectos negativos de la llamada eufemísticamente “colaboración público-privada” (CPP) en la provisión sanitaria.

Desde la experiencia contrastada se pueden señalar las siguientes cuestiones:

Incremento de los costes. El coste de la atención sanitaria en los centros privados es muy superior a su alternativa pública. La experiencia en las concesiones administrativas y los centros semiprivados (PFI, iniciativa de financiación privada) en España recoge unos sobrecostes de entre 5 y 11 veces respecto a la alternativa de gestión pública directa, que en parte se explican por la necesidad de estos centros de gestión privada de obtener beneficios/rentabilidad para sus propietarios. Un problema a tener en cuenta es la falta de transparencia que tiene el sector privado, lo que muchas veces impide conocer y cuantificar exactamente estos sobrecostes, que, por otro lado, acaban conociéndose con el paso del tiempo por los informes periodísticos, los de los tribunales de cuentas y en ocasiones los de las propias consejerías de sanidad autonómicas (y así sabemos, por ejemplo, que en Madrid la Fundación Jiménez Díaz consiguió en diez años duplicar su financiación pública). El sector privado, por el contrario, asegura que sus costes son muy inferiores al sistema público, pero no tiene en cuenta la oferta real de servicios de los centros públicos y el hecho de que su necesidad de garantizar la atención sanitaria de toda la población (aquellas prestaciones y servicios que las empresas privadas no cubren por su ausencia de rentabilidad) no les permite especializarse en las actividades rentables, lo que sí puede hacer el sector privado.

Hipotecan la política sanitaria. El incremento de los costes acaba repercutiendo negativamente sobre los recursos disponibles para los centros de gestión directa. De esa manera, al aumentar las privatizaciones lo que queda del sistema público se empobrece continuamente. Un buen ejemplo fue la crisis de 2008 que repercutió en una disminución de los presupuestos de la Sanidad Pública en más de un 20%, pero que no supuso ninguna merma en las cantidades recibidas por los centros privatizados que, para empeorar más la situación, siguieron incrementando sus ingresos debido a las cláusulas de actualización automática que figuran en los contratos. Algo parecido sucede con las repercusiones que tienen los nuevos centros privatizados sobre el sistema público. Generalmente, la apertura de un centro privatizado supone la “jibarización” de los centros cercanos de gestión pública (disminución de camas y/o servicios) y la paralización de los proyectos de crecimiento de los mismos. Al final, como ya se ha señalado, al incrementar los costes de la asistencia, los centros privados detraen fondos de la alternativa pública.

Mala calidad de la construcción y los equipamientos. Lo que se sabe de los nuevos centros es que la construcción se realiza con materiales baratos, lo

que hace que tengan unas malas infraestructuras, tal y como se demostró en la inspección de trabajo realizada en los centros PFI construidos en la época de Esperanza Aguirre y en los numerosos incidentes en estos centros (roturas, inundaciones, desprendimientos de placas de las fachadas, etc.) que se producen en más de un caso poco tiempo después de la finalización de la construcción.

Existe una previsión razonable de desatención del mantenimiento una vez que se acerquen las fechas de finalización de los contratos si es previsible su reversión al sistema público.

Disminuye el número de camas. A pesar de que el número de hospitales privados sea considerablemente mayor que el de los públicos (431 frente a 341 en 2020), esto no se ve reflejado en el número de camas, pues se estima que solo el 32% (49.748) del cómputo total de camas en España pertenece a los hospitales privados. Esto, desde el sector privado, se intenta vender como una mejora de accesibilidad a la asistencia sanitaria, pero, de nuevo, nos encontramos ante el beneficio y el rédito económico, pues bien sabemos que los enfermos que necesitan ser hospitalizados durante largos períodos de tiempo o presentan patologías más complejas no son tan rentables como aquellos con pequeñas afecciones que sólo necesitan pruebas diagnósticas.

De promedio, los centros de gestión privada o semiprivada vienen a tener la mitad de las camas por 1.000 habitantes que las correspondientes a los centros de gestión tradicional (en Madrid, también refiriéndonos a los hospitales PFI, son 1,15 frente a 2,7; otro buen ejemplo es Valencia, con un número bajo de camas hospitalarias con financiación pública a expensas de una importante presencia de centros privatizados).

Tienen menos personal sanitario, y el no sanitario está precarizado y menos cualificado. El personal que se contrata en estos centros privados es muy inferior al personal contratado en la Sanidad Pública. Es más, en cuanto a la escasez de personal también podemos verlo en los centros de gestión PFI o PPP, llamados de colaboración público-privada. En estos hospitales la media de personal sanitario es casi dos veces inferior a aquellos hospitales íntegramente públicos. Asimismo, las plantillas de estos hospitales se suelen cubrir mediante el traslado del personal de hospitales públicos, lo cual repercute en estos haciendo que haya una disminución en la plantilla.

Por otro lado, si nos fijamos en el personal no sanitario que trabaja en los centros privados, vemos que se trata de personal subcontratado por otras empresas privadas. Estas realizan contratos temporales de baja duración, lo que repercute en las condiciones laborales, y por otro lado es infrecuente que se cubran las plantillas acordadas en los contratos.

Empeoran las condiciones laborales. Relacionado con el punto anterior, esta precariedad laboral que ocasiona la subcontratación del personal no sanitario repercute en un empeoramiento de las condiciones laborales generales de estos trabajadores, lo que también se expresa en menores retribuciones y más horas de trabajo.

Un tema poco estudiado, y sobre el que existen pocos datos en nuestro país, es la intromisión de las empresas privadas en las decisiones clínicas, lo que está muy bien documentado en países como Estados Unidos.

Externalizan aspectos clave. Otro aspecto importante de estos centros privatizados es la externalización de servicios. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid los hospitales PFI y PPP tienen externalizadas las pruebas de laboratorio a la empresa Unilabs, de Labco Quality Diagnostics, lo que produce sobrecostes de las pruebas. Esto se llevó a cabo cerrando dos laboratorios públicos existentes (uno de ellos que había renovado recientemente su equipamiento, y que hoy está obsoleto).

Igualmente, se tiende a privatizar aspectos no estrictamente asistenciales como el control y la planificación de los servicios sanitarios, a lo que debe añadirse la formación continua. En alguna comunidad autónoma (Madrid) se ha privatizado el centro de citaciones utilizándolo para la derivación sistemática de pruebas, consultas, etc. hacia los centros de gestión privada.

Aumentan los costes para la población. En todos estos centros hemos podido observar que los costes se multiplican entre 5 y 11 veces en comparación con un hospital público. Además, siempre acaba habiendo sobrecostes en los contratos que no habían sido planeados desde un principio. Esto ocasiona un aumento del capital designado para estos centros; capital que posteriormente no puede invertirse en otros centros u hospitales públicos.

Asimismo, las irregularidades que aumentan el coste para la población no acaban ahí: se producen recortes en la infraestructura, los materiales y los equipamientos, siempre existen retrasos para hacer la entrega o acabar la construcción (rara vez se cumple el contrato), existen sobrepagos en la información y publicidad, etc.

Todas estas artimañas para llenar los bolsillos de unos pocos siempre acaban desfavoreciendo a los mismos: la población general que necesita esos hospitales y que en cambio acaba recibiendo una peor atención con menor calidad por estos sobrecostes y malos materiales y equipamientos.

Acaban en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio básico. Aunque la mayoría de

las adjudicaciones suelen realizarse de manera inicial a UTEs con presencia de múltiples empresas, algunas de ámbito local; en poco tiempo se acaba produciendo una venta de la participación de estas a grandes multinacionales del sector. De esta manera se están creando grandes oligopolios de provisión privada gestionados por multinacionales del sector y/o de capital riesgo. Predominan dos: Capiro/Quirón/Recoletas, en manos de Fresenius, una multinacional alemana que gestiona fondos de pensiones, y Ribera Salud, con Centene (una multinacional estadounidense) como empresa mayoritaria en la que recientemente acaba de aterrizar Vivalto Sante, una multinacional francesa donde están presentes IK Partners y Hayting, dos multinacionales de capital riesgo.

La generación de oligopolios, que suele disimularse mediante multitud de empresas de nombres distintos, tiene claramente el riesgo de acabar condicionando la soberanía del país a la hora de la planificación y la prestación de un servicio básico como es la asistencia sanitaria.

Por otro lado, el sector privado está creando potentes grupos de presión como la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), que es una entidad que agrupa al sector sanitario privado cuyo órgano de gobierno (a día de hoy) está formado por representantes de ACES, Adeslas, AEGON, Analiza, ASISA, AXA, CASER Seguros, Catalana Occidente Seguros, Divina Seguros, DKV, Farmaindustria, Fenin, Fresenius, GenesisCare, Recoletas, Hospitales Católicos de Madrid, HM Hospitales, Hospiten, IMED, IMQ, MAPFRE, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, HPS, Quirón Salud, Ribera, Sanitas, Teladoc, Unilabs, Viamed, Vithas. Además de colaborar con empresas como Philips, Siemens o El Corte Inglés.

La actividad de esta fundación no se destina únicamente a los centros privados, sino que también se apoderan de los conciertos de hospitales PPP y PFI. Además, según reconoció Fresenius en 2016, los beneficios de los conciertos son mucho mayores que los que obtienen de la sanidad privada *per se*.

El sector sanitario privado se encuentra en su mayoría en manos de fondos de inversión, cuyo fin no es la atención a un derecho ciudadano, la protección de la salud, sino conseguir la máxima rentabilidad.

Favorecen las corruptelas. Es bien sabido que hay numerosos casos abiertos por la Fiscalía Anticorrupción que están directamente relacionados con gestiones en centros de CPP.

En todas las concesiones de nuevos hospitales que han seguido el modelo PFI o PPP (Toledo, Valencia, Madrid, Galicia...) se han ido repitiendo ciertos

factores que nos hacen pensar que no se trata de una excepción, sino de una norma. Entre estos factores encontramos las irregularidades en la adjudicación de estas concesiones, pues no se explican claramente los criterios para otorgarlas, y además siempre nos encontramos ante las mismas empresas: constructoras, entidades financieras, fondos de inversión internacional y, cómo no, actores políticos, en su mayoría pertenecientes al Partido Popular (véase Ayuso, Matas, Camps, etc.). Por otro lado, el fenómeno de las “puertas giratorias” es bastante evidente, con altos cargos de la administración que acaban en puestos directivos de las empresas que se vieron favorecidas con las privatizaciones.

Empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud. La CPP fue presentada en España como una alternativa a la gestión pública menos costosa, menos burocrática y más eficiente. Hemos visto a lo largo de estos años que se trataban de mentiras y artimañas para que las empresas que gestionan estos centros privatizados sacaran rédito económico.

Estos centros han resultado ser todo lo contrario a lo que vendieron: las ventajas burocráticas son inexistentes, los costes de las CPP son mucho mayores y siempre implican sobrecostes, además de que la transparencia y la calidad son totalmente inexistentes.

Hay bastante literatura internacional sobre el peor funcionamiento y resultado sanitario de los centros de gestión privada frente a los de gestión pública y/o no lucrativa (Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España), pero más recientemente *The Lancet*, en julio de 2022 ([“Outsourcing health-care services to the private sector and treatable mortality rates in England, 2013-20: An observational study of NHS privatisation”](#)), ha identificado un mayor grado de privatización con un aumento de la mortalidad evitable en Reino Unido, abundando como posibles causas en las señaladas anteriormente: selección de riesgos por parte del sector privado, menos personal, etc.

Control escaso o inexistente. Aunque teóricamente los contratos establecen mecanismos de control y un sistema de sanciones por incumplimiento, los hechos demuestran que el control es mínimo o inexistente porque existe de hecho una colusión de intereses entre las administraciones que favorecen la privatización con las empresas. Esto hace que, a pesar de incumplimientos fehacientes y reiteradamente denunciados por organizaciones sindicales, sociales y políticas, las sanciones suelen ser mínimas. Hay muchos casos, como el nuevo hospital de Majadahonda con el personal administrativo y de mantenimiento del antiguo hospital de Puerta de Hierro, a pesar de que este debería de ser provisto por la empresa concesionaria, o el hecho de que este mismo hospital redujera el número de

camas establecidas en el contrato, pero siguiera cobrando como si no hubiera existido esta reducción, etc.

Las llamadas “colaboraciones público-privadas” son un primer paso para la privatización total. Las privatizaciones no son algo nuevo en este país, pues podemos remontarnos al año 1997, con la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. A partir de esta ley se posibilita que los organismos privados también puedan gestionar los servicios sanitarios, lo cual abre las puertas a las concesiones sanitarias que hemos ido viendo a lo largo de estos años.

Empezamos a ver cada vez más desgastes y recortes en la Sanidad Pública, y cada vez más concesiones, facilidades y chanchullos para el beneficio de las empresas privadas con intereses en la sanidad. El proceso privatizador avanza de manera continua, con muchas diferencias entre CCAA, y se ha intensificado con la pandemia en alguna de ellas, especialmente en la de Madrid.

Los modelos de colaboración público-privada no son más que intentos por desgastar y empeorar la Sanidad Pública, y por beneficiar a las empresas privadas que tienen intereses en esta. Más propiamente, en realidad deberían llamarse *financiación pública para negocios privados*.

Se ha visto cómo claramente estos modelos no funcionan bien, son opacos y de dudosas intenciones. No hay más que ver el comienzo de la concesión del Hospital de Alzira, donde la atención a la ciudadanía empeoró, y las condiciones laborales y materiales también. Pero, siguiendo este mismo ejemplo, en 2018 la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública asumió la gestión directa de este hospital y los resultados han sido más que satisfactorios: se han adquirido nuevos aparatos tecnológicos de tratamiento y diagnóstico (supliendo la obsolescencia de estos), ha habido una mejora en la infraestructura, así como en los servicios y prestaciones, además de haber recibido una inversión de más de 18 millones de euros.

Así pues, habría que plantearse dos cuestiones: la primera es paralizar el flujo de privatizaciones porque cuantas más privatizaciones se produzcan más difícil será recuperar el servicio y la gestión públicos; la segunda es la reversión de las privatizaciones que la experiencia de Valencia ha demostrado posible. En esencia hay varias vías para conseguirlo, la más fácil en teoría es la reversión a la finalización del contrato (caso de Torrevieja y Alzira) lo que supone esperar plazos amplios de tiempo; también pueden explorarse otras vías, que por supuesto incluyen la recompra de los centros a las empresas concesionarias, pero es evidente que un control exhaustivo de las condiciones de los contratos facilitaría estas reversiones. Este proceso desprivatizador debe complementarse con un aumento de los recursos públicos, con el

aumento de las camas en los hospitales públicos (ya que la diferencia entre camas instaladas y operativas se hace cada año más notable, decreciendo estas últimas) y con la utilización intensiva de los equipamientos.

Creemos que hay pruebas más que sobradas para seguir defendiendo la gestión pública de nuestros centros sanitarios, pues son la clave para garantizar una Sanidad Pública de calidad, universal y económicamente sostenible. Por ello, no se entiende como desde el Gobierno no se actúa con contundencia para frenar este verdadero cáncer para la Sanidad Pública.

[Marciano Sánchez Bayle y Madalina Crisbasianu son miembros de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública]

30/8/2022

Soledad Bengoechea

Sesenta años de la riada de Sabadell de septiembre de 1962: ¿pudo evitarse la tragedia?

“Los rayos iluminaban una ciudad regentada por el caos; era la única luz que permitía ver aquello que la riada se llevaba: muebles, personas y máquinas”.

Josefa Púas, una mujer de un suburbio de Sabadell a la que la desgracia convirtió en testimonio

Este año se cumple el sesenta aniversario. A las siete y veinte de la tarde del 25 de septiembre de 1962 exactamente, Sabadell fue sorprendida por una gran riada. Empezó minutos más tarde de que una cortina de agua, de unos veinticinco litros por metro cuadrado, se abatiera de forma inesperada sobre esta zona del Vallés. El aguacero provocó que las aguas de las rieras del término municipal y del río Ripoll crecieran y los puentes se embozaran: el de Casteller se rompió y el agua anegó centenares de viviendas, barracas, cuevas e industrias ubicadas en el lecho del río. El resultado de aquel fenómeno natural fue catastrófico: **39 muertos, según el recuento** oficial. Se tuvo que realojar a 3.307 personas y las viviendas afectadas que quedaron inhabitables superaron las 400. También hubo daños en el 80% de las industrias de acabados y tintes situadas cerca del río Ripoll. Los barrios más

afectados fueron Torre-romeu, Can Puiggener, la Plana del Pintor y Campoamor.

¿Cómo pudo suceder aquella desgracia? Según el historiador Eduard Masjuan, el efecto devastador de la riada se explica no tanto por el fenómeno meteorológico en sí, sino por el modelo de desarrollo económico y urbanístico del franquismo con una falta de inversión en viviendas para los inmigrantes y una nula planificación urbanística donde proliferaron las operaciones especulativas sin control. Una situación que obligaba a los vecinos a residir en rieras y terrenos no urbanizables en los márgenes del río o en cuevas como las de Sant Oleguer. Según este autor, las víctimas fueron en un 90 % población joven e inmigrada. La media de edad de las víctimas era de veinticinco años. Entre ellos se encontraban trabajadores que hacían el turno de noche en las fábricas de la orilla del Ripoll, seguida de niños y ancianos, los habitantes más vulnerables.

Mientras, explica el historiador sabadellense **Martí Marín**, el régimen jugaba un papel de desidia. La falta de control sobre el urbanismo era total. Por una parte, había una falta de control sobre el urbanismo y se dejaba edificar no solo barracas, que eran ilegales, sino también viviendas que eran perfectamente legales en zonas que eran inundables. Sobre los intentos de erradicar esta situación, Marín apunta que había planes desde los inicios del régimen franquista, pero se hacían utilizando unos medios tan modestos que fue imposible llevarlos a cabo.

Los analistas Ferran y Lluís Sales explican cómo de manera inmediata el desastre provocó una gran oleada de solidaridad con donativos populares, en metálico y especies, de entidades cívicas y de empresas de Cataluña, España y diversos países extranjeros. Sobre todas ellas destacó la campaña de Radio Barcelona, liderada por Joaquín Soler Serrano y Manuel Tarín Iglesias, que recaudaron una gran cantidad de donativos.

Las presentes páginas giran alrededor de este tema: la riada de Sabadell y sus consecuencias. Abarcan unas cuantas décadas de la historia de algunos barrios de la ciudad. Se han escrito después de consultar tanto fuentes escritas como orales. En el año 2008 se entrevistó a varios vecinos y vecinas de estos barrios, la mayoría de ellos ligados a las asociaciones de vecinos.

Migraciones de posguerra y suburbios

Unos datos: la población de Sabadell, según el censo de habitantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), pasó de unos 48.000 habitantes el 1940 hasta más de 100.000 el año 1960. En el barrio la Plana del Pintor, el 99% de los que se asentaron fueron inmigrantes.

Desde la década de los cuarenta hasta 1975, ciudades industriales catalanas, como Sabadell, experimentaron un crecimiento de expansión debido a la llegada de oleadas migratorias de población preferentemente de edades jóvenes y de origen agrario que se establecían en los suburbios de las periferias de esas urbes. Procedían de diferentes áreas de España (Murcia, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería...) y buscaban trabajo en el sector industrial que estaba en pleno desarrollo. Ellas, las mujeres, se incorporaban preferentemente al del textil, un sector puntero en la ciudad, trabajando tanto en las fábricas como en casa, y en el servicio doméstico: los hombres también trabajaban en la construcción y en menor medida en el metal. Algunas de estas mujeres y de estos hombres, además de huir de la más absoluta miseria, escapaban también de la represión política que padecían en sus zonas de origen a causa de haberse significado en movimientos de izquierda durante la Segunda República.

Es difícil cuantificar con rotundidad el número de habitantes que llegaron a Cataluña, y a estos barrios, en los años cuarenta y en los primeros cincuenta. Cierta historiografía apunta que estas migraciones fueron producto de la política del franquismo de descatalanizar la sociedad catalana. Pero lo cierto es que, como muchos testigos aseguran, las autoridades franquistas dificultaban los desplazamientos interiores: la Guardia Civil detenía a muchos de los emigrantes en la estación de Francia de Barcelona, los enviaban a Montjuïc y después los devolvían en trenes o autobuses a sus lugares de origen. A menudo, los recién llegados bajaban del tren antes de llegar a la estación y entraban a las ciudades a las que querían llegar clandestinamente.

Cuando llegaban, los que tenían menos recursos se asentaban en cuevas, excavadas con métodos manuales en los márgenes de los ríos que bajaban muy sucios. Allí vivían en condiciones infrahumanas. Cuando llovía intensamente, la tierra cedía, caía y podía atrapar a sus habitantes. Actualmente, algunas de estas cuevas han sido reformadas y sirven de bodegas.

Unos datos: en el primer censo de población de la periferia urbana de Sabadell que hizo la Delegación de Suburbios de 1955, se estimaba que 1.178 personas habitaban en barracas y cuevas (como las que había en Sant Oleguer). Se situaban especialmente en la ribera del río, una de las causas del desastre de 1962.

En realidad, lo que comenzó a dar forma a los suburbios fue el barraquismo. Mientras se construía la barraca, normalmente en terrenos de riadas, en los barrancos y en la riera porque el terreno no servía para cultivar, se hacía un resguardo provisional (normalmente en una sola noche). Las primeras barracas estaban hechas por cuatro paredes de barro cubiertas con bidones

de alquitrán. El techo se hacía a base de cañas. La parcelación de viejos campos de cultivo propició el crecimiento de un gran número de barracas y de las plantas de autoconstrucción de una sola planta. Con la liquidación de los bienes de sus lugares de origen y con los pequeños ahorros producto de su trabajo en Sabadell, los recién llegados pagaban el solar y el material a plazos.

Los terrenos se vendían por fanegas a 15 o 40 céntimos el palmo. El precio oscilaba entre 6.000 y 7.000 pesetas, con entradas de 300 a 600 pesetas. La construcción de estas viviendas solía requerir, mayoritariamente, la cooperación de los vecinos, aunque las vecinas también colaboraban en las tareas, sobre todo vigilando la chiquillería que correteaba por los alrededores. En general, se trabajaban las horas libres de los días festivos. Pero muchas de estas obras eran ilegales y a veces la guardia urbana, que venía a caballo, las denunciaba y el Ayuntamiento procedía a derribarlas. De hecho, para edificar se necesitaba un permiso y en algunos barrios (Can Puiggener, Ca n'Oriac) a veces solo se conseguía mediante el aval del rector de la iglesia.

En el barrio llamado Can Puiggener la construcción de viviendas comenzó a finales de los años cuarenta (las casas de la "tía Sebastiana", la del "bar del Maño", la del "tío Podrido", el "bar Espín", etc.), pero la falta de infraestructuras continuaba. El año 1953 el barrio contaba con 458 viviendas consideradas ilegales. Entonces también comenzó la edificación de las llamadas *estades*, que eran pequeñas construcciones en las cuales podían residir diversas familias que ocupaban una o dos habitaciones. Todas utilizaban el mismo servicio sanitario.

Entre los recién llegados el sentido de familia estaba muy arraigado, porque los emigrantes se encontraban solos en un mundo desconocido y a veces hostil. Entre ellos se establecía una ayuda, a veces desinteresada, y, a menudo, cuando una familia llegaba y resolvía momentáneamente su situación animaba a sus familiares a seguir el ejemplo. Cuando lo hacían, muchas veces se instalaban todos en la misma vivienda, sin pagar nada. No era extraño que, durante un tiempo, dos o tres familias compartiesen un mismo hogar.

Las condiciones laborales de estos inmigrantes fueron, en general, muy duras. Los salarios eran muy bajos, sobre todo los de las mujeres, ya que eran considerados como meros complementos de los de los hombres, y no era infrecuente que, en las fábricas, se trabajase doble jornada; de hecho, la media era de quince horas al día, de lunes a sábado. Aunque desde principios de siglo la ley lo prohibía, en la primera posguerra alrededor de un 80% de niños y niñas de los suburbios se incorporaban a las fábricas antes de los 14 años, sobre todo para trabajar en ciertos sectores del textil. Para no encontrar

impedimentos, algunos de estos casi infantes falsificaban su fecha de nacimiento. Por otra parte, las mujeres asalariadas que tenían hijos hacían jornadas agotadoras, ya que tenían que hacer la doble carga (trabajar dentro y fuera de casa). La inexistencia de guarderías hacía que, a menudo, los hermanos y, mayoritariamente, las hermanas mayores faltasen a la escuela para cuidar de los pequeños. En un estudio sobre la historia de la Caixa de Sabadell, el historiador Josep Maria Benaul (ya fallecido) apuntaba otra cuestión: en algunas barriadas de Sabadell (como Ca n'Oriac) en un año ya avanzado, 1961, en ciertas casas particulares se cuidaba niños al precio de 100 pesetas a la semana sin incluir la alimentación (en este barrio, en esa fecha, había más de 1.700 infantes de menos de cinco años de madres trabajadoras). La cifra es importante y señala también el alto número de mujeres de aquel barrio que trabajaban como asalariadas.

Del suburbio al barrio: el barro como símbolo de una época

Durante los años cincuenta el surgimiento de estos barrios de autoconstrucción exigía una implicación de los consistorios en su gestión. Una implicación inexistente. Por ello, y con el fin de tener una presencia más activa, el Ayuntamiento nombró los nuevos alcaldes de barrio, con el objetivo de tener una presencia más activa. Pero los problemas continuaron sin resolución.

A partir de los años cincuenta se iniciaron una serie de Planes de Vivienda. El primero, el *Plano General de Ordenación Manuel Baldrich* (1950) no solucionó ninguno de los problemas de estos suburbios.

Este mismo año se creó la Delegación de Viviendas y Suburbios, que distribuyó la periferia urbana en siete barrios: Ca n'Oriac, Can Puiggener, Torre-romeu, La Salut, Campoamor y Sant Oleguer. En 1962, el *Plan General de Ordenación de Sabadell* legalizó grandes crecimientos residenciales y aceptó una situación especulativa de altas densidades urbanas y el desaguado urbanístico general. Fue legalizado todo el conjunto de barrios suburbanos totalmente desvinculados de la ciudad, toda la ocupación suburbial del río Ripoll, incluso el sector la Clota a Can Puiggener y se consolidó la industria al río. El suelo urbano se amplió hasta la misma finca de Can Deu.

Paralelamente, algunos sectores de las fuerzas vivas de Sabadell comenzaron a tomar conciencia de que la beneficencia y el paternalismo tradicionales eran respuestas insuficientes e inadecuadas ante la situación de déficits en los barrios de la ciudad. A finales de los cincuenta, del Gremio de Fabricantes aparecieron iniciativas como la Escuela de Formación Social —de asistentes sociales— la Constructora de Vivienda Popular S.A. (COVIPSA), y el Patronato

de Acción Social Ciudadana de la Industria de Sabadell. En 1958 se había constituido la Asociación católica de Dirigentes, que alumbró la constructora Viviendas de Sabadell S.A. (VISASA), que tuvo un papel destacado en el desarrollo de los barrios, y Cáritas de Sabadell (1960). Según un estudio realizado por una asistente social, en 1962 alrededor del 20% de las familias de estos barrios necesitaban asistencia inmediata.

Los barrios continuaban creciendo sin ordenación técnica ni previsión municipal de ningún tipo y la falta de infraestructuras continuaba. Las viviendas seguían sin tener agua corriente y se tenía que ir a buscar a las fuentes, que a menudo quedaban lejos. El agua se cogía también de las casas que disponían de pozos, después de hacer una larga cola, y a veces se tenía que pagar. Como no había servido de alcantarillado, a menudo los pozos se contaminaban. En algunos barrios, los vecinos —y sobre todo las vecinas— también bajaban al río con cubos.

Carbueros, velas y luces de aceite también fueron los primeros medios de iluminación empleados hasta la instalación de la luz a finales de los cincuenta. Concretamente, en el barrio La Plana del Pintor la electricidad no llegó hasta 1965. Y, en algunos barrios, la red de alcantarillas a veces fue construida por los vecinos. Calles oscuras, sin pavimentar (en La Plana del Pintor hasta entrados los años setenta no se alquitranaron las calles), casi intransitables a causa del barro y las basuras, fueron, durante muchos años, el símbolo de los suburbios —después barrios—. Tampoco había médicos ni farmacias. Cuando llegaron los años sesenta, la comunicación de los barrios con el centro de la ciudad era complicada: la mayoría de los trabajadores iban al trabajo caminando, algunos en bicicleta y, los que tenían más suerte, en una moto ya vieja. Para hacer el primer turno a las fábricas del textil, hombres y mujeres se tenían que levantar antes de las cuatro de la madrugada.

Los primeros autobuses que llegaron a estos barrios eran vehículos viejos, que solo hacían tres viajes al día, coincidiendo con las horas punta.

En estos suburbios, hacia 1943 hubo un primer intento de constituir una asociación de barrio, pero hasta 1964 no se creó la Agrupación de vecinos de Ca n'Oriac, con 125 asociados.

Aparte de las barracas que se habían alzado en el barrio de Ca n'Oriac, los hijos de los inmigrantes que se querían casar necesitaban un nuevo hogar. Bajo el amparo de la primera asociación de vecinos, en 1964 se creó la *Cooperativa de Viviendas Can Oriach*. El primer grupo de pisos se construyó en la ronda de Collsalarca, cerca de la Clínica Infantil, con cinco bloques de catorce pisos cada uno. Después ya fueron las constructoras privadas las que ocuparon los terrenos con bloques altos.

A medida que los problemas de la vivienda se resolvían (aunque a veces a base de barracas y cuevas) y se solucionaba la cuestión de la subsistencia, los vecinos estuvieron en disposición de afrontar los problemas colectivos: la falta de servicios más elementales. Entonces comenzaron a desarrollarse las primeras formas organizativas, que constituyeron los orígenes de los incipientes movimientos de barrios.

Los poderes públicos estaban ausentes de cualquier intervención, y las primeras ayudas que llegaron a estos suburbios fueron impartidas por sectores ligados a la iglesia de base; catequistas, asistentes sociales y curas obreristas.

Vecinos de los barrios recordaban que, a veces, a los descampados acudían curas y alumnas del centro de los escolapios de Sabadell a hacer catequesis. Al ver la miseria que había en aquellos barrios, algunos tomaban conciencia. Entonces, chicos y chicas volvían una y otra vez con el ánimo de evangelizar, pero otros y otras asumían que lo que los suburbios necesitaban era justicia social.

Algunos de estos catequistas, que en ocasiones ingresaron en las Juventudes Obreras Católicas (las JOC), aglutinaban los jóvenes de los barrios. Formaban grupos donde se hablaba temas de actualidad política, social... En general, los miembros de las JOC después se implicaron en los movimientos obreros y vecinales, participaron en las manifestaciones de barrios, en las huelgas... Algunos también militaron en partidos de izquierda y nacionalistas.

En 1961 se inició una acción colectiva sabadellense, promovida por el Municipio, a fin de captar fondos para dotar los ya populosos barrios de Can Puiggener y Ca n'Oriac de centros parroquiales con templo, casa rectoral, centro social, instalaciones deportivas y dispensario. Las obras de la parroquia de Can Puiggener se desarrollaron más lentas que las de Ca n'Oriac.

Pasaba el tiempo y los habitantes de los barrios continuaban viviendo en la más estricta precariedad. Los gobiernos municipales continuaban sin preocuparse de sus problemas: "En las cuevas vivíamos pendientes de lo que pudiera ocurrir, sobre todo los días de lluvia. No teníamos luz ni agua" (Revista *Can Oriach*, n.º 34, marzo de 1968). Por su parte, Martí Marín señala que hasta muy avanzada la década de los sesenta el número de barracas fue "brutal". Y todo indica que en Can Puiggener en los años setenta aún quedaban un gran número de ellas. Muchas pervivieron hasta los años ochenta. Consecuencia de esta desidia fue la catástrofe de 1962. La naturaleza hizo el resto.

Epílogo

Como se ha tratado de explicar en estas páginas, los barrios de Sabadell nacidos de la inmigración de los años cuarenta, cincuenta y sesenta padecieron originariamente una situación de gran precariedad y falta de servicios e infraestructuras. Uno de los déficits más importantes de la ciudad en aquellos años fue la falta de viviendas. Ello produjo el fenómeno de la ocupación de cuevas y barracas y favoreció la ocupación de cauces de arroyos y ríos, a menudo bajo la forma de viviendas muy precarias. Todo esto fue el caldo de cultivo que convirtió las riadas de 1962 en una tragedia.

Consumado el infortunio, las fuerzas vivas de la ciudad tampoco supieron gestionar la catástrofe, teniendo que ser los movimientos de voluntariado los que pusieron todos los medios a su alcance para paliar en la medida de lo posible las consecuencias del desastre.

Bibliografía:

BENGOECHEA, Soledad/DESOLA, Ricard, *Sabadell Nord: Ca n'Oriach, Can Deu, Can Puiggnere*, Museu d'Història de Sabadell, 2008.

MARÍN CORBERA, Martín, *Franquismo, suburbanització i Dictadura a Catalunya, Sabadell 1939-1962, un cas paradigmàtic*, Destoria edicions, 2019.

MASJUAN, Eduard. *Abocats a viure a la llera del riu: el problema de l'infrahabitatge a Sabadell, 1939-1970*. Documents d'Anàlisi Geogràfica 2015, vol. 61/1 1.

OLIVA, Xavier/ORDÓÑEZ, Marta, "Les riades del Vallès del 1962 i l'infrahabitatge", *Diari de Sabadell*, 28 de septiembre de 2019.

POCH, David, Las riadas de 1962 y Campoamor | Especulación, intervención y autoorganización, 28 de abril de 2021.
<https://www.corrienteroja.net/las-riadas-de-1962-y-campoamor-especulacion-intervencion-y-autoorganizacion/>

SALES I AIGÉ, Ferran; SALES I FAVÀ, Lluís. La riada de Franco. Pugnes polítiques, propaganda i corrupció en el context de les inundacions del Vallès (1962), Lleida, Pagès editors, 2012.

SANTAMARIA, Antonio, "Les riades i les seves conseqüències (1962)", 29 de septiembre de 2019 *Sabadell 10 anys*, <https://www.isabadell.cat/sabadell/historia/les-riades-i-les-seves-consequencies-1962/>.

30/8/2022

Houria Sabri Benaziza

El papel de las mujeres en la independencia de Argelia

La segunda mitad del siglo XX fue el escenario de un amplio movimiento de descolonización, en el cual la lucha del pueblo argelino contra el yugo colonial marcó un hito. La lucha fue larga y mortal, fruto de la naturaleza misma de la ocupación —una colonización de la población— y de la represión feroz por parte de las fuerzas coloniales desplegadas para aniquilar el movimiento por la independencia.

La participación de las mujeres en la lucha armada de liberación fue importante y decisiva en su desenlace. Las mujeres se unieron, fusil al hombro, a las unidades de combate, participaron en la guerrilla urbana, cuidaron en la resistencia y, algo que se destaca poco, escondieron y alimentaron a los resistentes, a menudo pagándolo con sus vidas.

Fueron encarceladas, torturadas, condenadas a muerte, violadas en prisión y en las campañas militares, en las que la violación sistemática constituyó una estrategia de guerra. En su libro reciente *Femmes ayant marqué l'histoire de l'Algérie* ["Mujeres que marcaron la historia de Argelia"], el profesor Khiati aporta las cifras de un millar de mártires, 11.000 mujahidinas, 19 que ponían bombas, de las cuales tres fueron condenadas a muerte, y proporciona una lista de ochenta mujeres francesas que participaron en la guerra de la liberación en el seno de la Red Jeanson.

La historiografía oficial ha recordado principal y casi únicamente algunos nombres, entre ellos heroínas y sus hazañas militares; sin embargo, ha forjado una imagen reductora de la resistencia femenina, limitada a la figura de la enfermera. Esta imagen incrustada en los manuales escolares de una disciplina que contribuye en buena medida a la construcción de la identidad política de las generaciones futuras no solamente es una falta de respeto a la historia, sino que también participa deliberadamente en la producción de identidades políticas de género.

Es importante recordar que las mujeres fueron alejadas de los círculos de toma de decisiones durante la lucha armada, que ninguna mujer estuvo presente en los órganos dirigentes, y que tampoco formaron parte ni de los gobiernos provisionales de la revolución ni de las negociaciones para finalizar la guerra, las negociaciones que culminaron en los Acuerdos de Evian de 18 de marzo de 1962 que pusieron término oficialmente a 132 años de colonización francesa.

Indiscutiblemente, la larga noche colonial que mantuvo al pueblo en la miseria y el analfabetismo, que lo privó del ejercicio de la ciudadanía y que le prohibió la práctica política, condujo al fortalecimiento de las estructuras arcaicas y las mentalidades retrógradas que produjeron, y que son reproducidas por las familias, haciendo de las mujeres las principales víctimas de un sistema

patriarcal al que debe añadirse la condición de colonizado.

Su compromiso y múltiples roles dentro de la lucha armada deberían haber sido el momento propicio para darles visibilidad y favorecer su maduración política para que pudieran inscribir sus reivindicaciones de género en la concepción del proyecto de sociedad a construir con la independencia. Por el contrario, las modalidades de su integración en el movimiento por la independencia, su exclusión de las esferas de toma de decisiones, no les permitieron influir en la concepción de los objetivos del movimiento, esto es, la necesaria redefinición de su estatuto social como dimensión de la lucha global contra el orden colonial.

Los textos fundadores de la revolución no hacen mención alguna a la igualdad entre hombres y mujeres como parte del proyecto independentista. La declaración del 1 de noviembre de 1954 fija como principal objetivo de la independencia nacional la restauración del Estado argelino soberano, democrático y social, en el marco de los principios islámicos. Haría falta mucha imaginación para pensar que las mujeres podían prevalerse de esta última precisión para hacer valer sus reivindicaciones de igualdad y de una vida ciudadana plena.

Las mujeres sufrieron de nuevo la exclusión tras la independencia. Entre los indicadores de dicha exclusión se encuentra su escasa representación en el primer parlamento de 1962: fueron solamente diez, esto es, el 5,2% del total de diputados, y dicha representación incluso disminuyó en 1964, cuando fueron elegidas únicamente dos, el 1,4% del total.

La enmienda de la Constitución en 2008, bajo el reinado de Buteflika, dispone en su artículo 31bis que “el Estado promoverá los derechos políticos de la mujer, aumentando sus oportunidades de acceso a la representación en las asambleas electas”. Esta nueva disposición se hizo sin concertación con las asociaciones de mujeres e ignorando sus propuestas para un cambio real de su estatuto en las esferas política, social y económica. La aplicación del artículo 31bis llevaría a 147 mujeres al cargo de diputadas en 2012, pero esta presencia más numerosa no fue más que una representación de escaparate, totalmente nula en cuanto a su capacidad para vehicular las reivindicaciones de las mujeres y la defensa de sus intereses.

De hecho, esta presencia que procede de un cambio efectuado fuera, y en exclusión, de las organizaciones asociativas de mujeres está aquejada de una doble tara. Puesto que obedece a intenciones clientelares para enmascarar un grave déficit democrático, no se concibe ni se practica como una palanca de promoción de la ciudadanía de las mujeres ni, yendo más allá, del conjunto de los ciudadanos a través de una participación efectiva en la gestión de la vida

pública. Además, esta presencia se lleva a cabo en un recinto sin prerrogativas ni poder alguno más allá de ratificar políticas autoritarias y elecciones contrarias a la aspiración del pueblo al establecimiento de un Estado de derecho, de igualdad y de libertades.

En un artículo titulado [“Les femmes dans le système politique algérien : entre inclusion sélective et exclusion ciblée”](#), publicado en *Insaniyat* en 2016, Louisa Dris-Aït Hamidouche pone al descubierto las verdaderas intenciones del poder en este simulacro de promoción de los derechos políticos de las mujeres. Así, cita: “l’autorité politique puise dans les revendications féminines pour trouver des partenaires afin de combler une partie de son déficit de légitimité et consolider sa capacité de résilience” [“la autoridad política adopta las reivindicaciones femeninas para encontrar socios en aras de subsanar una parte de su déficit de legitimidad y consolidar su capacidad de resiliencia”]. El método elegido para la elaboración de un texto que pretende restablecer la paz en un país roto por una guerra civil de casi una década, la Carta para la paz y la reconciliación nacional de 2005, es la manifestación perfecta y concreta de la voluntad del poder establecido de excluir a las mujeres, quienes son las más afectadas por el alto precio de la década sangrienta. Han sido asesinadas, más de un centenar, raptadas y violadas en la resistencia islamista terrorista, y se cuentan por decenas de miles quienes han visto sus vidas radicalmente alteradas como consecuencia del asesinato de sus parientes, hijos y otros miembros de sus familias a manos de terroristas o de la desaparición forzosa y la ejecución sumaria de los suyos por parte de agentes del Estado, mujeres esencialmente provenientes de capas populares y, por tanto, particularmente fragilizadas por su pertenencia de clase.

Fueron, de hecho, excluidas de la reflexión y la concepción del texto de la Carta, cuando son ellas quienes han librado, y siguen librando, con valentía y pese a la represión y la prohibición de sus manifestaciones y acciones, desde hace décadas, la batalla por la Verdad y la Justicia, las únicas susceptibles de sentar las bases de una paz justa y duradera. Esta Carta no tenía otro objetivo real que el de acordar la impunidad a los responsables culpables de dramas en ambos bandos y de asegurar su reconciliación a expensas de los intereses de las víctimas, contrariamente a un proceso de construcción de un Estado garante y respetuoso con los derechos de los ciudadanos.

La inestabilidad crónica en la que se encuentra sumido el país, la represión como modo de gobernanza de un poder ilegítimo, la desesperanza de las fuerzas vivas cuya juventud prefiere morir en el mar antes que vivir en un país cárcel constituyen la prueba de que un proceso por la paz y la vida en seguridad debe necesariamente incluir a todas las víctimas y sus reivindicaciones, y consagrarse a revelar los intereses en juego de los responsables del desencadenamiento del conflicto, la naturaleza del sistema

que lo hizo posible, y dar así una oportunidad a una paz basada en la verdad y la justicia.

El fenómeno de las mujeres sin cara, “mujeres fantasmas” en las listas electorales de las últimas elecciones legislativas de junio de 2021 revela hasta qué punto estamos lejos de una visibilidad política y efectiva de las mujeres, que las exclusiones acumuladas que sufren constituyen no sólo un freno a la promoción de su estatuto, sino que alimentan también todos los dogmatismos y conservadurismos portadores de regresión y contrarios a la emancipación del conjunto de la sociedad.

Estas últimas décadas han sido testigo de la feminización de importantes sectores de actividad, en particular la educación y la sanidad, gracias a la democratización de la enseñanza que las jóvenes han podido disfrutar en beneficio propio, sectores que han visto la emergencia de sindicatos con un peso considerable. Las mujeres que constituyen su base están, no obstante, débilmente representadas en las instancias dirigentes, lo que explicaría la ausencia, más allá de sus reivindicaciones de carácter profesional, de aquellas relativas a la igualdad entre hombres y mujeres y a otras dimensiones de la vida social en sus programas.

Las decisiones económicas desastrosas por parte del sistema de extracción de rentas que ha erigido lo informal en sistema económico generan otras amenazas de exclusión para las mujeres. Víctimas de un paro exacerbado, conscientes que su participación en el mercado de trabajo representa menos del 20%, muchas mujeres, en particular aquellas provenientes de capas populares, se dedican a trabajos informales en casa. La naturaleza de estas actividades y sus condiciones de realización están lejos de darles valor en tanto que actrices económicas reconocidas. Además, las alejan de terrenos propicios a acciones ciudadanas comunes para luchar contra la precariedad de su situación.

Las organizaciones feministas han luchado sin pausa contra las múltiples formas de discriminación hacia las mujeres, contra la ideología obscurantista transmitida por las instituciones del Estado y que ha presidido la elaboración del código de familia, cuyas enmiendas de 2005 están claramente por debajo de sus reivindicaciones por una igualdad entre hombres y mujeres mediante la abrogación de dicho código y su sustitución por una ley civil igualitaria.

Ellas han jugado asimismo un rol determinante en el frente social y democrático contra la amenaza integrista y han sido blanco de agresiones y violencias perpetradas por elementos del partido islamista FIS, reconocido oficialmente y autorizado para levantar un muro contra la esperanza democrática suscitada por el levantamiento de 1988 reprimido a sangre y

fuego.

El movimiento popular Hirak de febrero de 2019, cuyo aliento está todavía presente a pesar de la represión por parte del poder y el encarcelamiento arbitrario de centenares de sus actores, apoyos y defensores, ha presenciado una participación significativa de las mujeres. A pesar de esta presencia activa, sus organizaciones han tropezado con la dificultad de incluir la exigencia de igualdad ciudadana efectiva para las mujeres como dimensión constitutiva de la reivindicación del cambio de sistema denunciado, y de hacer que se admita como una de las condiciones para el advenimiento de un Estado de derecho y una sociedad basada en la justicia social y la igualdad.

Las reticencias del movimiento de esencia popular a percibir dicha dimensión en su justa medida revela la inanidad de los ajustes jurídicos presuntamente realizados para favorecer la promoción social y política de las mujeres, y su nulo impacto sobre las mentalidades retrógradas que obstaculizan la emancipación de las mujeres y favorecen su permanencia dentro de un estatuto que desentona con los esfuerzos inmensos que ellas despliegan para alzarse por encima de la condición que se les otorga.

En la medida en que el Hirak “es una idea y que las ideas no mueren”, es de esperar que un futuro despertar del movimiento revolucionario confiará en las mujeres militantes, activistas ciudadanas y sus organizaciones en todos los ámbitos, sabrá aprovechar sus probadas competencias y sus experiencias de lucha para pensar y forjar las herramientas que hagan tambalear los fundamentos de un sistema de extracción de rentas y depredador, generador de regresión y de violencia.

[Traducción de Francisco Javier Mena. Houria Benaziza (1954) fue militante del Partido Comunista argelino y sindicalista durante su carrera en la educación nacional. Forma parte del movimiento de madres de desaparecidos. Participa en el Hirak como feminista]

23/8/2022

EI extremista discreto

Maqui

Siete puntos de calor y una noticia inesperada

- EEUU va a tocarle las narices a China en Taiwán. Los medios alertan de «las peligrosas maniobras militares de China». Habría que ver la reacción (de EEUU y de los *mass media*) si China se hubiera comportado militarmente aunque fuera una sola vez como EEUU en un territorio en disputa por éste.
- EEUU mata al supuesto líder de Al Qaeda en Afganistán (un asesinato extrajudicial, sin ningún tipo de garantía, en territorio extranjero y además ocupado hasta hace poco). Los medios *reproducen* las palabras de más de un gringo asegurando que el mundo es más seguro. ¿Seguro para quién? No creo que para los afganos y las afganas. Incluso el endiosado Obama, Premio Nobel de la Paz (dejando de lado la vergüenza de que este premio lo ostente el susodicho) se congratuló: «No hay que entrar en guerras para ganar al terrorismo». Le dijo la sartén al cazo. En ese asesinato, uno de los “contendientes” se parecía mucho más a un terrorista que el otro. Pista: no es el afgano.
- La banca se queja de que tienen que pagar un *impuestillo* sobre sus mastodónticos beneficios, que son del tamaño de un estado pequeño. Gente a la que la inflación está dejando sin ahorros (nada que decir de **beneficios**), que comen en comedores sociales, o que viven en situación de calle. Gente con sueldos de 12.000 a 20.000 euros al año, pagando hasta el 20% en impuestos. Y la banca se queja por tener que contribuir *una pequeña parte de sus milmillonarios BENEFICIOS*. Toda respuesta política que se ha dado hasta ahora a esta desfachatez puede y debe ser criticada por tibia.
- [Amnistía Internacional advierte de que Ucrania](#) está poniendo en riesgo la vida de la población civil con sus estrategias militares. No se confundan, no hay nada que justificar de la agresión rusa. Pero a ver si por condenar el militarismo ruso nos vamos a tener que comer con papas (o trigo, o maíz) los despropósitos del ejército ucraniano. Los ejércitos hacen lo que saben hacer, no hay más.
- Las chicas y mujeres de este país (y, por desgracia, de otros) tienen que aguantar insultos, agresiones, vejaciones, acoso, violaciones, asesinatos, y una importante desprotección social, policial, judicial e

institucional. Ahora, para más inri, que las pinchen cuando salen a divertirse, sin saber si les están inculcando alguna droga o no. Además de todo eso, cobran menos, trabajan más, se hacen cargo de más tareas del hogar, de los trabajos de cuidados que nadie quiere llevar a cabo, y un largo etcétera. ¿Sexo débil? Débiles los hombres, que necesitan que la otra mitad de la población haga todo eso para poder sentirse funcionales.

- En todo este *embolao*, dejamos de prestar atención a algo que nos compete a todos/as. De forma resumida: o empezamos a preocuparnos de nuestro entorno natural o se nos acabó el chollo de ser una especie no extinta.
- Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), ante un decreto-ley del gobierno, dice que no va a cumplir. Otro cargo del PP aparece confirmando que bueno, eso de acatar las normas es de voluntario cumplimiento para las CCAA. Ay, cuánto daño ha hecho el independentismo catalán. Esto vuelve a ser el café para todos. Aquí cualquier tonto con un cargo se declara en rebeldía ante la ley.
- La nota positiva: Marlene Engelhorn, estudiante de 29 años en Viena, rechaza una herencia de 4.200 millones de euros (es descendiente de los fundadores de BASF). Tres frases de esta chica son destacables:

- No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser TAN rica.

- No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no he trabajado yo.

- Necesitamos la redistribución de la riqueza, la tierra y el poder y necesitamos que sea un proceso transparente y democrático; para mí, esto significa: impuestos sobre la riqueza!

Suerte que el verano se termina. Aunque tal y como tratamos al planeta... mejor no guardar los pantalones cortos.

23/8/2022

De otras fuentes

Rafael Poch de Feliu

Luces y sombras de Mijaíl Gorbachov (1931-2022)

El gran ruso universal que minusvaloró al imperialismo

Fallecido esta noche a los 91 años de edad, Mijaíl Gorbachov fue un político extraordinario; honesto, valeroso y humanista. Es el único político que he conocido y tratado personalmente cuya foto tengo enmarcada en mi biblioteca. Si hubiera podido tratar a Mandela, Gandhi, Ho Chi Minh o al Che, y posar junto a ellos, los tendría también, pero no fue el caso. Era un tipo simpático. Con sentido del humor y exento de toda arrogancia. Con las mejores cualidades del hijo de *muzhik* de Stávropol que era.

Gorbachov tendía a ver en los demás el aspecto positivo. Creía en la capacidad de las personas y sociedades en avanzar hacia algo mejor. Sin ese fondo de ingenuidad y optimismo sobre las personas y sobre el mundo, nunca habría podido proponerse metas como acabar con la guerra fría o democratizar el sistema soviético.

La ingenuidad y el optimismo, además de la valentía, son imprescindibles en un político que quiera cambiar las cosas. Esos rasgos convierten a Gorbachov en una figura universal. Armados únicamente del pragmatismo y del cálculo aritmético, los realistas nunca cambiarán el mundo. Si además son mediocres administradores de “lo que hay” y están sometidos a intereses financieros, empresariales y oligárquicos, como suele ser el caso, el asunto no tiene vuelta de hoja...

Pero Gorbachov era, al mismo tiempo, un animal político. Lo más curioso de su ingenuidad era que convivía con la *piel de lobo*, con las habilidades necesarias para moverse y ascender en el mundo de la nomenclatura soviética, un universo lleno de intrigas por el que ascendió desde lo más bajo hasta lo más alto. Aún más curioso fue que en ese ascenso, Gorbachov fuera potenciado por sus mentores —fundamentalmente por Yuri Andrópov— precisamente por el fondo de honestidad que se veía en él y que lo hacía preferible a otros, como Gregori Románov o Viktor Grishin, en la URSS de los setenta y ochenta. Ese hecho sugiere que un sistema, que históricamente era a la vez heredero de Stalin y de la desestalinización, un sistema que creíamos tan podrido, quizá no lo fuera tanto puesto que algunos de sus máximos responsables aún eran capaces de distinguir, valorar y potenciar las cualidades positivas de Gorbachov y preferirlas a los rasgos de sus adversarios.

En el grupo dirigente soviético que le acompañó, había otros personajes a los que traté personalmente y siempre consideré como honestos; el primer ministro Vladímir Rizhkov, por ejemplo, o el miembro del politburó Yegor Ligachov, que acabó siendo un adversario de Gorbachov y al que la leyenda occidental convirtió en una especie de demonio con rabo y cuernos, o el Mariscal Sergei Ajromeyev... Pero Gorbachov destacaba claramente entre todos ellos.

Anomalía nacional

Desde el punto de vista de la secular tradición del poder moscovita, Gorbachov es una anomalía. Esa tradición, tanto con el llamado comunismo como en la época zarista, se fundamenta en la autocracia. La tendencia natural del gobernante autócrata es acumular y centralizar más y más poder en su persona. Gorbachov rompió con esa lógica. Delegó poder de autócrata en cámaras representativas. Eso no tiene precedentes en la secular historia rusa y fue interpretado como debilidad por la arcaica y tradicional mentalidad de la sociedad. Gorbachov iba claramente por delante de ella. Creía en la democratización —y en un socialismo más humano— y se suicidó políticamente en aras de esa creencia, porque en Rusia fue un general sin ejército para aquella causa. Recuerdo sus declaraciones, muy claras, ante una veintena de periodistas rusos y extranjeros reunidos en el Kremlin el día que le disolvieron la URSS, en la que mencionó la soledad de Jesucristo en la cruz. Lo hizo sin la más mínima pretensión. Los periodistas rusos allí presentes no entendieron aquella analogía. Los americanos, Bill Keller luego director de *The New York Times*, David Remnick de *The Washington Post*, sonrieron cínicamente. Yo me quedé boquiabierto. Y él era consciente de aquella incompreensión, pero le daba igual: estaba en paz consigo mismo. Por eso no es una figura *trágica*, como afirman equivocadamente tantos observadores.

Gorbachov fue un socialdemócrata, pero un socialdemócrata *en las condiciones de la URSS*. En un universo sin poder financiero, sin propiedad privada y donde lo político dominaba a lo económico, ser socialdemócrata no tenía nada que ver con el SPD o el PSOE. Era democratizar el socialismo. Palabras mayores sin la menor relación con la acción de los Mitterrand, Soares, González y demás personajes.

La sociedad rusa que tanto criticó a Gorbachov prefirió seguir a caudillos como Boris Yeltsin, o luego Vladímir Putin, mucho más tradicionales y acordes con su mentalidad. Gorbachov no tuvo nada que ver con la creación del actual sistema político ruso, un conglomerado de estatismo moscovita y capitalismo parasitario de magnates. Al revés, con Gorbachov como Zar, el adversario, Boris Yeltsin, ganó unas elecciones. Pero Yeltsin ya no consintió lo mismo: cuando su poder fue puesto en cuestión sacó los tanques y disparó contra su

parlamento fiel a la tradición autocrática y entre el aplauso de Occidente. El sistema político de la Rusia de hoy es hijo de Yeltsin, y de Occidente, tanto o más que de la tradición soviética. El futuro, si es que vamos hacia un mundo mejor, queda para el ejemplo y los precedentes que Gorbachov sentó.

Demasiado optimista hacia Occidente

En política internacional, Gorbachov emprendió algo también glorioso. Se centró en la cancelación del conflicto Este-Oeste con la idea de abordar los *retos del siglo* que amenazan a toda la humanidad: el Apocalipsis nuclear, el calentamiento global, la desigualdad Norte/Sur, las pandemias, añadiríamos ahora... En definitiva, la necesidad en el siglo actual de un mundo integrado. Para ello hablaba de “desarrollar el enorme potencial del socialismo” y de la necesidad de propiciar una *nueva civilización*, un concepto que tomó de Einstein y fue siempre su referencia finalista.

Todo eso que dicho por un predicador de provincia habría sido banal e irrelevante, era, por errático que fuera, sensacional en boca del líder de una de las dos superpotencias mundiales. Pero en ese camino glorioso se olvidó del imperialismo, es decir del dominio mundial de las naciones más fuertes sobre las menos, del desarrollo desigual y de la competición por recursos. Aún nos falta perspectiva histórica para juzgarlo, pero es evidente que ese olvido fue nefasto y garrafal.

Con la URSS aún no disuelta, Occidente recibió luz verde para amarrar un poco más su control sobre el petróleo, con la primera guerra de Irak. Luego todos los espacios de los que la URSS se retiró fueron ocupados por la OTAN contra Rusia, operación que continua aún hoy con dramáticas consecuencias bélicas. En Occidente no creían en ninguna “nueva civilización”. Los interlocutores de Gorbachov eran políticos vulgares y reaccionarios como Ronald Reagan o Margaret Thatcher o socialdemócratas que abrazaron el neoliberalismo de aquellos, como Mitterrand o González. Y en el sistema en el que estaban insertos esos líderes no había la menor intención de reforma. Gorbachov demostró que lo irreformable no era el comunismo, sino el capitalismo.

En la operación de la reunificación alemana, cometió un error monumental sobre el que discutimos acaloradamente en varias ocasiones: podría haber condicionado la reunificación a la firma de un documento que excluyera la pertenencia de Alemania a la OTAN así como su ampliación al Este, aspecto que quedó en poco más que declaraciones verbales de buenas intenciones. Gorbachov no lo hizo pese a que la opinión pública alemana estaba claramente de acuerdo con ello. El oportunismo occidental, y en especial de Estados Unidos, que sin la OTAN perdía su control sobre Europa, el caos ruso

de los años noventa, con tres golpes de estado, y la ansiedad de los antiguos vasallos de Moscú por ser vasallos de Washington, pusieron el resto. Por todo ello, la retirada imperial de Rusia no contribuyó a la necesaria integración mundial, sino al avance y crecimiento del otro *gangster global* de la guerra fría que desde entonces va de una guerra a otra. Fue una gran ocasión perdida. Esperemos que no sea irremediable para la humanidad y el planeta.

Un cuarto de siglo después del fin de la guerra fría, los muros Norte/Sur, viejos y nuevos, convierten en minucia aquel “telón de acero” del comunismo. La falta de libertad que había en los países de Europa del Este en el marco de aquella mezcla de socialismo y dictadura, palidece al lado de la pobreza, y las relaciones de desigualdad, explotación y vasallaje que imperan en la mayor parte del mundo, incluidos algunos de los países antes dominados por la URSS y que hoy padecen la habitual mezcla de democracia de baja intensidad y capitalismo.

Desde ese punto de vista, el de Gorbachov es un balance muy, muy ambiguo. Pero pese a ese balance creo firmemente que puede considerarse a Mijaíl Gorbachov como una de las grandes personalidades del Siglo XX. Un ruso universal que podemos colocar en la galería de los grandes hombres universales, al lado de los Mandela, Gandhi, Ho Chi Minh o Che Guevara.

[Rafael Poch-de-Feliu fue corresponsal en Moscú desde 1988 hasta 2002]

[Fuente: [Ctxt](#)]

31/8/2022

Marta Román

Giulia Adinolfi: la semilla roja del feminismo catalán

No es ningún delito decir que el diálogo entre marxismo y feminismo siempre ha sido complicado, ya sea por un tipo de marxismo sin género o por un feminismo sin clase. A finales de los años 70, el feminismo en España resurgió con más fuerza que nunca desde el comienzo de la dictadura, y se produjo un proceso de construcción del movimiento digno de estudio. Giulia Adinolfi nace en 1930 en Salerno, Italia. Militante del *Partito Comunista Italiano* desde los dieciséis años, llegó a Cataluña a través de una beca de estudios hispánicos, y es entonces cuando conoce a Manuel Sacristán, la persona con la que compartirá el resto de su vida.

La mayoría de las personas que la conocieron coinciden en la fascinación que sentían cuando hablaban con ella, así como en la cantidad de trabajo intelectual que hacía durante su día a día de forma discreta. Ella y Sacristán decidieron quedarse en España y comprometerse con la lucha contra el franquismo, rechazando, probablemente, oportunidades que le esperaban en Italia: el lugar donde se había politizado desde pequeña y de donde adquirirá una mirada política determinada con la que teorizará el feminismo catalán de finales del siglo XX. Su militancia en el PSUC fue discreta, mucho más que la de Sacristán, probablemente por los peligros que implicaba una actividad de aquellas dimensiones: no podían asumir los dos el mismo nivel de reconocimiento. Aun así, dedicó los últimos años de su vida a pensar y publicar artículos sobre el movimiento feminista catalán, siendo una de las precursoras de las «jornadas catalanas de la mujer».

Es una necesidad, cuanto menos, exponer parte de las ideas que Adinolfi escribió durante los años 60 y 70, porque elaboró un pensamiento propio que la situó como una de las pensadoras más especiales de su época. También para salir de los márgenes dentro de los que se la suele recordar, y poner en valor su pensamiento político.

La propuesta de la subcultura femenina

En primer lugar, encontramos la línea de análisis con la que Adinolfi participa en el debate igualdad-diferencia. Según esta, la subcultura femenina es aquella cultura general que comparten las mujeres a raíz de sus experiencias en la subordinación. El término cultura indica aquí un elemento de identificación; más allá de un sistema de ideas que busca motivar ciertas conductas, hablar de cultura es tener en cuenta elementos materiales, pero también subjetivos: aquellos que tienen que ver con las costumbres, las tradiciones y los sentimientos. En este sentido, Adinolfi entiende que las mujeres son un grupo subalterno que se mueve entre la aceptación y el rechazo a las relaciones de dominación y que, por lo tanto, el rechazo total de la feminidad es un error político. Para ella, era imprescindible entender que las mujeres han cogido los valores patriarcales y los han elaborado, dejando paso a un sistema de valores propio, y es por esta razón que opta por «no tirar el agua de la bañera con el niño dentro», señalando la necesidad de una aceptación crítica de la feminidad. Como bien afirma Elena Grau, esta propuesta significó una liberación para muchas mujeres de la época:

Tirar la criatura con el agua era tirar algo que nosotras mismas éramos, porque en nuestro ser mujeres no todo era impuesto por el patriarcado. Habíamos recibido de nuestras madres una gran complejidad de saberes, de actitudes, de maneras de hacer y estar en la vida que no se reducían a los mandatos que pretendían minorizar y controlar nuestra vida. Esta parte de nosotras era la criatura —eso descubrimos gracias a Giulia— que queríamos conservar y hacer crecer (Grau, 2022)

A pesar de que las mujeres compartían una misma situación de opresión, esta era diferente dependiendo de la organización política y la clase social a la que se pertenecía. Esto es, Adinolfi considera que el contenido de la feminidad está vinculado a la cultura dominante de las sociedades; a partir de una mirada antropológica entiende que la feminidad no es algo esencial y estable, sino que depende de la adaptación del sistema al contexto concreto. A esto se le añade el elemento de clase, explicitando la existencia de divisiones sociales entre mujeres, hecho que afecta, también, a la expresión y el entendimiento de la feminidad. Es en este punto donde la autora considera que las mujeres de la «burguesía» no buscarán acabar con el sistema capitalista del cual salen beneficiadas, pero si buscarán lograr una igualdad de género para ellas mismas, hecho que hace que el feminismo se constituya como un movimiento diverso en términos sociales.

A pesar de la diversificación social, la discriminación patriarcal afecta a todas las mujeres. Es cierto que la opresión se manifiesta con intensidad y consecuencias diferentes, pero se desprende un sistema de valores lo suficientemente general que permite hablar de una subcultura femenina. Más allá de las diferencias sociales, la experiencia vital de las mujeres comparte un elemento unificador: la opresión específica que sufren, y es en este sentido que al organizar el «movimiento democrático de mujeres» Giulia agrupa a mujeres diversas en términos sociales. Tal y como señala Pilar Fibla en un artículo publicado durante 1981:

El artículo está basado en la experiencia del movimiento democrático de mujeres que organizó el PSUC en los sesenta y que G. A. dirigió. Recordado ahora, una de las características más significativas de las mujeres democráticas era la diversidad, tanto desde el punto de vista social, como político. Coincidieron mujeres de profesiones muy diferentes y de preocupaciones muy diversas respecto al hecho de ser mujeres. Fibla (1981)

Haciendo un paralelismo, hay que recordar como el propio Antonio Gramsci fue uno de los pocos dirigentes de occidente que apoyó la propuesta que Clara Zetkin le hizo a Lenin de «basar la organización internacional de mujeres comunistas en la construcción de lugares abiertos también a mujeres no inscritas en el partido» (Durante, 2019: 320). Giulia Adinolfi fue todavía más allá, agrupando a mujeres diferentes no solo en términos políticos sino también sociales, entendiendo que el movimiento feminista es diverso y, por lo tanto, también un campo de batalla por la hegemonía. Concebir la lucha de las mujeres como plural e identificar elementos de convergencia permite a la autora ampliar el sujeto de la lucha y entender el campo donde se disputa la hegemonía del movimiento. El feminismo, entonces, se tiene que constituir como una política de masas, siendo esta un elemento imprescindible para que la clase trabajadora deje de defender intereses corporativos y, por el contrario, defienda la vida.

El feminismo como política de masas: la necesidad de defender la vida

Adinolfi escribió en 1978 —poco tiempo antes de morir— una nota preliminar donde afirmaba que la tarea pendiente del movimiento obrero era entender la política de masas no solo como elemento táctico del proletariado, sino como la afirmación del carácter hegemónico de sus intereses. La tarea de las clases trabajadoras no es solo cambiar la propiedad de los medios de producción, sino defender la vida. De hecho, la autora dedicó gran parte de su vida a hacer entender que la lucha de las clases trabajadoras tenía mucho que ver con la lucha contra la opresión patriarcal. En uno de sus artículos, denominado «Por un planteamiento democrático de la lucha de las mujeres» (Adinolfi, 2005), hace una crítica a las diferentes concepciones que existían sobre la lucha de las mujeres, en concreto a la visión «paternalista» de la lucha, la «extremista» y la «feminista» **[1]**.

El sistema capitalista necesita relegar a las mujeres a una posición subalterna para mantener su opresión de clase. En este sentido, Adinolfi analiza el papel del trabajo doméstico y lo pone en relación con el funcionamiento del sistema capitalista. Es decir, hace un análisis político-económico de la cuestión señalando el papel que juega la reproducción de la mano de obra en el proceso productivo: aquello que el sistema capitalista considera una tarea privada, esto es, la reproducción de la vida, es en realidad indispensable para su propio funcionamiento. Por esta razón, el llamamiento de Giulia Adinolfi a la organización de la clase trabajadora no se separa de los objetivos feministas, como sí hicieron los planteamientos racional-humanistas del siglo XIX (Ferguson, 2020:80). Los objetivos feministas y los de la lucha de clases están unidos, sin que se dé una disolución de los primeros en la lucha trabajadora. En definitiva, el éxito de la confrontación con el capital depende de la inclusión de las mujeres en la lucha de las clases trabajadoras.

Asumiendo que los intereses de las clases trabajadoras y los feministas tienen que ir de la mano, hay que aclarar que Adinolfi siempre consideró que la opresión de la mujer no se reducía al antagonismo capital-trabajo. De hecho, señala que los problemas de las mujeres demuestran una contradicción interna del propio sistema capitalista, que pretende dar una imagen modernizada sobre el papel que juega la mujer en la sociedad mientras mantiene determinados elementos anacrónicos. Es precisamente por eso que el movimiento feminista se conforma por sujetos diversos en términos de clase.

Las mujeres, por lo tanto, se ven afectadas por los problemas generales de la sociedad, haciendo que el fin de su opresión solo pueda llegar con la erradicación de la explotación de clase. Es por eso por lo que todos aquellos

grupos interesados en acabar con la inferioridad de las mujeres pueden llegar a apoyar intereses que buscan poner fin a la lógica sistémica actual. Esto es, el movimiento feminista se conforma por sujetos diversos en términos políticos y sociales y, por lo tanto, se da una lucha por la hegemonía dentro del propio movimiento. Es imprescindible llevar a cabo esta lucha por la hegemonía, para hacer de los intereses de las clases trabajadoras intereses colectivos, y para defender la vida en todas sus expresiones.

Referencias:

Durante, Lea. 2019. «Hegemonía gramsciana y feminismo: un diálogo necesario», en *Gramsci: La teoría de la hegemonía y las transformaciones políticas recientes en América Latina*. Actas del Simposio Internacional. Asunción: Centro de Estudios Germinal.

Ferguson, Susan. 2020. *Mujeres y trabajo: feminismo, trabajo y reproducción social*. Madrid: Sylone.

Fibla, Pilar. 1981. «Reflexions sobre l'evolució del moviment de dones a Barcelona». *mientras tanto*, 6, pp. 23-29.

Grau, Elena. 2022. «Veure-hi més enllà. El pensament de Giulia Adinolfi sobre la política de les dones». *Cicle "el Marxisme viu"*, [Inèdit].

Adinolfi, Giulia. 2005. «Por un planteamiento democrático de la lucha de las mujeres», *mientras tanto*, 94: pp. 53-60.

Notas:

[1] Se debe aclarar, en este sentido, que Adinolfi elaboró la crítica a la «concepción feminista» haciendo referencia al feminismo liberal burgués de la primera mitad del siglo XX. Este feminismo fue eliminado durante las primeras décadas del franquismo y resurgió hacia los años 60. A finales del 70, con la extensión del feminismo de la segunda oleada se introduce el término «patriarcado» como sistema socio-simbólico de dominación y se empieza a analizar su articulación con el capitalismo. Lo más probable es que Adinolfi tuviera en cuenta este cambio.

[Fuente: [Sin Permiso](#)]

15/7/2022

Fundación de los Comunes
¿Hay que abandonar el feminismo?
Potencias y límites en la coyuntura actual

Cuando el feminismo se vuelve institucional, clasista y punitivista –y esto está ocurriendo incluso en muchos movimientos contraculturales europeos–, este feminismo –que hoy es hegemónico– ¿nos resulta útil para afrontar las luchas en las que estamos?

Después de unos años de gran potencia del movimiento feminista parece que nos encontramos con algunos de sus límites. La fuerza que hemos sido capaces de desplegar no está exenta de peligros si apostamos por un feminismo que sirva para transformar la sociedad y no para apuntalar el *statu quo*. El primero al que se enfrenta es el de su institucionalización: el de su conversión en ideología que sirva para dar legitimidad “feminista” a políticas neoliberales, gobiernos, instituciones y al propio Estado –que también sostiene nuestra opresión–. A veces parece que esta configuración del poder en la que estamos lo asume todo siempre que nuestras luchas no aparezcan como suficientemente trabadas con la redistribución del poder y la riqueza. ¿Lo están las luchas feministas? ¿Todas? ¿O necesitamos un feminismo “con apellidos”? También hemos visto como este movimiento es utilizado para impulsar políticas de carácter punitivo y de reforzamiento del sistema penal –como aquellas que criminalizan la prostitución o las que buscan nuevas penas o el castigo como única vía de solución para la cuestión de la violencia machista–. ¿El feminismo mainstream solo genera víctimas necesitadas de protección estatal? Y si es así ¿cómo cortocircuitamos estos planteamientos?

Frente a este feminismo de Estado, luchas feministas de base –como las de carácter sindical o de clase– proponen una agenda autónoma hermanándose con aquellos feminismos latinoamericanos con fuertes componentes de feminismos comunitarios, decoloniales y populares –de pobres, de putas, de trans...–, capaces de desbordar la agenda de paridad neoliberal. Por tanto, la principal fractura del feminismo hoy no es la cuestión de la prostitución o de los derechos trans, sino aquella que separa a un feminismo del poder –que sirve como herramienta de gobierno– y uno de base o autónomo –capaz quizás de generar contrapoder–.

Pero, ¿qué podría ser un feminismo autónomo más allá de definir por contraposición a lo que no está en las instituciones? ¿Podemos hablar de unos contornos definidos que nos permitan lanzar propuestas conjuntas? ¿A la potencia de esta oleada feminista le ha correspondido un nivel equiparable de nuevas organizaciones de base? ¿Qué “demandas” se han visibilizado estos años de lucha? ¿Hemos generado una agenda propia? ¿Cuáles serían sus contenidos? ¿Se han transformado en conquistas? ¿A qué otros desafíos nos enfrentamos con la popularización del feminismo? ¿Necesitamos un feminismo que ponga en el centro el reparto de la riqueza aunque no parezcan temas “de mujeres”? ¿Esta nueva ola ha relanzado los nuevos pánicos morales sobre el sexo, nuevos puritanismos, intentos de criminalización del trabajo sexual o

que han impulsado un aumento de la transfobia? ¿Puede que nuestros discursos estén reforzando algunos de los efectos indeseables de esta nueva ola? ¿Estamos asistiendo a un declive de esta ola y qué lo provoca? ¿Esto constituye solo un problema o abre nuevas oportunidades?

Punitivismo, represión y pánicos sexuales

En los últimos años, el #MeToo y la insistencia en poner en primer plano la violencia sexual ha tenido resultados ambivalentes. Por un lado, hemos puesto en la agenda la violencia sexual y los abusos en todos los ámbitos, también los militantes. Cosas que estaban normalizadas por fin se verbalizan, por fin dejan de excusarse. Probablemente este cambio cultural es uno de los mayores logros de este último ciclo de movilización feminista. Sin embargo, quizás hemos construido sin querer un imaginario de pánico sobre la sexualidad. Quizás la hemos dibujado como un ámbito únicamente de peligro y no de disfrute, de exploración. Nos ha faltado (y mucho) hablar del placer, de lo que implica conquistar ese espacio siendo mujeres, de lo que ganamos en libertad, en autonomía, en goce.

Vale también la pena abrir el debate sobre nuestra categorización como víctimas porque esta concepción católica y pasiva de la sexualidad de las mujeres también es un pilar que sujeta el orden de género, enquistada sus lógicas y refuerza los marcos estructurales de la violencia de género. A ellos se les presupone un deseo siempre despierto y el pleno dominio de su voluntad y sexualidad. Aunque a veces esta se representa también como algo salvaje e incontenible, un argumento que ha servido históricamente tanto para legitimar la violación, como para sexualizar el racismo –los moros, los negros, los “otros” racializados de turno, esencialmente incapaces de contener sus impulsos sexuales–. A nosotras, por el contrario, se nos presupone pasivas, atesoradoras de un deseo celosamente guardado para recompensar, para agradecer con él a un varón. De ahí provienen algunas de las objeciones feministas a la Ley del Sí es Sí, que tal y cómo está formulada nos ata a esta concepción de la sexualidad femenina, mientras sitúa la agencia y el deseo en el terreno masculino. Nos envía un mensaje inequívoco: el sexo y el placer son dominios de los hombres, territorios hostiles para las mujeres.

Asistimos también a esos peligros: de la victimización y el mojigatismo sexual. Las campañas de terror sexual desatadas en los medios después de violaciones y asesinatos son funcionales a la limitación de los comportamientos y movimientos de las mujeres; a su contención, personal y sexual. El miedo nos hace más pequeñas, nos encierra, nos hace restringir movimientos y dejar escapar oportunidades.

También inaugura un nuevo peligro de reforzamiento del sistema penal, tanto por la cuestión de las violencias machistas, como por los llamados “delitos de odio” –que se han impulsado en parte por una demanda de colectivos LGTBIQ–. Aquí, en vez de atender a una dimensión política que tiene como horizonte la transformación social, se buscan respuestas en un sistema judicial que es patriarcal y que pone en el centro el castigo y la victimización; se individualizan los casos y las soluciones mientras se deja de lado su dimensión estructural.

¿Qué hemos ganado y qué nos queda por ganar en la lucha contra todas las violencias? ¿Hay que volver a hablar de sexo o simplemente confiar en que la sociedad ya está en lugares distintos? ¿Los discursos reaccionarios respecto de la sexualidad/identidades no normativas pueden tener consecuencias más allá de lo simbólico? ¿Cómo trascendemos la victimización? ¿Qué soluciones más allá del Estado somos capaces de imaginar y de poner en marcha? ¿Qué significa realmente tener una visión antipunitiva, se refiere solo a rechazar el ámbito penal –como solución privilegiada– o podemos estar reproduciendo su marco político/afectivo en nuestros entornos y organizaciones? ¿Qué pasa con la violencia que recibimos las disidentes sexuales o de género? ¿Cómo se combaten? ¿Cuando hablamos de violencia machista estamos incluyéndolas? ¿Por qué no?

La cuestión del sujeto

El feminismo ilustrado de la órbita PSOE –pero también sectores de los nuevos feminismos radfem– quieren erigirse en vigilantes de las fronteras del sexo: quien puede definir qué es una mujer podrá convertirse en portavoz de sus demandas –sobre todo en portavoz institucional–. En el feminismo de base, que hace bandera de la diversidad de su composición, hay menos debate pero lo hay ¿hemos retrocedido en esta cuestión? Tanto esta guerra como la de la prostitución en muchos sitios también se han lanzado para romper las asambleas del 8M –cuyas demandas les resultan demasiado radicales– y descomponer parte de la fuerza del movimiento con el objetivo de obtener un feminismo más “manejable” para el poder. Además, sabemos que no es un debate teórico porque el sujeto del feminismo (como cualquier otro sujeto de transformación) se forma en las propias luchas.

Cuando los fundamentalismos cristianos y las extremas derechas hablan de ideología de género no distinguen, hacen causa común contra los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales: ambos desestabilizan el orden social. Entienden, mejor que algunas feministas, que es parte de la misma guerra. Desde una perspectiva de las visiones más emancipadoras, no podemos pensar un feminismo como exclusivo de las mujeres, de sus cuerpos o de sus experiencias. ¿Ha dejado de tener valencia política la categoría mujer? ¿Es

útil? ¿Podemos superarla incluyendo a todos los sujetos que desafían el orden de género? ¿Y a los hombres? ¿Siguen siendo útiles estas identidades? ¿Cómo rompemos fronteras identitarias de nuestras luchas que nos impiden lanzar luchas más fuertes? ¿Se puede tratar de derrocar el orden social desde luchas compartimentadas? ¿O cómo se podrían componer entre sí? ¿Tenemos que abandonar estas luchas compartimentadas y sumarnos a movimientos de transformación más amplios? ¿Las llevamos al interior de las organizaciones por la vivienda, el trabajo, a los espacios de apoyo mutuo, etc...)? ¿O seguimos en espacios “separatistas”?

La cuestión de la clase

El feminismo institucional se mueve mejor en las cuestiones sexuales. Si el eje que explica la desigualdad de género es el sexual, todas estamos oprimidas por igual, mientras que si se le da centralidad a la división sexual del trabajo quizás hay que empezar a reconocer las diferencias entre nosotras. No somos todas iguales. Hacerse con el capital político del feminismo se vuelve así más resbaloso cuando su contenido se une a cuestiones materiales y redistributivas como pretende el movimiento de base. Desde ese feminismo nos llegan demandas que son ignoradas o arrinconadas por los partidos “feministas” de gobierno, como las sindicales, muchas de ellas relacionadas con el sector de cuidados, -las de las trabajadoras domésticas que no tienen todos los derechos o las de las Kellys, descontentas con la reforma laboral, entre otra-. También se omiten las luchas que tienen que ver con la desprotección en la que quedan las migrantes sin papeles o las que están sujetas a las restricciones que les impone la Ley de Extranjería. El feminismo como ideología de gobierno tiene muchas dificultades para asumir estas demandas.

Nosotras creemos que desestabilizar el orden de género tiene que hacer parte de un proyecto más amplio de transformación de carácter universalista que se oponga al capitalismo y al colonialismo. ¿Sirve el feminismo para hacer esto? ¿Por qué? ¿Es deseable seguir apoyando un feminismo interclasista como la alianza que se materializa en las grandes manifestaciones del 8M donde caminamos junto a ministras, empresarias y aquellas que quieren su 50% del infierno? ¿Para qué nos es útil? ¿Justifica la ofensiva reaccionaria la necesidad de estas alianzas? ¿Cómo avanzar entonces con nuestras propias propuestas?

Organización y herramientas de lucha

Hablar de organización es hablar de cómo imaginamos las luchas presentes y futuras, sus conflictos y los espacios de articulación y potencia que despliegan. A nuestro modo de ver es pensar los lugares posibles de creación de contrapoder y actualizar nuestras prácticas para ir construyendo otra

sociedad posible. Si abandonamos cualquier ilusión de lo que se puede alcanzar mediante la política institucional ¿cómo construimos estos otros espacios que articulen unas prácticas autónomas, antipunitivistas capaces de poner la reproducción de la vida, la clase, las luchas antiracistas en el centro? ¿Cómo generamos contrapoderes que transformen la realidad existente? ¿Tiene el feminismo que atravesar otras luchas en marcha o debe configurarse en espacios separatistas que impulsen una agenda feminista específica? ¿Deben acaso estos espacios hacerse eco de las otras luchas de transformación social o de ampliación de los sujetos políticos? ¿Se puede hacer una política de transformación efectiva desde el identitarismo? ¿Qué fuerzas nos dejamos fuera si definimos estrechamente los límites del sujeto de lucha? Si decimos que nuestra lucha es por cambiar la sociedad, ¿acaso para eso no necesitamos también a los hombres cis?

[Fuente: [elSalto](#)]

21/7/2022

Yayo Herrero **Contra el capitalismo del desastre**

Sería catastrofista pensar que no hay nada que hacer ante los datos, que los seres humanos somos un virus, que la historia está marcada por el determinismo energético o climático, que el devenir material y político sigue una trayectoria inexorable.

* * *

Llevamos varios meses leyendo y escuchando en medios de todas las tendencias que a partir del otoño se desencadenará una profunda crisis humanitaria. Se anuncia que, como siempre, afectará más a los países y sectores de población empobrecidos y que partes crecientes de población, que no están o no se perciben en riesgo, engrosarán los porcentajes de empobrecimiento.

Las noticias detallan la confluencia de una serie de factores que provocan una tormenta perfecta. Los efectos de la crisis del coronavirus, la crisis energética y la falta de fertilizantes químicos provocada por la agresión de Rusia a Ucrania, o la disminución de los rendimientos de las cosechas a causa del cambio climático son algunos de los que se están destacando en mayor medida.

A la vez, la sucesión de olas de calor, los incendios inapagables, la amenaza de déficit hídrico, que tarden dos semanas en darte cita con el pediatra o la subida generalizada de los precios de alimentos y materias primas, van sumando y provocan una percepción generalizada de inquietud, tristeza y enfado ante el desmoronamiento de algunas certezas anteriores, de eso que llamábamos normalidad.

Todo esto ya existía, pero ahora muchos medios de comunicación exponen un presente y futuro distópico. Es una novedad. Hasta ahora, las crisis materiales interconectadas estaban camufladas y el futuro, tecnológico y moderno, aparecía como un horizonte esperanzador y deseable. Ahora, dependiendo del color político del medio, o se buscan chivos expiatorios que canalicen la rabia y el miedo, o se ofrece un repertorio de soluciones personalizadas que se resumen en apriétese individualmente el cinturón, búsquese la vida o pase de todo y disfrute, mientras avanza la dinámica de acumulación, acaparamiento, explotación y erosión de los derechos. Es el capitalismo del desastre.

Lo que a mí más me preocupa es lo que sucede en los ámbitos progresistas, en las izquierdas y en muchos movimientos sociales. Estamos ante el avance de una crisis humanitaria conocida, prevista desde hace tiempo, que genera comentarios tipo “la que se va a liar” o “se está preparando una buena”, pero ante la que no hay capacidad de respuesta. Me preocupa la sensación de impotencia –e incluso pereza– política a todos los niveles. El exponente más triste de la pérdida del sentido histórico y político es lo que sucede en los lugares –demasiados, por desgracia– en los que las izquierdas asumen la inexorable llegada de un gobierno de derecha y ultraderecha, y dedican el grueso del tiempo no a tratar de evitarlo, sino a destrozarse entre sí.

Creo que los movimientos sociales y las izquierdas institucionales se tienen que responsabilizar y actuar coherentemente con los diagnósticos que se hacen. La cuestión es ver si se puede intentar estar a la altura del momento histórico que nos ha tocado vivir.

Me da rabia que algunas de nuestras mentes más brillantes, con mejor o peor estilo, dediquen tanto tiempo y parte de su indudable talento a acusarse mutuamente de maximalistas e intolerantes, de reformistas o flojos, o a pontificar desde la estratosfera de las redes sociales, qué es lo que el pueblo puede ser o no capaz de entender. Detesto los estériles debates entre los catalogados como “colapsistas” y los calificados como “newgreendealistas”. Me cargan las alharacas, un tanto machunas, y excesos en los hilos de Twitter y artículos, las acusaciones mutuas de superioridad intelectual o de ignorancia.

Todos los contendientes reconocen y comparten que esta organización social

se desmorona y que este desmoronamiento no es un botón que se aprieta y todo salta por los aires, sino una degradación paulatina material, política y social que erosiona desigualmente las condiciones de vida de la gente y favorece el crecimiento de la desigualdad y la emergencia de la xenofobia, la misoginia y la violencia.

Comparten, también, la necesidad de transformaciones rápidas que conduzcan a la disminución del extractivismo y de las emisiones, a la adaptación a la “nueva normalidad” del cambio climático y del declive de energía y materiales, de forma que se puedan garantizar la cobertura de las necesidades de las personas, a la vez que se hace hueco al resto del mundo vivo y se favorecen la restauración y regeneración del funcionamiento de los ecosistemas. Ya es mucho compartir, me parece a mí. Las mayores diferencias se establecen en torno a los ritmos y las estrategias sociales, políticas y/o electorales para lograrlo. Pues bien, no hace falta ponerse de acuerdo en todo. Pueden y deben intentarse transformaciones en todos los ámbitos. Que cada cual empuje donde crea que es más útil.

En mi opinión, es una obligación conseguir que instituciones renovadas, como poco, dejen de obstaculizar, y deseablemente abran paso a otras políticas y a otros discursos sociales. Es verdad que los cambios institucionales siempre parecen pocos, pero esos pocos tienen una importante repercusión sobre las vidas de la gente. Mantener una sanidad y educación públicas, apostar por un cuidado digno de la vida de las personas mayores, garantizar derechos y suministros básicos para todas, proteger el territorio...

En definitiva, blindar un suelo mínimo de necesidades para todos y todas en el corto y medio plazo necesita de la política pública, y obviamente, no da igual quien gobierne. Cualquiera que estudie, por ejemplo, la política pública en Barcelona, encontrará evidentes y enormes diferencias con la de Madrid. No será todo a lo que aspiramos, pero no saber encontrar y reconocer la diferencia es un ejercicio irracional y peligroso.

Por otra parte, es más que obvio que alcanzar las instituciones no garantiza tener poder. Y si no tienes detrás a los grandes medios, a grandes fortunas o al poder financiero y económico; si te vas a encontrar con la acción de entramados y cloacas que mienten, confabulan y conspiran, la única forma de llegar y permanecer sin claudicar es contar con un apoyo social organizado y sólido, que esté dispuesto a exigir -y a exigirte- debates, acuerdos y rendición de cuentas.

Los movimientos sociales, por su parte, también tienen la obligación de organizar la resistencia, presionar, desobedecer, abrir camino, disputar la hegemonía cultural, poner en marcha alternativas, construir laboratorios de

experiencias y tejer núcleos comunitarios.

Es absurdo y poco fino tildar los movimientos sociales de inútiles o maximalistas. El movimiento ecologista que yo conozco ha sido capaz de aplicar en todo momento un tremendo pragmatismo utópico. Se han elaborado estudios e investigaciones cruciales. Hemos peleado los avances en las leyes, artículo por artículo; hemos alegado con rigor contra cientos de proyectos, chapuzas y desastres y se han llegado a acuerdos con gobiernos de todos los colores sin perder de vista ni dejar de intentar construir una alternativa que cambiase de raíz las bases de las relaciones con la naturaleza y entre las personas.

No dudo que quienes hablan de un movimiento ecologista inflexible y dogmático se hayan encontrado con personas así pero, a veces, se hacen afirmaciones de trazo grueso poco dignas de la finura y capacidad de quienes las hacen. No es, desde luego, mi experiencia y me encantaría que la capacidad de debatir, escuchar, cambiar el propio punto de vista, generar liderazgos compartidos, intentar resolver creativamente los conflictos internos, y respetar y apreciar a los y las compañeras que yo he vivido se extendiese a otros movimientos o a los partidos.

Creo, como dice Bruno Latour, que la racionalidad ecologista, que reconoce las dependencias materiales humanas y los límites, es la más necesaria en el momento actual. Soy poco dada a los optimismos naíf preelectorales y cada vez me carga más el adjetivo *ilusionante* como pin que se autoprende en el pecho quien quiere ilusionar. La ilusión, el compromiso y la fuerza no los genera desde luego un informe con datos, pero tampoco una lista electoral que no esté fuertemente conectada con un movimiento de base. En este momento de incertidumbre y *bajona* generalizada, creo que conviene nombrar a las cosas por su nombre, no eludir los grandes conflictos, que mucha gente intuye.

Nombrar y diseccionar los problemas no es catastrofista. Hay una tendencia a confundir los datos con la catástrofe. La catástrofe no son los datos por malos que sean. Lo catastrófico es extraviar la pulsión y el deseo intenso de estar vivos, de permanecer con vida. Y lo terrible en el plano político es no extender esa pulsión a la vida de todos y todas.

Sería catastrofista pensar que no hay nada que hacer ante los datos, que los seres humanos somos un virus, que la historia está escrita y marcada por el determinismo energético, climático o de cualquier otro tipo, que el devenir material y político sigue una trayectoria inexorable o inevitable. La historia no está escrita y podríamos hacer que pasen muchas cosas que eviten o mitiguen las proyecciones más negativas.

La economía doméstica, las pensiones, o que se pague un seguro de entierro, muestran que las personas son capaces de prever y renunciar a algunos bienes en el corto plazo para hacer menos incierto el futuro. Es catastrofista pensar que los seres humanos estamos incapacitados para desarrollar una racionalidad de la precaución y la cautela.

Pero, en mi opinión, también es tremendamente catastrofista declarar de forma taxativa que lo que sería necesario hacer para afrontar el desmoronamiento de los sistemas socioeconómicos fosilistas en tiempos de cambio climático es inviable políticamente. Es otro tipo de determinismo, que viene marcado por la falta de confianza en lo que las personas pueden comprender y construir en común.

Si lo necesario en tiempos de potenciales catástrofes es percibido como políticamente inviable, entonces ¿para qué la política? Esa afirmación, la de que lo que necesitamos sea inviable, sí que me asusta y me desanima. Si lo necesario no es viable, ¿cómo se van a sostener las vidas? ¿Qué vidas son las que se van a priorizar? ¿Cuáles son las que se van a abandonar? ¿A quién –como se preguntaba Javier Padilla en su libro– vamos a dejar morir? La ultraderecha lo tiene claro, y por ello en su discurso quiebra la razón humanitaria. En su lógica, como no caben todos, hay personas a las que hay que abandonar. Para hacerlo con comodidad les retira su condición de humanidad y las declara amenaza.

Quienes creemos, como dice Judit Butler, que toda vida perdida merece ser llorada, que todas las vidas valen, no podemos renunciar a lo necesario. Es por eso que creo que la idea de lo posible no puede ser un horizonte político. Es un peligro que el alivio y descanso que produce centrarse en eso indeterminado y ambiguo que llamamos lo posible, haga tragable no llegar a lo necesario. Otra cosa es que haya que construir las condiciones de viabilidad, pero si divorciamos el propósito de la política de la persecución de lo necesario, entonces, creo que la política corre el riesgo de desorientarse.

El decrecimiento de la esfera material de la economía es un dato. El declive de energía y materiales, o la disminución de cosechas en las que incide el cambio climático o los problemas de agua son un hecho. Ni el modelo alimentario actual, ni el de transporte, ni el energético, ni el de consumo se sostendrán en un contexto de contracción material. Sufrir contracción material en el orden económico y político actual, sin transformar las relaciones que se dan en él es situar la política en la balsa de la Medusa, en donde las únicas opciones son matar o morir.

Quienes no queremos matar o morir debemos esforzarnos porque el marco de relaciones y el tablero político sea otro. A mí solo se me ocurre uno basado en

el principio de suficiencia –como derecho y como obligación–, el del reparto de los bienes y los deberes, y el de la sostenibilidad de la vida, de todas las vidas, como principio organizador de la política.

Es obvio, que hay que empezar forzando el umbral de lo posible, de modo que lo acerquemos cada vez más al de lo necesario. Podemos aprender de otros. La apuesta, por ejemplo, de Gustavo Petro y Francia Márquez por un vivir sabroso, consciente de los problemas territoriales, de la violencia brutal, del extractivismo, del cambio climático, es un esfuerzo por cambiar el escenario, por salir de la balsa de la Medusa y construir otras en las que quepamos todas.

O la de Chile. Llegué a Chile con mi compañero el 26 de octubre de 2019. Días antes de ir, quienes organizaban las charlas que yo iba a dar me advertían que era posible que no hubiese mucha receptividad ni asistencia. “Aquí no se mueve nada”, decían. La doctrina del *shock* aplicada en Chile se había convertido en el paradigma del éxito neoliberal en América Latina. Me contaban que tantos años de individualismo fomentado, de inexistencia de lo común y lo público y de educación neoliberal, habían hecho que no hubiese ningún tipo de posibilidad de mover nada. Solo había algunos movimientos de protesta sectorial: los pensionistas, el movimiento contra los peajes en las carreteras, la juventud, las afectadas por problemas de salud mental, la defensa de las fuentes de agua, los feminismos...

El 19 de octubre se había producido el estallido social que nadie había previsto. Los editoriales de los periódicos se preguntaban cómo era posible que no lo hubiesen visto venir. Los sectores progresistas en el gobierno tenían miedo de que en una sociedad desvertebrada, el desorden desembocase en una suerte de estado fallido manejado por mafias y cárteles de diferente tipo. Pero no fue eso lo que sucedió. La gente se articuló en asambleas y cabildos barriales o municipales y empezó a hablar.

Mirando el cuaderno que escribí durante aquel viaje, encuentro lo que me dijo una mujer de Buin, cerca de Santiago de Chile, cuando hablaba de la represión del estallido: “Se está haciendo una deconstrucción a palos de lo que nos enseñaron que era la calidad de vida”. Se produjo un movimiento inesperado de encuentro, cooperación, lucha y reconstrucción. Emergió la convicción de que hacerse cargo unos de otros era imprescindible y de que es imposible garantizar vejez ni juventud digna si no se construye colectivamente.

Lo que los sectores progresistas en el Gobierno consideraban posible en Chile estaba tan separado de lo que era necesario, que la gente se arremangó para construir un nuevo marco que hiciera que vivir con dignidad fuese una

posibilidad.

Esa explosión comunitaria no surgió de la nada, sino que se condensó alrededor de pequeños coágulos de encuentro y organización previos. La lucha por las pensiones dignas, la rebelión contra los peajes de pago, la resistencia en las zonas de sacrificio, las violencias machistas, el colonialismo... De no haber existido esos pequeños tumores dentro de la normalidad, hubiese sido difícil articular un movimiento que en dos meses se atrevía a proyectar un nuevo horizonte de deseo.

En septiembre se someterá a votación la nueva constitución, la primera que piensa en cómo se puede organizar la vida en común en un contexto de translimitación y cambio climático. Espero que se apruebe, pero en cualquier caso el camino político está iniciado, y ha quedado demostrado que las personas en poco tiempo son capaces de comprender, articularse y cambiar el marco político en el que desean vivir.

Ojalá cuando lleguen los momentos convulsos a nuestras sociedades -que llegarán- tengamos tantos núcleos de comunidad y apoyo mutuo que permitan que sea más fácil que surjan movimientos de cooperación y reconstrucción que dinámicas de todos contra todos.

Hace mucho que decidí no perder ni un rato en pelearme con aquellos de los que no me separa gran cosa. Me interesan los debates teóricos solo si tienden lazos y se dejan permear por lo que sucede en los territorios y en los cuerpos concretos y me parecen absurdos y contraproducentes si su resultado es el de establecer categorías estancas que solo aportan diferenciación o atrincheramiento. La permanencia constante en la abstracción es el privilegio de quienes no tienen la obligación de ocuparse de lo concreto.

Con todo respeto, me atrevo a sugerir autocontención, humildad y silencio en los momentos en los que solo podemos expresar rabia o desprecio por la postura del otro, aunque se revista de la consabida pátina de racionalidad o creamos saber cómo hay que hacer las cosas. Recomendaría que de vez en cuando leamos del tirón nuestros propios tuits de los últimos meses y revisemos si hay coherencia entre las prioridades que definimos y a quién le damos cera.

No olvidemos que, por el momento, a ninguno nos están saliendo muy bien las cosas y que las lecciones que damos desde todas las partes no están avaladas por una práctica exitosa o ganadora en términos de máximos. No caigamos en el error de pensar que hemos ganado cuando perdemos menos que otros.

Hay tanto, tanto, por hacer que seguro que al menos parte del camino lo

podemos caminar con otros diferentes y, si no es así, no pasa nada porque esos caminos sean paralelos. No hay que estar de acuerdo en todo. Por mi parte, nunca sola, decidí hace tiempo dedicarme a tiempo completo a esa reconstrucción, en los movimientos en los que participo, en la relación con las personas que quiero, en la cooperativa en la que trabajo. Tengo la suerte de tener una fuente de sentido vital inagotable. Me siento fuerte y tengo alegría. La cuido, porque creo que no nos podemos permitir perderla.

Uno de esos espacios desde los que intentar crear un marco en el que no haya que escoger entre matar o morir, desde el que hacer que lo posible y lo necesario se acerquen, es el de la Revista Contexto. Y agradezco poder estar aquí.

Un fuerte abrazo.

[Fuente: [Ctxt](#)]

1/8/2022

Adrienne Buller **El capitalismo verde es un mito**

En febrero de 2022, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó su último resumen de los impactos de nuestro clima, que cambia rápidamente. Se trata de un vasto documento, que alcanza casi 3.700 páginas en las que se recopilan todas las pruebas disponibles sobre las innumerables transformaciones, inseguridades y catástrofes que se vislumbran en el horizonte y que ya afectan a muchas personas en todo el mundo. En miles de páginas de conclusiones científicas, podría ser fácil que se perdieran los puntos esenciales. Afortunadamente, la línea final del informe no deja de ser clara: «La evidencia científica acumulada es inequívoca (...). Cualquier retraso adicional en la acción global concertada y anticipada sobre la adaptación y la mitigación perderá una breve y rápida ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos (confianza muy alta)».

Esta no es la única revelación que aparece en las páginas del informe. Por primera vez, el IPCC reconoció el papel del sector privado en el fomento no solo de la desinformación sobre la crisis climática, sino de otro fenómeno, que denominó «mala adaptación». En palabras de los autores del informe, la mala

adaptación describe aquellas acciones que pueden estar diseñadas para ayudar a mitigar o adaptarse a un clima cambiante, pero que al hacerlo «conducen a un mayor riesgo de resultados adversos relacionados con el clima, incluso a través de un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, un aumento o cambio de la vulnerabilidad al cambio climático, resultados más desiguales o una disminución del bienestar, ahora o en el futuro». Ya sea por comprometer los medios de vida o por acelerar la pérdida de biodiversidad, las respuestas inadaptadas «pueden crear bloqueos de la vulnerabilidad, la exposición y los riesgos que son difíciles y costosos de cambiar y exacerbar las desigualdades existentes». En la mayoría de los casos, afirman los autores, la mala adaptación es probablemente una «consecuencia no deseada». En cierto modo, los autores describieron (involuntariamente o no) el problema del capitalismo verde.

Dada la urgencia del contexto y el peso de la política que respalda los sistemas e ideas subyacentes al marco del capitalismo verde, ¿debemos aceptar las soluciones del capitalismo verde? ¿Es algo —cualquier cosa— mejor que nada? Si al frenar las emisiones o proteger la biodiversidad algunos financiadores y empresas de desarrollo obtienen un beneficio exorbitante, ¿es eso realmente un problema tan grande como para merecer el abandono de todo el proyecto?

Vivimos en una sociedad estructurada y definida por relaciones capitalistas, y la idea de que las soluciones basadas en el mercado son el mejor y más pragmático camino para resolver la mayoría de los problemas es un sentido común poderosamente arraigado. Las empresas de gestión de activos y otros grandes intereses corporativos tienen un gran poder a la hora de determinar las perspectivas de los gobiernos y las instituciones internacionales. Esto hace que cualquier programa para enfrentarse a estos intereses sea una batalla cuesta arriba, que debe avanzar por un terreno increíblemente desfavorable. Al mismo tiempo, la crisis ecológica avanza a cada paso por las trayectorias más rápidas que los científicos han ofrecido. El tiempo no es un lujo que podamos permitirnos.

Para responder a esta pregunta, primero conviene establecer criterios sobre lo que constituye una «solución» que merece la pena perseguir. He evaluado las soluciones del capitalismo verde en función de lo que considero dos criterios esenciales. El primero, con el que estoy seguro de que cualquier persona preocupada por la crisis ecológica estará de acuerdo, es que una solución debe tener un impacto material: debe frenar o invertir el flujo industrial de emisiones a la atmósfera o el colapso de la biodiversidad; en su defecto, debe reducir la vulnerabilidad a los impactos de estos procesos o contribuir a la adaptación. Y lo que es más importante, debe cumplir una de estas tareas en un plazo que refleje la urgencia de la aceleración de la crisis ecológica.

En segundo lugar, y tal vez de forma más divisoria, debe contribuir a cambios necesariamente radicales en la distribución de la riqueza, el consumo y el poder en la economía mundial. No se trata de una cuestión de igualdad o justicia en un sentido moralizante. Ambas cosas merecen la pena por sí mismas. Para muchos (entre los que me incluyo), esto hace que cumplirlos sea un listón necesariamente alto para cualquier enfoque que aborde estos retos. Sin embargo, incluso para quienes se interesan únicamente por la cuestión de la eficacia —es decir, si una solución reduce las emisiones o la degradación ecológica—, alcanzarlas es también una necesidad práctica.

Las pruebas de que el consumo opulento es el principal motor de la crisis ecológica son amplias. Aunque el progreso tecnológico ha producido, hasta la fecha, algunas reducciones en la producción de materiales y en los residuos, estas ganancias han sido totalmente anuladas por el aumento del consumo. Sin embargo, aunque el consumo opulento es importante en términos absolutos, las desigualdades en estos patrones de consumo y residuos son igualmente críticas. En parte, esto refleja el «juego de suma cero» del aumento del consumo: la renta relativa es uno de los determinantes más fuertes de la felicidad, con el resultado de que las formas y las tasas de consumo que señalan la posición de cada uno son impulsadas abrumadoramente por los súper ricos, y a su vez impulsan el consumo en general con rendimientos decrecientes para el bienestar. La necesidad de abordar estas desigualdades también refleja la medida en que la naturaleza y la escala del consumo y los residuos entre los ricos exigen tierra, recursos y mano de obra «baratos» e invisibles, ya sea vertiendo residuos industriales cerca de las comunidades de color o enviando cientos de contenedores de residuos plásticos de los consumidores canadienses para que los traten trabajadores malayos.

En este sentido, la «libertad» que implica el consumo y la elección dentro de los mercados descansa, en última instancia, en la profunda falta de libertad de innumerables personas, que se mantienen fuera de la vista. Se trata de una estrategia que está llegando al final de su camino. La oferta de estas personas invisibles, de las ecologías y de los vertederos de residuos está disminuyendo rápidamente. De hecho, como afirma Jason Moore, «El fin de la basura barata puede ser mayor que el de los recursos baratos». Estos son, pues, mis criterios para evaluar cualquier planteamiento para afrontar la crisis ecológica. El primero asegura un presente y un futuro seguros y habitables. El segundo también lo hace, a la vez que intenta que ese futuro merezca la pena ser vivido.

Las soluciones del capitalismo verde

El principal argumento que se esgrime a favor de las soluciones de mercado a

la crisis climática y ecológica es la rentabilidad. Se tiende a prestar mucha menos atención a la cuestión urgente de si, en la práctica, estas soluciones han cumplido sus supuestos objetivos, desde la rápida reducción de las emisiones hasta la restauración de un ecosistema biodiverso. Quizás sea por una buena razón: las pruebas revisadas sobre el impacto material de las soluciones capitalistas verdes existentes ofrecen pocos motivos para el optimismo. Entre los mayores triunfos de los mecanismos de fijación de precios del carbono, por ejemplo, se encuentra el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de la UE que —aunque informa de reducciones de emisiones cercanas al 40% en los sectores que cubre— apenas ha dejado mella, en 15 años, en las emisiones globales de la región.

Tampoco ha aportado las «innovaciones» en materia de energía e industria descarbonizadas que suponen los defensores de la tarificación del carbono; más bien, la mayoría de las ganancias hasta la fecha han sido el resultado de transiciones temporales del carbón al gas. Las finanzas sostenibles se presentan como una alineación perfecta entre el motivo del beneficio y el altruismo —hacer el bien haciendo el bien—, pero por el momento parecen ser, en el mejor de los casos, un ejercicio inmaterial de marca, y en el peor, una excusa para la inacción de los responsables políticos.

Además, en las condiciones cambiantes del capitalismo de gestión de activos, el papel del Estado se ha orientado firmemente hacia la eliminación del riesgo y el pastoreo de los beneficios del sector privado, en lugar de utilizar sus capacidades para la inversión y la acción directas. Las pruebas a favor de los programas de compensación de la biodiversidad son quizá las menos convincentes, ya que hasta ahora han generado resultados entre pobres y catastróficos para la biodiversidad, al tiempo que han creado nuevas oportunidades para obtener beneficios de los nuevos mercados de la conservación.

Pero más allá de que estos mecanismos de mercado no hayan conseguido hasta ahora un impacto sustancial, hay muchas razones para creer que nunca lo harán. En parte, esto refleja la omnipresencia de suposiciones y prejuicios sin fundamento, desde el descuido del arraigo sistémico de los combustibles fósiles en los sistemas globales de energía y producción hasta la priorización de la eficiencia de los costes sobre los resultados ecológicos reales. Pero también refleja la tendencia del capitalismo a externalizar los costes, de modo que todos estos esfuerzos por «internalizar» los daños climáticos y ecológicos en el mercado han generado y seguirán generando nuevas y dolorosas «externalidades». Aquí es donde la cuestión de la materialidad empieza a desprenderse de la cuestión de la justicia.

Las ilusiones del capitalismo verde

En la crisis ecológica, el capitalismo se enfrenta tanto a una amenaza sin precedentes para su lógica de funcionamiento fundamental, como a una oportunidad para convertir (durante un periodo finito) la mitigación de esa amenaza en un nuevo terreno para el beneficio. El capitalismo verde refleja esta mezcla de amenaza y oportunidad, y se centra en dos grandes estrategias para minimizar la primera y maximizar la segunda. La primera estrategia consiste en mercantilizar y hacer compatible con el mercado la gobernanza de los fenómenos, desde las emisiones de carbono hasta los «servicios» que prestan a la economía los ecosistemas y la biodiversidad. La segunda consiste en utilizar al Estado como facilitador de los nuevos ámbitos del mercado y como «desprestigiador» del capital privado, en línea con el Consenso de Wall Street articulado por Daniela Gabor.

En lugar de la inversión y la capacidad públicas, los enfoques del capitalismo verde abogan por el uso de la capacidad del Estado —especialmente para manejar el riesgo— para salvaguardar y guiar el capital privado hacia áreas previamente indeseables mediante una mezcla embriagadora de creación de mercado, incentivos y garantías. En la práctica, estos enfoques operan en una secuencia algo borrosa, con el establecimiento de mercados para el comercio de permisos de emisión, por ejemplo, inmediatamente seguido y suplantado por el mercado de derivados y otros productos financieros basados en estos nuevos productos, con el riesgo financiero a menudo trasladado, voluntariamente, al Estado y al público.

Entre ambas estrategias hay un hilo conductor: el esfuerzo por privatizar la respuesta a la crisis ecológica. En otras palabras, las soluciones del capitalismo verde pretenden transferir las cuestiones complejas, ética y socialmente tensas e intrínsecamente políticas que plantea la crisis ecológica del terreno democráticamente contestable a la autoridad privada de los mercados, con resultados impulsados en última instancia por el interés propio de actores racionales motivados por el beneficio.

Para los discípulos del liberalismo económico del «libre mercado», la idea de que el capitalismo verde pretende trasladar la autoridad sobre la respuesta colectiva a la crisis ecológica a la esfera privada parecerá un grave error de lectura del mercado y del mecanismo de los precios como terreno último de la democracia. Citando a Ludwig von Mises, uno de los más destacados pensadores del libre mercado: «El sistema de producción capitalista es una democracia económica en la que cada céntimo da derecho a voto». Desde este punto de vista, el mercado es un sistema innatamente democrático, en el que los actores llegan libremente como iguales y hacen oír su voz gastando o reteniendo su dinero. En consecuencia, el mercado es también un árbitro de la justicia y el buen gobierno democrático, ya que penaliza a las empresas o actores cuyas acciones u ofertas se consideran indeseables.

Cualquier observador casual de los sistemas políticos de Estados Unidos o el Reino Unido, entre otros, comprenderá inmediatamente que esta visión es una fantasía. La escala de poder económico ejercida por las grandes empresas corporativas y financieras que hoy dominan la economía mundial prácticamente borra el poder que tiene cualquier individuo para hacer oír su voz. De hecho, las corporaciones también tienen una gran influencia en los procesos políticos democráticos formales, con el poder de los grupos de presión y las donaciones políticas que a menudo establecen términos increíblemente estrechos dentro de los cuales los políticos pueden operar. Las distribuciones de la riqueza son radicalmente desiguales y su relación cada vez más estricta con la propiedad de activos hace que la siempre evasiva aspiración de «movilidad social» sea cada vez más insostenible.

Cada día producimos alimentos más que suficientes para alimentar a todos los habitantes de la Tierra y, sin embargo, cada año se desperdician más de mil millones de toneladas, mientras que se calcula que 800 millones viven con hambre y desnutrición crónica. La libertad de consumir bienes asequibles se basa cada vez más en la falta de libertad y la explotación recíproca de quienes forman parte de las cadenas de suministro de esos bienes, desde los trabajadores de la confección hasta los trabajadores agrícolas estacionales. Es difícil mantener que este es un sistema que se define por su promoción de la democracia, la libertad genuina o la justicia.

Para ser justos, los pensadores del libre mercado reconocen que existen desigualdades expansivas y que la gente puede tener problemas con ellas; sin embargo, dentro del sistema de valores dirigido por el mercado, éstas no son problemáticas. Volviendo a tomar prestado a Mises: «Es cierto que los distintos individuos no tienen el mismo poder de voto. El más rico emite más votos que el más pobre. Pero ser rico y obtener mayores ingresos es, en la economía de mercado, ya el resultado de la elección anterior». Así, la cuestión de la enormemente injusta «predistribución» de la riqueza y, en consecuencia, del poder democrático, se considera totalmente justa: el reflejo de la voluntad democrática previamente ejercida. Del mismo modo, la igualdad sustantiva no es motivo de preocupación, siempre que se cumplan las condiciones de la igualdad formal, de modo que tanto el príncipe como el mendigo sean igualmente libres de dormir bajo los puentes de París.

Este relativo desinterés por la desigualdad sustantiva es parte integrante, y no accesoria, de la economía y los sistemas de gobierno basados en el mercado. Como escribió el teórico Stuart Hall, este enfoque «liberal» de la gobernanza encarna una tensión ineludible «entre sus reivindicaciones universalistas en nombre de todos los ciudadanos y su alineación con los intereses de sectores particulares de la sociedad; entre su compromiso con el gobierno representativo y sus dudas sobre la democracia universal». Es un

desinterés que también, en última instancia, asesta el golpe más fuerte a las perspectivas del capitalismo verde como programa viable o deseable para afrontar la crisis ecológica.

Los enormes proyectos de plantación de árboles al servicio de las demandas de compensación de carbono ya están impulsando importantes acaparamientos de tierras en muchas regiones del Sur Global, y su adopción generalizada —en combinación con otras no-soluciones como el aumento masivo de los cultivos para bioenergía— está poniendo en riesgo adicional la estabilidad del suministro mundial de alimentos. La resistencia a la percepción de una política climática antidemocrática de las «élites», que se percibe como una carga injusta para los trabajadores pobres, está muy extendida (aunque no siempre de buena fe), desde los *gilets jaunes* en Francia hasta el Net Zero Scrutiny Group del Parlamento británico.

Al mismo tiempo, el hecho de poner en primer plano las soluciones motivadas por el beneficio corre el riesgo de exacerbar las mismas desigualdades que impulsan la crisis ecológica en primera instancia. Por esta razón, las soluciones del capitalismo verde —ya sea la fijación de precios del carbono, la ESG o los bancos de hábitat— son contraproducentes.

Entonces, ¿debemos aceptar las soluciones del capitalismo verde? La respuesta, para mí, es clara. Las soluciones basadas en el mercado no ofrecen un camino hacia la seguridad para la mayoría del mundo, y mucho menos un futuro definido por la abundancia y el bienestar colectivos. En el mejor de los casos, las soluciones del capitalismo verde son una distracción mortal de la tarea urgente de frenar, revertir y adaptarse realmente a la crisis climática y ecológica; en el peor, están socavando activamente nuestra capacidad de hacerlo.

[Fragmento adaptado de *The Value of a Whale: On the Illusions of Green Capitalism* by Adrienne Buller, Manchester University Press]

[Fuente: [Jacobin](#)]

16/8/2022

Fernando Luengo

¿Reducir el consumo de energía? Sí, y mucho más

Tanto la agenda de corto plazo como las políticas de mayor calado estructural, que necesariamente deben estar conectadas, tienen que inspirarse en el

criterio de justicia social, en la redistribución de la renta, la riqueza y los recursos disponibles.

* * *

Ahorrar en el consumo de energía. Este es el mensaje lanzado por los responsables comunitarios y recogido por el Gobierno español, que se compromete a una reducción en ese consumo del 7%, concretado en un plan de medidas urgentes cuyo objetivo es prepararse ante un panorama de restricciones en la oferta de gas procedente de Rusia y de escalada en los precios de este combustible. Pero ¿cuál es la naturaleza del problema que tanto el Estado español como el resto de países europeos tienen que enfrentar?

Los principales medios de comunicación y la mayor parte de los políticos y tertulianos nos han familiarizado con expresiones del tipo “la guerra de Putin o la inflación de Putin”, como si su simple mención aportara las claves para entender el actual periodo de turbulencias. Pero la realidad, como siempre, es más compleja que la proporcionada por los grandes y a menudo sesgados titulares.

Porque el gran desafío en materia de consumo energético no reside solo en la necesidad de prepararse ante un escenario —que ya estamos sufriendo, y que sobre todo se manifestará con especial intensidad en el próximo invierno— de posibles interrupciones o bloqueos en los suministros y aumentos en el precio del gas y el petróleo.

Esta es una de las consecuencias asociadas a la invasión de Ucrania por Rusia y al desencadenamiento de una guerra que amenaza con enquistarse o incluso agravarse. Una situación sombría que ha agravado la posición de los dirigentes europeos y de nuestro Gobierno de alinearse con la estrategia marcadamente belicista de la administración estadounidense y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una deriva que, entre otras cosas, se ha traducido en el compromiso de aumentar de manera sustancial el gasto militar, fortaleciendo de este modo un complejo industrial de marcado perfil oligopólico que se caracteriza precisamente por ser muy intensivo en el consumo de energía; el mismo que, al menos en teoría, se pretende contener.

Tensión e incertidumbre que las corporaciones que operan en el sector están aprovechando para sacar tajada aplicando precios extraordinarios a los productos energéticos y derivados, así como al suministro de electricidad, cosechando de esta manera ganancias extraordinarias. Entre enero y junio de 2022, Iberdrola ha obtenido un beneficio neto de 2.075 millones de euros (superando en un 36% los registrados en 2021); los de Endesa han sido de

916 millones (un 10% por encima); Repsol los duplicó y TotalEnergies superó en el semestre el beneficio de todo el 2021. Resultados extraordinarios que se han embolsado sus ejecutivos y accionistas, que se frotan las manos con la crisis y con la guerra.

Estamos, pues, ante un panorama donde posiblemente habrá que lidiar con situaciones de escasez y de precios elevados de productos energéticos esenciales, para los que, además, no hay sustitutos a corto plazo (en términos económicos, su demanda es inelástica, esto es, tiende a mantenerse en lo fundamental, aunque aumenten los precios). ¿Está, por lo tanto, justificado tomar medidas para contener el consumo de energía? Desde luego que sí. En mi opinión, es puro sentido común (sin entrar en los detalles del decreto preparado por el Gobierno, ni en el rifirrafe institucional al que sistemáticamente se entregan las derechas para erosionar al Gobierno).

Pero hoy más que nunca, y en este asunto muy especialmente, es imprescindible poner las luces largas, no es suficiente con activar las de posición. Las medidas que las instituciones comunitarias y el gobierno adopten deben situarse en un contexto mucho más amplio, que es imposible eludir, del que mucho se habla y poco o nada se hace: el de la insostenibilidad de nuestro patrón de consumo energético, sustentado en la quema de combustibles fósiles, que ya da evidentes muestras, que las da desde hace décadas, de agotamiento, de inviabilidad. No estamos hablando, pues, de la coyuntura, sino de la estructura. Desde esta perspectiva, la reducción en el consumo de energía es una cuestión verdaderamente crucial, un desafío que no admite demora, pues vivimos una situación de emergencia.

En realidad, nuestro estilo de vida ha descansado y descansa todavía hoy en la existencia de una oferta abundante y barata de combustibles, que alimentaba el motor del crecimiento económico, motor que permitía sostener en los denominados países desarrollados cierto consenso social en torno a las ventajas del mismo. Este motor y el coche que propulsaba ya no funcionan y el camino por el que circulaba ha dejado de ser transitable.

Los costes económicos, sociales y medioambientales de perseverar en esta hoja de ruta son ya enormes, insoportables. Algunos de los efectos más visibles de ese agotamiento son el rápido aumento de la temperatura global, muy por encima de los niveles preindustriales y de las todas las previsiones que, supuestamente, eran líneas rojas que no se podían franquear; la aparición, cada vez más frecuente, de episodios climáticos extremos y devastadores; la degradación y destrucción de ecosistemas necesarios para la vida, para la nuestra y la del planeta; la escasez de agua y de otros recursos asimismo imprescindibles para el funcionamiento del engranaje económico y social que están en el origen de la geopolítica del conflicto; el deshielo de los

polos y el continuo aumento de los niveles del mar... La lista es interminable y la conclusión obvia: urge adoptar medidas excepcionales que dibujen una nueva hoja de ruta, que ya no puede descansar en “más de todo”, en la lógica productivista; ni por cierto tampoco en el optimismo de que la tecnología aportará soluciones a todos estos problemas.

Por lo tanto, en efecto, es preciso lanzar el debate y tomar medidas encaminadas a moderar el consumo de energía, pero no sólo porque tengamos que protegernos por una coyuntura adversa (la propiciada por la guerra y todo lo que de ella se deriva), sino también porque estamos ante una encrucijada histórica, una crisis civilizatoria que exige un punto y aparte.

Esta situación pide mucho más que actuaciones provisionales impregnadas de coyuntura, que, ojo, también hay que adoptar. Exige de instituciones y gobiernos —especialmente de los que se reclaman progresistas— con coraje para trasladar a la ciudadanía un mensaje: la contención del consumo a la que estamos obligados constituye una pieza esencial de una política de transformación mucho más profunda de nuestra manera de producir y consumir, de nuestras pautas de movilidad y ocupación del espacio. ¿Dónde está ese debate público, dónde los objetivos, los recursos, los plazos y los actores que deben conformar la hoja de ruta?

Una cuestión muy importante en este asunto: tanto la agenda de corto plazo como las políticas de mayor calado estructural, que necesariamente deben estar conectadas, tienen que inspirarse en el criterio de justicia social, en la redistribución de la renta, la riqueza y los recursos disponibles. Porque resulta evidente que no todos tienen la misma responsabilidad en materia de consumo y despilfarro energético (lo mismo cabe decir en lo relativo a las emisiones de dióxido de carbono). Por esa razón, hay que llevar a cabo políticas ambiciosas y valientes que apunten, muy especialmente, a los principales consumidores de energía, tanto públicos como privadas: grandes empresas industriales, comerciales y agrarias, transporte por carretera y aeronáutico, industria militar...

Es en este contexto donde hay que aplicar y donde se justifican medidas como los gravámenes especiales a los grandes bancos y empresas energéticas. Pero en esta visión de gran calado que debería impregnar la respuesta del gobierno, se necesita mucho más que eso, mucho más que la aplicación de medidas excepcionales y provisionales, como las que pretende poner en marcha el gobierno de Pedro Sánchez. Para hacer realidad el principio de que paguen más quienes más tienen, para dotar de recursos a las administraciones públicas, que tienen que desempeñar un papel nuclear en todo este proceso transformador, para reducir la losa de la deuda y la servidumbre financiera asociada a la misma, para todo ello hay que abrir con

determinación la agenda de la fiscalidad progresiva, postergada una y otra vez con diferentes pretextos.

[Fuente: [El Salto](#)]

13/8/2022

Josefina L. Martínez

La guerra, la inflación y la hidra de la revolución

¿Ha comenzado un verano del descontento? Así lo anunciaban hace unas semanas los medios de prensa británicos. El profundo malestar con el gobierno de Boris Johnson —ese campeón del confinamiento duro que organizaba juergas en Downing Street y encubría a abusadores sexuales— se combinó con una inflación que alcanza las cifras más altas en cuatro décadas. El resultado resultó ser explosivo, provocó la descomposición del gobierno de Johnson y ya ha dado lugar a una gran huelga de los ferroviarios ingleses y del metro de Londres, la más importante en el transporte desde los días de Margaret Thatcher.

La metáfora alude al “invierno del descontento” de 1978-1979, cuando una ola de huelgas radicales sacudió las tierras de Shakespeare. Quien, dicho sea de paso, perfiló aquella frase en el primer acto de *Ricardo III*. Con una inflación al alza que alcanzó en mayo el 8,8% en Europa, podemos dejarnos llevar por sus palabras: ya regresan las nubes negras que se encapotan sobre nuestras casas, mientras la guerra cabalga sus corceles armados.

Las tendencias inflacionarias arrancaron en 2021, tras dos años de pandemia, con bloqueos en las cadenas de suministros y la crisis energética en el ojo del huracán. Pero todo se agravó desde febrero, después de la invasión de Putin a Ucrania y con las sanciones occidentales como gran acelerador. El resultado ya está siendo catastrófico para gran parte de la población mundial. Y como bien [apuntaba Rafael Poch en un artículo reciente](#), las sanciones “son mucho más dañinas que el bloqueo ruso de puertos ucranianos para el anunciado incremento del hambre en el mundo”. La revista financiera *The Economist* señalaba hace unos días que “la inflación está aplastando los niveles de vida, avivando la furia y fomentando la agitación”. El pronóstico es turbulento y el fantasma de las revueltas recorre varios continentes. Sri Lanka anticipa lo que pueden atravesar otros países en el norte de África o América Latina, donde las condiciones estructurales ya eran más que precarias y con altos niveles de pobreza.

Pero el conflicto social no solo se extiende por la periferia capitalista. El temor a una ola de luchas obreras acecha también a los Estados más poderosos. En Alemania, la poderosa IG Metall ha conseguido un aumento salarial del 6% después de una huelga. Y el pasado 23 de junio, más de 12.000 trabajadores paralizaron los cinco puertos más grandes del país, en la primera huelga conjunta en más de 40 años. Exigen un 14% de aumento salarial para no perder poder adquisitivo. En Francia, durante 2021 se desarrolló lo que la periodista Khedidja Zerouali llamó las “huelgas de los bajos salarios”, protagonizadas por sectores muy precarios. Trabajadoras y trabajadores que durante la pandemia se reconocieron como esenciales, pero que no recibieron ninguna mejora en la situación laboral después de haber garantizado los alimentos, la sanidad o el transporte. El nuevo año se abrió con importantes huelgas en aeropuertos, hospitales, educación y ferrocarriles. Todo indica que Macron se enfrentará muy pronto a un nuevo embate de la protesta social, algo que ha sido una constante del otro lado de los Pirineos.

Después de los ferroviarios, en Gran Bretaña han votado salir a la huelga trabajadores del correo, los de empresas de buses y aeropuertos. Los vuelos estarán congestionados este verano, porque se suman las huelgas de Ryanair, EasyJet y otras aerolíneas. Así lo han anunciado varios sindicatos españoles. Aquí también vienen luchando por aumentos salariales los trabajadores del metal, desde Cádiz a Cantabria y Bizkaia, aunque con resultados muy desiguales por región. “Bloquead los precios, no los salarios” fue el lema central de la movilización de miles de trabajadores en Bélgica el pasado 20 de junio, durante una jornada de huelga general. Una reivindicación que podría unificar a trabajadoras y trabajadores de todas las regiones y todos los países. En Italia, un mes antes, los sindicatos de base convocaron huelgas y movilizaciones contra la guerra de Ucrania y contra el envío de armamento por parte de su gobierno: “Bajad las armas, subid los salarios”.

“Tras cada huelga se oculta la hidra de la revolución”. La frase bien la podría haber dicho Abascal o quizás el ministro Marlaska antes de enviar una tanqueta contra los huelguistas de Cádiz. En realidad, la pronunció un ministro prusiano, Von Puttkammer, que tampoco encajaba muy bien aquello de las protestas obreras. Después se la reapropió Lenin para hablar con entusiasmo del gran movimiento huelguístico de 1905 en Rusia. Señalaba que las huelgas pueden ser contagiosas y que cada huelga representa una pequeña crisis de la sociedad capitalista. Cuando los trabajadores paralizan la producción o la circulación, ponen en cuestión la sagrada propiedad y entrenan su propio poder como clase. En momentos de crisis, esa resistencia se puede extender, transformando luchas parciales en una impugnación más general hacia un sistema que pretende descargar los costos de la guerra sobre la clase obrera, los migrantes y los pueblos más pobres. Por eso las huelgas generan tanto temor en los de arriba. Se esfuerzan en liquidarlas lo antes posible y buscan a

toda costa evitar que se extiendan y coordinen.

[Fuente: [Ctxt](#)]

10/7/2022

Rafael Poch de Feliu **Renovarse o morir**

Con su invasión de Ucrania, el Kremlin, la elite gobernante rusa, ha pospuesto y a la vez profundizado su crisis. Febrero de 2022 repite, a lo grande, la situación de marzo de 2014. Entonces el apoyo de los rusos a Putin estaba en horas bajas. La pérdida de Ucrania tras el cambio de régimen en Kiev, era una derrota inapelable ante Occidente que evidenciaba, entre otras cosas, la mala política de Moscú en ese país. La anexión de Crimea, una operación militarmente impecable, sin violencia y con el mayoritario apoyo de la población local, fue un éxito rotundo de consolación que compensó la derrota y recuperó el apoyo al Kremlin. Por ser un éxito, aquello fue también un desafío militar directo a un avance geopolítico occidental. Crimea fue un peligroso y ejemplarizante precedente de lectura universal: si Rusia podía responder militarmente con éxito al entrismo occidental, también otros podrán hacerlo en el futuro. Esa reflexión determinó el castigo militar occidental, que se volcó, como ahora sabemos, en el rearme de Ucrania para una revancha, inmediatamente iniciada desde Washington en 2014... [Lo que nos van explicando sobre la guerra.](#)

Pero, volviendo a Rusia, cinco años después de la anexión de Crimea, las cosas volvían a torcerse. El apoyo a Putin bajó por primera vez en 2021 por debajo del 30%. El intento de reforma neoliberal de las pensiones generó una protesta social inusitada. La invasión ha resuelto de nuevo ese problema en lo inmediato, pero crea otros mucho más graves a medio y largo plazo.

La tensión con Occidente y el efecto de las brutales sanciones de guerra, claramente enfocadas al cambio de régimen en Moscú, acaban definitivamente con todo aquello por lo que Putin fue apreciado por la mayoría de los rusos: los sacó de los desastres de los noventa, del continuo deterioro del nivel de vida de la mayoría. Se recuperó cierta estabilidad institucional y simbólica, y se restablecieron las funciones esenciales del Estado. Ese cúmulo de mejoras perdonaba con creces las injusticias del continuismo neoliberal y los excesos del capitalismo oligárquico, que quedó más sometido al Estado, y los fraudes de las elecciones sin alternativa. Ahora aquellos beneficios saltarán por los aires. Se exige a la población un patriótico sacrificio con

nuevas recesiones y caídas del nivel de vida, ante la “amenaza existencial” que el Kremlin dice que se cierne sobre Rusia. Puede decirse que el contrato social del putinismo se ha disuelto. Pero si algo dejan claros los estudios de sociología realizados en el país en los últimos años, es la prioridad del bienestar sobre la identidad de gran potencia. Ya no hay en Rusia aquella predisposición soviética al sacrificio popular en el altar de los supremos intereses del Estado. Por eso, o hay un cambio radical en lo socioeconómico y el Kremlin propone a la sociedad un nuevo contrato social, con mayor reparto, menos desigualdad y abuso económico, o bien la mera represión no podrá impedir una quiebra del régimen político.

Varios intelectuales orgánicos del Kremlin están llamando la atención sobre este aspecto. Dmitri Trenin escribía ya en marzo [Политика и обстоятельства. Способны ли мы сохранить страну и развивать её дальше — Россия в глобальной политике \(globalaffairs.ru\)](#) que “la reedición de la Federación de Rusia sobre bases políticamente más sostenibles, económicamente eficaces, socialmente más justas y moralmente más sanas, se está haciendo urgentemente necesaria”. El cambio de contrato social y la transformación del régimen es la condición esencial de su supervivencia ante los retos que se ciernen sobre el país, advertía. “Hay que entender que la derrota estratégica que Occidente nos está preparando, no conducirá a la paz y la posterior restauración de las relaciones. Muy probablemente, el teatro de la «guerra híbrida» simplemente se moverá desde Ucrania más al este, dentro de la propia Rusia, cuya existencia en su forma actual estará en cuestión”, decía Trenin.

El atentado que costó la vida a la joven periodista nacionalista Daria Dúguina en Moscú, así como los crónicos ataques contra regiones rusas y contra Crimea, de momento con artillería, misiles y drones suministrados por Occidente, y, por supuesto, con información y telemetría occidental, confirman por completo aquel pronóstico.

Ante esa perspectiva es necesario [“movilizar todos los recursos y ampliar al máximo las libertades económicas en el interior del país, consiguiendo al mismo tiempo el apoyo de los sectores más vulnerables de la población”](#), insistía Trenin en mayo.

“Pero estas solo son las primeras medidas urgentes —continuaba Trenin—. El país necesita cambios fundamentales: cortar los canales que alimentan la corrupción; reorientar las grandes empresas hacia los intereses nacionales; una nueva política de recursos humanos para mejorar significativamente la calidad de la administración pública a todos los niveles; solidaridad social; el retorno de los valores fundamentales, no monetarios, como base de la vida. Estos cambios, a su vez, son imposibles sin superar el capitalismo oligárquico

exportador de capital a paraísos fiscales, una amplia rotación de la élite gobernante, los aparatos estatales y administrativos y, como consecuencia, la renegociación del contrato social entre el gobierno y la sociedad sobre la base de la confianza mutua y la solidaridad”.

“El frente más importante de confrontación tiene lugar dentro de la sociedad rusa. Solo es posible hacer frente a un desafío externo si hay avances en la regeneración y la autodeterminación. Es necesario derrotar no solo el robo y la malversación, sino también el cinismo, el materialismo primitivo, la incredulidad; convertirse en ciudadanos en el pleno sentido de la palabra; decidir para qué vive una persona y para qué existe el país; dejar de mentir a los demás y a nosotros mismos. Las esperanzas de tal giro surgieron durante la «Primavera Rusa» de 2014, pero no se realizaron, lo que dio lugar a la decepción. Ahora hay una segunda oportunidad. Debemos aprender la lección de la historia: el Estado ruso es casi invencible desde el exterior, pero se derrumba cuando una masa significativa de rusos se decepciona con sus gobernantes y con el sistema social injusto y disfuncional”.

¿Será capaz el Kremlin de imprimir tal viraje al sistema ruso? ¿Puede llegar una transformación hacia una mayor holgura social, hacia una mayor libertad y menos injusticia a través de una guerra? Las dudas son enormes. ¿Es consciente Putin de la situación en la que se ha metido en la que la alternativa es renovarse o morir?

[Fuente: [Blog del autor](#)]

26/8/2022

Rafael Poch de Feliu

La nueva guerra de la OTAN y la gran secesión

El conflicto no se acabará con una “victoria” militar rusa en Ucrania. Cualquiera que sea el desenlace, la crisis va para largo y la fragilidad de todas las partes implicadas en la contienda añade incertidumbre

* * *

Que el conflicto de Ucrania vaya a ser punto de inflexión geopolítico forma parte del consenso general, pero ¿cómo y para quién? El primer dato que nos ofreció fue el aislamiento de Rusia. Cuando en la Asamblea General de la ONU se votó la resolución condenando a Rusia por la invasión, solo cinco países, incluida Rusia, votaron en contra, 35 se abstuvieron y 135 apoyaron la

reprobación. Pero convertir esa condena en acciones parece ser asunto bien diferente: ningún país sudamericano y africano y ningún asiático, con la excepción de Japón y Corea del Sur, se sumó a las sanciones occidentales contra Rusia. Ni siquiera países sobre los que Estados Unidos ejerce una gran influencia, como Israel, Colombia, México, Arabia Saudita o Pakistán. Que la guerra económica contra Rusia sea una cuestión estrictamente de la OTAN, a la que se suman Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón, denota también el aislamiento de lo que habitualmente se presentaba como la “comunidad internacional”.

Desde su nuevo “concepto estratégico” aprobado en la cumbre de junio en Madrid, la OTAN define a Rusia como “la mayor amenaza directa a la seguridad, paz y estabilidad en el área euroatlántica” (y a China como “amenaza a los intereses, la seguridad y los valores”), pero la llamada encuentra un eco discreto. El mismo mes, las cumbres de los BRIC en Pekín o el Foro Económico de San Petersburgo han demostrado una vitalidad considerable, tratando de vías comerciales, sistemas bancarios y de pagos alternativos independientes del control financiero occidental, alianzas económicas y suministro de energía. Las analogías y prevenciones suscitadas en todo el mundo no occidental por el robo de las reservas del Banco de Rusia en Estados Unidos (300.000 millones), y la utilización policial de los sistemas de pagos internacionales, fomentan una estampida del dólar y la creación de un Fondo Monetario Internacional para los BRIC.

Con la presente guerra aumentan significativamente los síntomas de una secesión del Gran Sur Estratégico con respecto al Occidente ampliado, representado por un G-7 cada vez menos capaz de dictar sus reglas al resto del mundo. Las condiciones para ese proceso se desprenden de dos aspectos fundamentales.

En primer lugar, del factor de la ascendente potencia china, cuya economía, capacidad crediticia e importancia comercial ya se ha hecho suficientemente grande como para presentar alternativas a muchas relaciones y suministros, incluida la alta tecnología, que antes eran monopolio occidental. Ese peso específico de China hace que su posición en el conflicto, al subrayar el respeto a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y al mismo tiempo identificando una seguridad contra Rusia y a expensas de Rusia en Europa como la raíz del problema, tenga capacidad de arrastre. Sufriendo el mismo tipo de cerco militar de Estados Unidos y el mismo riesgo de guerra junto a sus fronteras, y consciente de la importancia de su “alianza sin límites” establecida con Rusia en febrero, China ha rechazado enérgicamente la presión de Estados Unidos y de la Unión Europea para que se sumara a las sanciones. La presentadora de la televisión china Liu Xin resumió en abril esa petición así: “Nos dicen, ayúdame a luchar contra tu socio ruso para que luego

pueda concentrarme mejor contra ti”. Un mes después, el presidente, Xi Jinping, le dijo en una conversación telemática al canciller federal alemán, Olaf Scholz, que “la seguridad europea debe estar en manos de los europeos”. Un apremio del primer socio comercial de la Unión Europea para que ésta se emancipe de una vez.

El segundo aspecto tiene que ver con las imprevistas consecuencias contra los autores de las sanciones contra Rusia. La experiencia histórica de las sanciones y bloqueos occidentales contra países adversarios, en Cuba, Irán o Corea del Norte (la Unión Soviética siempre fue objeto de ellas) es que, aunque hacen mucho daño y los endurecen sobremanera, no consiguen doblegar a los gobiernos castigados. Con la Rusia actual la medicina es, además, contraproducente para quien la impone.

Rusia tiene relativamente pocas líneas de suministro extranjeras, una gran capacidad de autosuficiencia y una enorme cantidad de materias primas de las que es suministrador principal de las economías occidentales, por lo que éstas y particularmente las europeas se han dado un tiro en el pie. No se trata solo del gas y el petróleo, para los que Moscú está encontrando mercados alternativos a los occidentales, sino del níquel, del aluminio, la plata, el neón (utilizado para producir microchips), la madera, etc.

La suma de un gran polo económico, financiero y tecnológico chino, y el gran almacén ruso, vigilado por el mayor arsenal nuclear del mundo, crea las condiciones para la referida secesión. La actitud de India, que por lo menos en los inicios de la crisis se está mostrando abierta a la ventajosa cooperación con los dos (lo que le permite reexportar hidrocarburos rusos a la Unión Europea!), y poco receptiva a las invitaciones de hostilidad occidentales, configura un potente conglomerado geográfico terrestre entre la frontera de la OTAN y el indopacífico. Esa realidad puede convertir en algo poco practicable políticas de pasadas épocas como la “contención” practicada contra la URSS durante la Guerra Fría. En todo caso, la observación de este proceso es fundamental para el futuro a medio y largo plazo. Mientras tanto, la evolución de la campaña en el campo de batalla será determinante.

Conflicto clásico

La guerra de Ucrania nos ha devuelto a un conflicto militar clásico entre ejércitos con un potencial comparable. Dos grandes ejércitos, con clara superioridad numérica ucraniana y un intenso flujo de información y armas occidentales para compensar la superioridad artillera, aérea y misilística rusa, es algo que no tiene mucho que ver con las guerras llevadas a cabo por Occidente en Yugoslavia, Irak, Afganistán o Libia, donde Estados Unidos y sus aliados se dedicaron a suprimir los obsoletos sistemas de defensa aérea del

enemigo, desde una superioridad técnica y numérica abrumadora. Occidente ya no estaba familiarizado con algo así. Por parte rusa, el guion también es muy diferente al registrado en el conflicto con Georgia, de 2008, o al de la intervención en Siria a partir de 2015, estima el experto ruso Vasili Kashin. Pero siendo esta guerra un conflicto entre la OTAN y Rusia por país interpuesto, hay que preguntarse por la determinación y voluntad de cada bando.

“La guerra de Rusia y China contra la hegemonía occidental es equiparada por sus pueblos a una guerra existencial”, observa el exdiplomático británico Alastair Crooke, que augura una empresa difícil. “Para ellos no se trata solo de tomar menos duchas calientes, como para los europeos, sino que se trata de su propia supervivencia, y por lo tanto su umbral de dolor es mucho más alto que el de Occidente”. El régimen ruso, que se juega una quiebra si pierde la partida, pondrá “más voluntad política, asumirá más riesgos y sufrirá mayores consecuencias para lograr el resultado final, porque para nosotros Ucrania es periferia mientras que para ellos es central”, señala Brendan Dougherty, otro observador anglosajón. Este diagnóstico ha ido cambiando a lo largo de la guerra.

En los primeros meses, cuando fracasaba el escenario contemplado por el Kremlin de un desmoronamiento del ejército regular ucraniano con huida del gobierno ante la proximidad de las tropas aerotransportadas rusas (el llamamiento de Putin a los militares ucranianos, el primer día de la invasión, para que tomaran el poder y se entendieran directamente con él dio una pista de tal expectativa) se abría paso el pronóstico de una catástrofe rusa. La reacción militar de la OTAN, disciplinando lo poco que quedaba de aspiración autónoma en la Unión Europea, adoptando sanciones sin precedentes y proporcionando ayuda militar a Ucrania no hizo más que reforzarlo. Ahora, cuando la ofensiva rusa de artillería está batiendo a los ucranianos en el Dombás y avanza lentamente posiciones, mientras en Occidente se toma conciencia de la grave disrupción que sus propias sanciones ocasionan en el comercio mundial, creando problemas aparentemente irresolubles, los acentos cambian. Rusia puede ganar, se dice. Por supuesto que la situación está abierta a nuevos bandazos que invaliden por completo el actual, pero ¿qué significa una victoria militar de Rusia?

En el supuesto de que su ejército consiga imponerse en todo el sureste de Ucrania, la situación no será estable en las zonas ocupadas. Bien con presencia militar, bien con administraciones filorrusas, lo más probable es que, por pequeña que sea la resistencia activa al nuevo orden (resistencia que por descontado será apoyada por lo que quede del gobierno de Kiev y sus patrocinadores occidentales), el estado de cosas solo podrá ser represivo, con atentados “terroristas”, desaparecidos, tortura y represión. El conflicto no se

acabará con una “victoria” militar rusa en Ucrania. Sea cual sea el desenlace militar, la crisis va para largo y el hecho de la fragilidad de todas las partes implicadas en ella añade incertidumbre.

La fragilidad de Rusia es conocida, pero ¿qué pasa con la Unión Europea, desarbolada como consecuencia de sus propias sanciones? ¿Se mantendrá estable su carácter de subalterna de la OTAN cuando sus sociedades y economías nacionales paguen el precio de esa subordinación en forma de recesión?

La situación al otro lado del Atlántico puede ser incluso peor. En enero de 2021 hubo algo parecido a una intentona golpista en Washington. La brecha social entre la ciudadanía común y la élite, tantas veces evocada en el caso de Rusia, se está haciendo abismal en Estados Unidos. Allí, el sistema representativo está averiado, la república secuestrada por los *lobbies* y el complejo militar industrial, y el capitalismo financiero orientado hacia el beneficio cortoplacista y especulativo de una clase rentista que es incapaz de invertir en desarrollo social. En ese país, con el presidente desprestigiado, una inflación elevada y una previsión de deterioro de la capacidad adquisitiva, el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, o de alguien similar, y el escenario de graves conflictos internos parece bastante plausible. ¿En qué quedará en ese caso la “revigorizada alianza occidental”?

En cualquier caso, con todos los actores fragilizados, la tentación de resolver bélicamente la vieja máxima de Gramsci sobre la crisis como situación en la que “lo viejo se está muriendo y lo nuevo no puede nacer”, cobra aún mayor fuerza. Por eso, el gran peligro de la guerra de Ucrania sigue siendo una guerra aún mayor entre potencias nucleares.

[Fuente: [Ctxt](#)]

8/7/2022

Andrea Tornielli

Giraud sobre Ucrania: "Negociación, o será destrucción total"

Los medios de comunicación del Vaticano lanzan una serie de profundizaciones de las palabras del Papa Francisco sobre la guerra en Ucrania y las posibles soluciones para una negociación: los entrevistados expresan sus opiniones, que no pueden por tanto atribuirse a la Santa Sede. Conversación con el jesuita y economista francés Gaël Giraud.

* * *

“Hago un llamamiento a los jefes de las naciones y de las organizaciones internacionales para que reaccionen ante la tendencia a acentuar el conflicto y la contraposición. El mundo necesita paz. No una paz basada en el equilibrio de las armas, en el miedo mutuo”. La crisis ucraniana “todavía puede convertirse en un reto para los sabios estadistas, capaces de construir en el diálogo un mundo mejor para las nuevas generaciones”. Así es como el papa Francisco, a la hora del Ángelus del domingo 3 de julio, volvió a hablar de la paz en Ucrania, deseando que se pase “de las estrategias del poder político, económico y militar a un proyecto de paz global: no a un mundo dividido entre potencias en conflicto; sí a un mundo unido entre pueblos y civilizaciones que se respetan”.

La del obispo de Roma, en estos últimos meses de combates y de ausencia de iniciativas diplomáticas eficaces, ha sido una de las pocas voces que se han alzado a favor de la paz y de la negociación. Una negociación que parece imposible. Hablamos de ello con el jesuita francés Gaël Giraud, economista, director del Environmental Justice Program de la Universidad de Georgetown e investigador principal del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) de París.

Padre Giraud, ¿por qué es tan difícil llegar a una negociación?

Vemos la escalada militar y verbal de esta guerra, las matanzas que han tenido lugar, la destrucción de las ciudades ucranianas. Pero también vemos la existencia de *lobbies* beligerantes que no quieren el fin del conflicto, no quieren una negociación que lleve a los gobiernos ruso y ucraniano a la misma mesa para negociar un proyecto concreto, porque son *lobbies* interesados en el rearme y el cambio de régimen en Moscú, es decir, quieren el fin de Vladímir Putin. Pero, gracias a Dios, el número de personas que piden la paz, y creen en la necesidad absoluta de una solución negociada, está creciendo. En Estados Unidos, un académico como Jeffrey Sachs ha apoyado públicamente una tregua negociada.

¿Quién quiere esta guerra?

Digamos que, ante todo, la quiere Rusia, que ha agredido a Ucrania y comete crímenes de guerra. Pero ha sido preparada desde el 2014 por quienes quieren utilizar esta guerra para derrocar a Putin y poner a Rusia de rodillas, aun a costa de transformar a Ucrania en un nuevo Vietnam llevándola a la destrucción total. Precisamente para evitar este desenlace desastroso, que podría llevarnos a un nuevo conflicto mundial, es absolutamente necesario negociar, alcanzar una tregua y luego la paz...

¿Qué soluciones de negociación ve posibles?

La guerra se encuentra hoy en un punto de inflexión si es cierto que las tropas rusas han conquistado la ciudad de Lisichansk, un punto estratégico para una posible reconquista del norte por parte de Rusia. Estoy convencido de que la base para unas negociaciones serias sigue siendo los acuerdos de Minsk 2 del 2015, que jamás son respetados ni por Rusia ni por Ucrania. La solución —es mi opinión personal— es el reconocimiento de la independencia del Dombás, incluso a través de un referéndum popular que atestigüe la voluntad de sus habitantes. Lo mismo ocurre con Crimea, que fue parte de Rusia hasta 1954 y donde la población ya se ha expresado en un referéndum. Además, es necesario que Ucrania se comprometa a no solicitar el ingreso en la OTAN, ni ahora ni en el futuro.

Pero ¿negociar con estos objetivos no sancionaría de hecho la victoria del agresor ruso?

Comprendo perfectamente que lo que he dicho representa un problema para la unidad territorial de los ucranianos. Pero me pregunto: ¿cuál es la alternativa y qué precio tiene? La alternativa es la destrucción total de Ucrania, después de una guerra muy larga, con el país devastado y convertido en un campo de ruinas comparable a Chechenia en el año 2000. Las consecuencias para todos, pero sobre todo para los ucranianos, serían mucho más devastadoras de lo que ha sido hasta ahora esta absurda guerra en el corazón de Europa.

¿Cree en el hecho de que el actual gobierno ruso puede implosionar, como se lee a menudo en los análisis de los expertos?

Crear que derrocando a Putin Rusia se convertirá en un país más pro-occidental es una piadosa ilusión, en mi opinión. El número dos del Kremlin es —según los analistas más atentos— el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolái Patrushev. A él se le habría confiado el poder cuando Putin fue operado, y según muchos observadores es Patrushev quien podría ocupar el lugar de Putin en el futuro. Ciertamente, con él Rusia no será diferente, pero más bien hay un riesgo de inestabilidad, y la inestabilidad siempre conduce a nuevas guerras, no a la paz. A los que sueñan con un cambio de régimen, les aconsejaría cautela y una mirada atenta a la historia reciente: miren a Sadam Husein o a Gadafi. Sé que la comparación es fuerte y que las situaciones son muy diferentes porque Rusia no es Iraq o Libia, pero piensen en lo que les sucedió a esos países después del cambio forzado de régimen.

¿Usted está de acuerdo con el envío de armas pesadas y misiles a Ucrania bajo ataque?

Si puedo expresarme con toda sinceridad, permítanme decir que esta actitud me parece un tanto hipócrita, especialmente por parte de Europa. Por un lado, se envían armas para ayudar al ejército ucraniano a luchar contra el ruso y, por otro, se sigue comprando gas y petróleo ruso pagándolo en rublos y así se financia la guerra que libra el Kremlin. Por el momento, Alemania no tiene intención de renunciar al gas ruso, ni siquiera a largo plazo. Si la transición ecológica, que habría sido una gran oportunidad para las economías de los países, se hubiera aplicado en serio, no estaríamos en este dilema.

Pero, efectivamente, el gas ruso es necesario, y lo necesitan especialmente algunos países europeos...

Sí, y todavía no nos damos cuenta de las consecuencias de esta guerra en un futuro próximo. Ucrania es un país que puede producir el trigo necesario para alimentar a seiscientos millones de personas, posee importantísimos yacimientos de minerales y formaba parte de la nueva Ruta de la Seda, uno de los mayores planes de infraestructuras e inversiones para conectar China con otros sesenta y siete países.

Ya vemos cómo la guerra está teniendo consecuencias por la falta de trigo que necesitan los países del norte de África. Hay muchos intereses en juego. La perseverancia de la guerra significará una tragedia alimentaria para algunas partes de África y la continuación de la inflación mundial, impulsada principalmente por la falta de petróleo ruso. Y esta inflación puede, a su vez, provocar una nueva crisis financiera debido a la subida de los tipos de interés de los bancos centrales. Mientras tanto, las sanciones contra Rusia están teniendo un efecto mixto. El caos de los años noventa alimentó el odio antioccidental de algunos rusos y llevó a Putin al poder. Un mayor caos ruso no ayudará ni a la paz ni a la democracia rusa. ¿Verdaderamente queremos que los ucranianos derramen su sangre por esto?

Hablamos de Europa: ¿qué debería hacer?

Me parece que hay que reconocer la falta de iniciativas diplomáticas fuertes y compartidas por parte de Europa, que tendría todo el interés en lograr la paz lo antes posible. Al menos Alemania, Francia e Italia deberían hablar con una sola voz y proponer un Plan Marshall para la reconstrucción sostenible de Ucrania, según la transición ecológica. Una paz negociada, asegurando a los rusos las futuras fronteras de la OTAN, que desde la caída de la Unión Soviética ya no es una alianza defensiva.

El Papa, citando a un jefe de Estado que había recibido en audiencia, habló de los “ladridos de la OTAN” en las fronteras rusas, palabras que causaron polémicas.

Una agresión como la que está en curso jamás puede justificarse. Pero si no nos detenemos en los últimos meses, y consideramos los contextos mirando la historia de los últimos treinta años, esto ayuda a comprender mejor la situación y, sobre todo, a no repetir errores y subestimaciones...

La agresión rusa contra Ucrania, una verdadera guerra, aunque se la llama “operación militar especial”, no tiene justificación y el Papa la ha condenado repetidamente. Sin embargo, las palabras que ha citado nos ayudan a entender el contexto y nos recuerdan lo que ocurrió tras la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética. Está documentado que a principios de la década de 1990 los países occidentales aseguraron a Moscú que la Alianza Atlántica no se ampliaría para incluir a los antiguos estados satélites del Pacto de Varsovia. El incumplimiento de estos compromisos verbales ofreció a Putin, hasta entonces considerado un aliado de Occidente, la oportunidad de anunciar públicamente —durante la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero de 2007— su rechazo al mundo unipolar bajo el predominio de Estados Unidos.

El Papa Francisco definió la carrera armamentística como una locura. ¿Qué piensa usted al respecto?

Tiene razón, es una auténtica locura, porque significa dar grandes pasos hacia la Tercera Guerra Mundial. Incluso la continuación de esta guerra significa dirigirse hacia el Apocalipsis, con el aumento del hambre en los países africanos y el riesgo de una escalada militar con armas nucleares. El Papa, en una entrevista a la agencia de noticias Télam del viernes 1 de julio, también señaló que las Naciones Unidas no habían sido escuchadas durante este conflicto.

E incluso en este caso, ¿cómo se los puede culpar? Lamentablemente, las Naciones Unidas son hijas de los desequilibrios de la Segunda Guerra Mundial. No hicieron nada por la pandemia, no hacen nada por esta guerra. Tenemos que repensar, juntos, un sistema de relaciones internacionales más justo y multilateral, en el que no sean sólo los poderosos quienes tomen las decisiones. Como dijo durante el último Ángelus: debemos pasar de las estrategias del poder político, económico y militar a un proyecto de paz global. En mi opinión, esto requiere la creación de instituciones internacionales que se ocupen de nuestros bienes comunes globales: salud, clima, biodiversidad, paz.

[Fuente: [vaticannews](https://www.vaticannews.va)]

Iñaki Tofiño

Memoria histórica y colonialismo

La España contemporánea no se entiende sin las colonias africanas, pero no parece que el legislador esté dispuesto a visitar la historia colonial del régimen franquista

* * *

Hay un edificio en Lisboa que suele pasar desapercibido a los turistas que, tras visitar la catedral, enfilan la rua Augusto Rosa, a pie o en tranvía, camino del mirador de Santa Lucía o del castillo de San Jorge. Subiendo, a mano izquierda, se encuentra un aljibe de la época musulmana (en su doble sentido de cisterna y cárcel subterránea), la Cadeia do Aljube, que siempre fue centro penitenciario, recibió presos del foro eclesiástico hasta 1820, mujeres acusadas de delitos comunes hasta finales de la década de 1920 y presos políticos del Estado Novo a partir de 1928 hasta su cierre en 1965. Desde el 25 de abril de 2015 es la sede del [Museu do Aljube - Resistência e Liberdade](#), dedicado a la represión política y la lucha contra la dictadura de António Salazar. Los cuatro pisos del museo recuerdan a los hombres y mujeres que pasaron por allí detenidos por el régimen salazarista, camino de otras cárceles metropolitanas o de colonias penales como la del Tarrafal, en las islas de Cabo Verde, obligados a permanecer de pie sin moverse o a mantenerse despiertos durante días, recludos en celdas minúsculas.

La memoria de la lucha contra el Estado Novo se mezcla con la memoria anticolonial y el museo dedica una de sus plantas a la lucha por las independencias africanas. Efectivamente, no se puede entender la Revolución del 25 de abril de 1974 sin el empecinamiento del Estado Novo portugués en mantener su imperio colonial, hecho que generó la lucha de los pueblos colonizados por su independencia y el malestar de una parte del pueblo portugués y de sus fuerzas armadas, hartos de la sangría que suponía dedicar gran parte del presupuesto del país a mantener las guerras coloniales y enviar a la población masculina joven a defender en las colonias la portuguesidad de unos territorios que muchos ya no consideraban como propios. Así, el museo conmemora la resistencia de africanos y portugueses contra el delirio colonial del Estado Novo.

Un lugar de memoria parecido podría ser la madrileña Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, que hoy alberga la presidencia de la Comunidad de Madrid. Durante el franquismo fue la sede de la Dirección General de

Seguridad y en sus sótanos subterráneos se detenía y torturaba a miembros de la oposición al régimen, aunque nunca dejó de mostrar una cara aparentemente amable cada 31 de diciembre al marcar su reloj las campanadas de fin de año. En Barcelona, otro edificio, la comisaría de la Policía Nacional de la Vía Laietana, hoy sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, albergó la Brigada Político-Social, la policía política secreta encargada de perseguir y reprimir a todos los movimientos de la oposición al franquismo. En sus sótanos, donde campaban a sus anchas los funestos comisarios Antonio y Vicente Creix, también fueron encarcelados y torturados opositores al régimen. Estos lugares de memoria mantienen hoy en día su cometido oficial y no parece que vayan a resignificarse y museizarse en un futuro próximo. De hecho, el panel informativo instalado junto a la comisaría en Barcelona, que informa del oscuro pasado del edificio, a menudo aparece vandalizado, cubierto de pintura.

No es esta la única diferencia entre la República de Portugal y el Reino de España en términos de memoria histórica. Más allá de la ruptura que supuso la Revolución de los claveles, nada que ver con la continuidad de una monarquía impuesta por la franquista Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, es evidente que no se puede entender el Portugal contemporáneo sin tener en cuenta el papel de las colonias en la vida metropolitana. Sin embargo, ¿se puede entender la España contemporánea sin considerar a las colonias africanas españolas? Me parece que no. No se puede comprender el éxito del golpe de estado de 1936 sin entender la mentalidad africanista y colonial de los militares que lo protagonizaron y sin tener en cuenta el apoyo logístico y de tropas que recibieron los golpistas desde la Guinea española y desde Marruecos. La guerra de 1936-1939, en la que basaba su legitimidad el régimen franquista, fue, entre otras cosas, una guerra colonial, en la que los sublevados aplicaron a los defensores de la II República las tácticas de sometimiento y aniquilación que habían aprendido en su lucha contra la población africana. Más tarde, se podría considerar el franquismo como un régimen colonial, en el que una parte de la población se vio privada de sus derechos fundamentales y vivía al arbitrio de los colonizadores, los miembros del régimen. Si ese era el caso de la población metropolitana, la población colonial vivió sometida a una doble opresión, la del colonialismo *stricto sensu* y la de la dictadura franquista.

Por eso resulta tan ominoso el silencio de la recién aprobada Ley de Memoria Democrática sobre la cuestión colonial. ¿Acaso no existieron en Marruecos campos de concentración como el de Ben Karrich, a donde fueron llevados los caídos rifeños que se oponían al reclutamiento de sus jóvenes para luchar en las filas franquistas a partir de 1936? ¿Acaso no fueron víctimas del franquismo los nacionalistas guineanos que lucharon contra la dominación española y acabaron exiliados o muertos? ¿Acaso no sufrieron la dictadura

franquista y no sufren sus consecuencias los habitantes del Sáhara Occidental, una región que fue provincia española hasta 1976? No se puede comprender el éxito del golpe de estado de 1936 sin entender la mentalidad africanista y colonial de los militares que lo protagonizaron

Si en España resulta casi imposible llegar a consensos sobre el pasado reciente, no parece que el legislador esté dispuesto a visitar el pasado colonial y a ofrecer a las víctimas del colonialismo español reciente la verdad, justicia y reparación que muchas demandamos. Sin embargo, no por eso hay que dejar de exigirlos.

[Fuente: [Ctxt](#). Iñaki Tofiño es doctor en literatura comparada y autor del libro *Guinea, el delirio colonial de España* (Bellaterra, 2022)]

18/7/2022

Gustavo Duch

Comemos todas o el gobernador al río

De los catorce barcos que han partido desde los puertos del mar Negro con grano ucraniano, ninguno tiene un país africano como lugar de destino. Solo uno transporta trigo: se han priorizado productos que sirven como pienso para la ganadería industrial.

"La alimentación no es una mercancía" fue uno de los primeros lemas que, bordado en gorras o serigrafiado en camisetas y banderas, enarbolaron las gentes de La Vía Campesina por todo el mundo. Argumentaban, con razón, que un derecho humano vital no podía dejarse en manos del libre mercado. Como la salud o la educación, la alimentación debería estar garantizada universalmente, a la vez que se satisface el quehacer de quienes producen los alimentos, campesinas y campesinos. Pero no es así, y estos días estamos apreciando uno más, y muy dramático, de los muchos ejemplos que lo ratifican.

Como se ha venido repitiendo, la especialización en la agricultura de cereales de las regiones afectadas por la guerra de Ucrania es una (la más importante es [la especulación](#)) de las razones de la subida del precio de los alimentos que está provocando una crisis alimentaria muy severa. Por eso se ha seguido con mucho interés las —dicen— complicadas negociaciones para reabrir, el pasado 1 de agosto, el comercio marítimo de granos desde los puertos del mar Negro. Todos los dirigentes políticos se han felicitado porque así se "garantiza la seguridad alimentaria", especialmente para las zonas más

castigadas, como buena parte de África.

Naciones Unidas ha puesto en marcha una [página web](#) para conocer los movimientos de los barcos del mar Negro y lo que vemos le da la razón a La Vía Campesina: los granos de Ucrania, como una mercancía más, se sienten atraídos por una fuerza centrípeta que los dirige hacia los países ricos, allí donde se acumula el poder del capital. De los catorce barcos que hasta ahora han partido, ninguno tiene un país africano como lugar de llegada. Los destinos son Turquía, Italia, Irlanda, Inglaterra, China y Corea del Sur. Solo uno partió hacia otra de las zonas afectadas por la inflación alimentaria, Líbano, pero según [The New York Times](#) este cargamento está retenido y buscando comprador. No aparece en el listado, pero la información de este periódico explica que el Programa Mundial de Alimentos sí ha fletado un barco para lugares como Yemen o Somalia.

Llama también la atención que de los catorce barcos en tránsito, solo uno lleva trigo.

Nueve van cargados de maíz, tres con girasol y uno con soja. Es decir, la fuerza centrípeta del dinero da prioridad a la comercialización de productos que, mayoritariamente, van a ser convertidos en pienso para engordar la ganadería industrial. Tanto que estos meses hemos hablado del trigo de Ucrania, de momento, para muchas personas ni hoy ni mañana habrá pan.

Es tiempo de recordar los episodios que se repitieron en Castilla, en el siglo XIX, cuando ante la especulación con los alimentos, la población, sobre todo las mujeres, como canta [Guille Jové](#), decidieron que “o comemos todas, o el gobernador al río”.

[Fuente: [Ctxt](#)]

17/8/2022

Agustín Moreno **Ayuso y el sheriff de Nottingham**

1. Una beca es una beca y un cheque es un cheque. Los ultraliberales utilizan una neolengua que intenta confundir los conceptos para que no se sepa de qué se está hablando. Un ejemplo, cuando la ultraderecha habla de “dictadura progre”, se está refiriendo a la democracia y al respeto a las minorías. Es la guerra cultural para avanzar en la guerra económica y retroceder en valores.

La ultraderecha empezó hablando de gratuidad de la enseñanza y tuvimos que denunciar [aquí](#) que en realidad era un robo a la educación pública. Ahora, hablan de “becas” para disfrazar lo que son cheques escolares. El sentido de las becas siempre ha sido el de subvencionar estudios o investigaciones a alumnos sin recursos propios.

2. Los datos son escandalosos. En un mes, la consejería de Educación ha publicado cuatro órdenes para la concesión de cheques escolares con las siguientes cuantías: bachillerato (43,4 millones), educación infantil de 0 a 3 años (50,6 M), formación profesional de grado superior (30,5 M) y FP de grado medio (2,4 M). Totalizan 127,1 millones de euros, un 96% de incremento en un solo año. En el caso de los cheques de bachillerato, el incremento de la partida es de un 383%.

Si tenemos en cuenta los umbrales de renta per cápita que se fijan para acceder a estos cheques, la obscenidad es total. Al pasar, por ejemplo, en bachillerato de 10.000 euros per cápita a 35.913. Regalar cheques escolares, a una pareja con dos hijos en bachillerato y una renta de 143.625 euros anuales, es un hachazo a la equidad y a la justicia social.

Ayuso demostró su ignorancia malintencionada cuando explicó este tema. En su desvergüenza, ni Ossorio ve pobres ni Ayuso ve ricos en aquellos que resultan agraciados con su cheque escolar regalo. Para ella, rentas de más de 100.000 son rentas medias y las personas en las colas del hambre son subvencionados. Solo por recordar, el presidente del Gobierno tiene un salario de 84.845 euros. Y si nos vamos a la estadística, ni llegan al 5% los madrileños que tienen rentas por encima de los 100.000 euros anuales.

3. Los cheques escolares son pura privatización. En Madrid la derecha viene aplicando un proceso de [desmantelamiento de la educación pública](#) a través de la potenciación de la red concertada y privada y los recortes en la pública. Los datos son muy claros: solo están escolarizados en los centros públicos el 39% del alumnado de Madrid capital, el 53% en la comunidad de Madrid, frente al 67% de media en España y entre el 81,7% en Europa.

Desde mi experiencia de profesor de instituto público, todos los años había un aumento de matrícula de alumnado en primero de bachillerato proveniente de los colegios concertados. Venían por dos razones: por la calidad de los IES públicos y los excelentes resultados en la selectividad, y porque al no ser ya enseñanza obligatoria la familia tenía que pagar mucho más que las ilegales cuotas que les cobraban. La derecha quiere frenar ese flujo de alumnos hacia la pública. Y por ello este diluvio de cheques escolares llegará a 62.238 alumnos de centros exclusivamente privados.

La aplicación de esta práctica de cheques escolares deteriora el sistema público, aumenta la segregación y la desigualdad. Es el caso de Suecia, donde los “vales de libre elección” han producido una fuerte caída en los resultados y la calidad educativa hasta el punto de que el responsable de educación de la OCDE y de PISA, Andreas Schleicher, ha llegado a afirmar **“que el sistema sueco parece haber perdido el alma”**.

4. No son becas, es una gigantesca transferencia de recursos de las rentas modestas a las altas. También a las empresas del negocio educativo, que acabarán subiendo los precios. Hablamos de que se subvenciona un 40% del total del alumnado de bachillerato de la comunidad de Madrid; el 75% de la educación infantil privada de 0 a 3 años; y un 50% de los ciclos de FP de grado superior privados. Además, la gestión privada de esos cheques nos cuesta 800.000 euros, al no gestionarlos la administración pública.

Los 127 millones de euros de gasto en cheques se detraen de una educación pública infradotada, que tiene una inversión del 2% del PIB frente al 4,2% de media en España. De ahí su déficit estructural de plantilla, ratios altas, recortes en atención a la diversidad, resistencia a la construcción de nuevos centros públicos y a la creación de plazas en formación profesional. Es una educación pública abandonada por el Gobierno Ayuso y que mantiene los niveles de calidad solo por la excelencia de su profesorado y por su compromiso.

Madrid redistribuye poco, tanto por los ingresos como por el gasto. Con los cheques escolares sucede lo mismo que con los regalos fiscales a las rentas altas, la privatización de servicios públicos o la mayor inversión en sanidad y educación en las zonas ricas. Este es el fondo de esta política: trasvasar recursos públicos de los de abajo a los de arriba.

Es una política deliberada. Se conoce como efecto Robin Hood aquel que busca quitar a los más poderosos y repartirlo entre los más desfavorecidos. Ayuso hace exactamente lo contrario, tanto con la regresividad fiscal como con los cheques escolares. Por ello, su política es la del sheriff de Nottingham: robar dinero a los pobres para dárselo a los ricos, algo que conduce a agrandar la desigualdad y la injusticia social.

5. La lucha por la hegemonía política es la otra cara de esta estrategia. Cuando una diputada de la ultraderecha dijo desde la tribuna de la Asamblea de Madrid que “el mejor pin parental es el cheque escolar”, lo dejó muy claro. Saben muy bien qué encierra esta privatización de la enseñanza. La única derecha existente en Madrid, que es la ultra, sabe que las elecciones y el poder político se ganan asegurando la participación de las clases para las que trabajan y aumentando la desafección política y la abstención de las clases

populares. Por ello, la desigualdad social forma también parte de una operación de ingeniería electoral porque induce a que votantes potenciales de la izquierda se queden en su casa lamentándose.

La jugada parece perfecta: cheques regalo para su clientela electoral, beneficios para las empresas que solo ven en la educación un buen negocio, y una ciudadanía desmovilizada que no responde a estas políticas injustas. Este panorama solo puede empezar a cambiar con tres acciones aparentemente sencillas: tener claro lo que está en juego; no bajar los brazos ante las agresiones al bien común; y, por supuesto, que la izquierda espabile y le eche inteligencia y unidad, que es lo que necesitamos en estos momentos.

[Fuente: eldiario.es]

6/7/2022

Gabriel Gatti

Desaparecidos

Cartografías del abandono

Turner, Madrid, 2022, 236 pags.

El libro *Desaparecidos. Cartografías del abandono*, de Gabriel Gatti, ha sido catalogado de distintas maneras. Existen coincidencias en situarlo entre el ensayo y la crónica, pero también, como se indica en la contraportada, esta obra toma prestados recursos de la investigación etnográfica, la crítica filosófica y el ensayo autobiográfico. Siguiendo con la línea de vincularlo con algún género literario, diría que se trata de un *cuento sociológico* en el que el autor, a través de la categoría “desaparecido”, cuenta lugares de abandono habitados por vidas para las que no tenemos nombre.

El cuento parte del *planteamiento* –la hipótesis– de que la desaparición es un nombre posible para calificar vidas quebradas, que no tienen relato, ni registros, ni tan siquiera importan. En palabras del autor, “vidas sin cuento, ni cuentas, vidas que no se tienen ya en cuenta” (p. 16). A partir de ahí, Gatti narra la historia y la propagación de una categoría –desaparecido– que lo llevará a recorrer lugares de abandono sistémico, vacíos de ciudadanía y de ciudadanos, donde el proyecto civilizatorio moderno revela sus lados más oscuros. Lugares en los que la vida no es vida, sino otra cosa para lo que “desaparición” resulta una categoría plausible para pensarla, para reflexionar sobre formas de existencia que ya no caben en los ordenados y lineales mapas de la modernidad, tampoco en su modelo social ni de ciencia.

Este cuento, cabe mencionar, tiene un antecedente, *El detenido-desaparecido. Narrativas posibles para una catástrofe de la identidad*. Un libro publicado en 2008 (Trilce), producto de una investigación realizada en Uruguay y en Argentina y en la que el autor, desde sus propios zapatos, como sociólogo y como familiar de desaparecidos, analiza los sinsentidos que constituye la desaparición forzada y los quiebres que la figura del detenido desaparecido supone para el lenguaje y la identidad. Y cabe evocar ese antecedente porque en aquel libro Gatti iniciaba un camino en su trayectoria científica con dos ejes de gran calado teórico y metodológico que en este constituyen la urdimbre de la obra. El primero, un interés por la figura del desaparecido y los mundos que la desaparición genera a su alrededor. El segundo, una forma de hacer sociología que en este libro adquiere especial brillo y consolidación. En aquel libro la llamó sociología “desde el estómago”, en este “fragmentaria”, que sin ser lo mismo nos hablan de una posición epistemológica situada y crítica con la objetividad positivista que busca sin descanso otras formas de acercarse a

la realidad y de narrarla.

Desde entonces, desde aquella investigación y con esta sociología, Gatti se ha dedicado a estudiar la desaparición y su producto, el desaparecido. A observar sus movimientos y a analizar sus contextos, que recoge ahora en esta obra en la que nos cuenta los viajes de la categoría “desaparecido”, a la que ha seguido muy de cerca por Uruguay, Colombia, Brasil, Suiza, República Dominicana, México, el norte de África y España.

La historia comienza con el trazo de una cartografía de la desaparición que construye, con la ayuda de su pequeña hija Ainara, en tres momentos y que teje en un diálogo reflexivo con su propio proceso de investigación del desaparecido. El primero remite al origen, allá por los años setenta, a la Argentina de la dictadura militar. Es el lugar de la cuna y el “estallido” del nombre desaparecido, encarnado en un sujeto con agencia política, enemigo de la dictadura, detenido y desaparecido por el Estado. Este nombre, con ese uso, se fue expandiendo por la región durante las décadas de los años ochenta y noventa. De Argentina viajó por países cercanos -Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil- hacia el norte -pasando por Colombia, Guatemala y México- hasta protagonizar un segundo momento, el de la “consolidación”. Este momento se materializa en Ginebra, en 2006, cuando la categoría se incluye en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y adquiere un triunfante estatus jurídico en el derecho internacional. Pero ahí no se acaba el cuento. Este no tiene un final tan feliz ni un final cerrado, ni tan siquiera tiene un final porque la categoría siguió viajando hasta desbordarse, hasta globalizarse. Es el tercer momento en la construcción de esa cartografía en el que este nombre siguió -sigue- viajando, sin mapa ni brújula, atravesando países, regiones y continentes. Aterrizando en grandes ciudades, como São Paulo o Ciudad de México, o colándose en rincones menos urbanos entre la exuberante vegetación tabasqueña o entre cañaverales dominicanos. En espacios sólidos y áridos como Tijuana, y líquidos y escurridizos como el mar Mediterráneo. En todos ellos hay desaparecidos, en todos ellos hay lugares de desaparición y abandono.

En el transcurso de estos viajes, nos narra Gatti, la categoría “desaparecido” se desprendió de su nombre “detenido” y la desaparición de su apellido “forzada” para nombrar otras cosas. Muchas cosas. Cosas que recuerdan al viejo desaparecido -los feminicidios en Ciudad Juárez o los estudiantes de Ayotzinapa en México- y otras que en nada se asemejan y revelan otras modalidades de desaparición -muertos civiles, bebés robados, migrantes ahogados, cadáveres no identificados-. Y ahí se llega al *nudo* del cuento, al verdadero meollo de la trama. “Desaparecido” no nombra solo a muertos, también a vivos. Nombra vidas desprotegidas, sin derechos ni ciudadanía.

Seres que están, pero no vemos, que son algo sin alguien, desechos de la trituradora civilizatoria de la modernidad, invisibles al registro sensible de la sociedad y de la sociología.

Pero como todo cuento, tiene un *desenlace* en donde desde la mismísima *capital* de la desaparición -México- Gatti corrobora su hipótesis “de que la desaparición ya no refiere hoy a lo que le pasa a las vidas y a los cuerpos de los enemigos políticos sino a otros que son tan otros, tanto, que están totalmente fuera de nuestra esfera de aparición, que no existen para nuestros registros de lo común, lo compartido, de la vida” (p. 190). Y no es casualidad que este libro acabe en la ciudad de Tijuana, ya que el paso de la categoría por México es la traca final del éxito del nombre “desaparecido”, no porque sea el final de su recorrido sino por la espectacularidad de su expansión. En cantidad y en variedad, porque en México, señala el autor, hay desaparecidos en todas sus modalidades y hay tantos que ya ni se cuentan.

Tal y como nos lo presenta Gatti, es impresionante la potencia y la potencialidad del nombre “desaparecido”, también sus escenarios. Pero ¿cómo representar lo que nombra? ¿Cómo contar lo indecible con los conceptos e instrumentos heredados de la sociología? ¿Cómo hablar de estas vidas para las que las viejas categorías como pobre o marginal ya no son suficiente?, se interroga el autor. La respuesta es el mismo libro, en donde pone en práctica una propuesta sociológica creativa, adaptada a los nuevos tiempos. En la que el sociólogo debe, nos dice, “forzarse, forzar sus lenguajes; aunque yerre: mezclar estrategias, jugar, inventar formas de contar, hacerse un poco cronista [...] Y debe ese sociólogo mostrarse más, situarse. Ya pasó la era de las torres de observación asépticas y distanciadas, de la ciencia de bata blanca. Confundimos durante mucho tiempo eso y la neutralidad con la objetividad” (p. 24). En este trabajo Gatti deja además al descubierto las costuras del proceso de investigación científica, que pasa desde las lecturas y colaboraciones que lo nutren hasta el uso de una enorme e imaginativa caja de herramientas de las que no desdeña ninguna, prestando atención a una noticia de prensa o a un WhatsApp; a una nota en una servilleta o a una conversación; a un olor o a un rumor; a un paseo o a una silueta.

Los humanos de las sociedades contemporáneas requieren de nuevas miradas y este libro constituye un esfuerzo por comprender esos cambios y por contar lo que queda fuera de nuestro lenguaje. Con este nombre -desaparecido- y con esta propuesta sociológica -la del cuento- Gatti nos acerca a esos mundos difíciles de contar y nos invita a ir un poco más allá de los cánones, de la herencia y de las limitaciones de la disciplina. A flexibilizar el lenguaje y llevarlo allá a donde no hay ni nombres.

Desaparecidos. Cartografías del abandono se presentará en Barcelona (Casa América, 27 de septiembre, 19h), Bilbao (Librería Cámara, 29 de septiembre, 19h) y Valencia (Librería Ramon Llull, 26 de octubre, 19h). También están programadas presentaciones en Montevideo (UDELAR, edificio central, 14 de septiembre, 18h), Stanford (Humanities Center, 22 de noviembre) y en Ciudad de México.

[Mariana Norandi es periodista, doctora en Sociología e investigadora posdoctoral de la Universidad del País Vasco]

Mariana Norandi
30/8/2022

Verónica O'Keane

El bazar de la memoria

Cómo construimos los recuerdos y cómo los recuerdos nos construyen

Siruela, Madrid, 2021, 336 pags.

El bazar de la memoria reúne un conjunto de elementos relevantes para la comprensión de nuestra especie elaborados desde la amplia experiencia teórico-práctica de la autora en el campo de la psiquiatría y la neurociencia. Los avances recientes en estos campos y su aplicabilidad a la comprensión de cómo funcionan nuestras cabezas son descritos amenamente —con el apoyo de la creación artística— y con una claridad digna de encomio, sobre todo desde el punto de vista del lector poco familiarizado con este tipo de literatura.

En síntesis, el estudio aborda la naturaleza profunda de lo que llamamos *experiencia*: cómo los datos que proceden de nuestra percepción inmediata son interconectados a través de la memoria, cobrando sentido, y cómo ésta opera a su vez como sustrato de nuestra capacidad para producir ideas. En esta segunda dirección, la memoria nos es revelada como algo muy distinto a la imagen tópica de “un almacén de recuerdos disponibles a la evocación”.

Desde el punto de vista del investigador social, la principal enseñanza —de las muchas extraíbles— de este fascinante ensayo sobre los procesos que intervienen en la memoria tiene que ver con la ambigüedad de la misma. Ni la memoria individual ni la cultural o “colectiva” (como la acuñó primitivamente Maurice Halbwachs en *Les cadres sociaux de la mémoire*, 1925) son estáticas, sino que se ven sometidas a una continua reconstrucción desde el presente. Este prisma permite por un lado desestigmatizar las llamadas “enfermedades mentales” (cuya casuística, a partir del bagaje práctico de la autora, sirve de hilo conductor del libro) y, por otro, comprender mejor cómo las creencias del presente (sometibles a manipulación desde el exterior) influyen en la comprensión retrospectiva del pasado.

En este punto, resulta admirable cómo la psiquiatra y neurocientífica irlandesa nos acerca a la comprensión de la importancia de la “memoria representativa” o reflexiva, que nos permite tanto desarrollar la autoconsciencia (lo que se expresa por ejemplo en la sensación de soledad, o en la consciencia emocional) como apreciar la consciencia de los demás (que permite percibirnos en cambio como seres indisolublemente unidos a los demás, y por tanto afrontar moralmente los problemas *de especie*).

Es inevitable, siguiendo las revelaciones de O’Keane, pensar en cuánto ha influido sobre la atrofia de la capacidad empática hacia el dolor ajeno (y sobre la falta de autoconsciencia acerca de la responsabilidad propia en su causación) la progresiva reducción de la experiencia directa con el entorno natural y humano que ha traído consigo la hipermediación de la técnica, en la medida en que ésta dificulta nuestra capacidad de mirarnos a nosotros mismos “como una persona aparte” (la llamada “metaconsciencia”). E igualmente, es fácil proyectar socialmente sus observaciones acerca de nuestra capacidad individual para manipular los recuerdos (para darnos y dar a los demás una imagen de *lo que queremos ser*) hasta convertirlos en creencias.

Sin embargo, O’Keane nos muestra a la vez —como ya hiciera Henri Bergson hace más de un siglo— la capacidad inagotable que la cabeza nos proporciona para “narrativizar” nuestras vidas, lo que significa que no existe ningún condicionante determinista que impida trascender el relato oficial acerca del tiempo que nos ha tocado vivir.

La ciencia de la consciencia, por tanto, confirma la legitimidad y la necesidad de crear las condiciones para que se generalicen, antes de que sea demasiado tarde, “nuevos niveles de conciencia” sobre de la insostenibilidad (social, económica, política) de la desigualdad, o sobre los problemas de especie que nos acechan.

Antonio Giménez Merino
24/8/2022

Quique Peinado

Futbolistas de izquierdas

Fuera de Ruta, Valencia, 2022, 475 pags.

Otro fútbol es posible

El periodista Quique Peinado teje en este libro (que va por su tercera edición, ésta con dos capítulos inéditos) un conjunto de entrevistas y relatos bien documentados acerca de las historias personales y sociales de futbolistas que

se han significado —con los consiguientes costes personales y contrariamente a la pauta dominante en ambientes privilegiados como éste— por hacer uso de su libertad para expresar opiniones políticamente incorrectas. Dentro de un submundo tremendamente mercantilizado como ese, icónico del capitalismo rampante e intolerante con la diversidad, las actitudes de los deportistas tachados por la prensa como “díscolos”, “rojos” o “antisistema” que desfilan por las páginas del libro, motivadas por su sensibilidad social, son las que permiten al autor ubicarlos, originalmente, como “futbolistas de izquierda”.

Lejos de la falsa idea de la unión a través de “los colores” o “la bandera”, y más lejos aún del tópico conformista de que el fútbol (el deporte de masas alienante y deseducador por antonomasia) debe separarse de la política, este libro es la prueba de que el fútbol, como cualquier otra actividad con trascendencia pública, es un campo social en el que se ponen en juego importantes disputas simbólicas y, por tanto, en el que las actitudes individuales y colectivas *cuentan*.

Dada la gran instrumentalización del fútbol para adocenas, manipular emociones y crear falsas identidades (¿hay algo más político que eso?), el hincha embebido por el *show* y sus voceros pierde muchas veces de vista que sus vínculos sociales reales se tejen en una arena bien distinta. Puede que este libro sirva para abrirle los ojos: El *culé* recalcitrante encontrará en él, para su estupefacción, relatos sobre jugadores merengues republicanos, solidarios e izquierdistas, o la del jugador *periquito* que se negó a dar la mano a Pinochet (el gran Carlos Humberto Caszely). El merengue y el periquito, a su vez, conocerán la historia del defensa y capitán barcelonista Juan Carlos, señalado como *rojo* a depurar tras el golpe fallido de 1981.

De la mano de sus protagonistas, Peinado destapa en este libro todos los tabúes que envuelven el fútbol, cuya transgresión significa el ostracismo. Desfilan por él comunistas, sindicalistas, objetores de conciencia, feministas, gais, antiimperialistas, antirracistas, altermundistas, antifascistas o independentistas, de regiones y tiempos muy diversos. Muchos de ellos y de ellas (pues también aparecen algunas jugadoras), simples trabajadores o deportistas de éxito que no renunciaron a su identidad de origen, por lo que hubieron de pagar un alto precio que vale la pena conocer.

Relatos, pues, que unen y que van mucho más allá del fútbol, lo que hace de este libro, muy ameno, una lectura recomendable para cualquier público.

Antonio Giménez Merino
25/8/2022

Ana Luísa Amaral

Oración en el Mediterráneo

En vez de peces, Señor,
danos paz,
un mar que sea de olas inocentes,
y una vez en la arena
gente que mire con el corazón abierto,
voces que nos acepten
El viaje es tan difícil
que hasta la espuma hiere y hierve,
y es tan alta que ciega
durante la entera travesía
Haz, Señor, que no haya
muertos esta vez,
deja las rocas lejos,
que el viento amaine
y que tu paz por fin
se multiplique
Que después de la balsa
la guerra, la fatiga,

tras los brazos abiertos y sonoros,
haya, Señor,
un poco de pan tierno
y un pescado, tal vez,
del mar
que es también nuestro

De *Ágora* (2019)

Trad. de Marisa Martínez Pérsico

Fuente: [infoLibre](#)

Testamento

Voy a partir en avión
Y el miedo a las alturas mezclado conmigo
Me hace tomar calmantes y tener sueños confusos

Si me muero
Quiero que mi hija no se olvide de mí
Que alguien le cante aunque sea con voz desafinada
Y que le ofrezcan fantasía
Más que un horario correcto
O una cama bien hecha

Denle amor y háganla ver
Dentro de las cosas
Soñar con soles azules y cielos brillantes
En vez de enseñarle a sumar
Y a pelar patatas

Preparen a mi hija para la vida
Si muero en avión
Y quedo despegada de mi cuerpo
Y fuera átomo libre allá en el cielo

Que se acuerde de mí
Mi hija
Y más tarde que diga a su hija
Que yo volé allá en el cielo
Y fui regocijo deslumbrado
Al ver en su casa las sumas mal hechas
Y las patatas en la bolsa olvidadas
E intactas.

De Minha senhora de quê (1990)

Trad. de Rosana Alija

[Ana Luísa Amaral, escritora y profesora de literatura angloamericana en la Universidade do Porto, fue una de las principales autoras contemporáneas de Portugal, y una figura clave en el movimiento y los estudios feministas del país. Nacida en Lisboa en 1956, falleció en Oporto el 6 de agosto de 2022].

27/8/2022